



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL LECTORAL

**COMPILACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN ELECTORAL DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
2006**



PRESENTACIÓN

La Junta Central Electoral, integrada por su presidente, Dr. Luis Arias Núñez y por sus demás Miembros Titulares, Dra. Rafaelina Peralta A. de Guzmán, Dr. Salvador Ramos, Presidente de la Cámara Contenciosa, Dr. Nelson José Gómez, Presidente de la Cámara Administrativa, Dr. Luis Nelson Pantaleón González, Dr. Rafael Díaz Vásquez, Dr. José Luis Tavárez Tavárez, Dr. Roberto Rosario Márquez, Dr. Ramón Hernández Domínguez, ha dispuesto la edición del presente documento, el cual contiene la vigente Constitución de la República Dominicana y la Ley Electoral 275-97 con todas sus modificaciones incorporadas.

Este documento será distribuido entre los Partidos Políticos, las Juntas Electorales y los Colegios Electorales, que participarán en las Elecciones Generales Ordinarias de los niveles Congressional y Municipal del próximo 16 de Mayo del año 2006 para elegir los Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores en todo el territorio de la República.

Conociendo de la importancia de este documento especialmente para todos aquellos que contribuyen al fortalecimiento democrático nacional mediante el logro de procesos electorales seguros y transparentes, de antemano entendemos que esta publicación será bien acogida por la ciudadanía en general.

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral



ÍNDICE GENERAL

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
- LEY ELECTORAL No. 275-97 Y SUS MODIFICACIONES
- REGLAMENTOS
- RESOLUCIONES



**CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

ÍNDICE

TÍTULO I	15
SECCIÓN I	
De la Nación, de su Soberanía y de su Gobierno	15
Artículo 1.	15
Artículo 2.	15
Artículo 3.	15
Artículo 4.	18
SECCIÓN II	
Del Territorio	16
Artículo 5.	16
Artículo 6.	17
SECCIÓN III	
Del Régimen Económico y Social Fronterizo	17
Artículo 7.	17
TÍTULO II	17
SECCIÓN I	
De los Derechos Individuales y Sociales	17
Artículo 8.	17
SECCIÓN II	
De los Deberes	23
Artículo 9.	23
Artículo 10.	24
TÍTULO III	
DERECHOS POLÍTICOS	25
SECCIÓN I	
De la Nacionalidad	25
Artículo 11.	25
SECCIÓN II	
De la Ciudadanía	26
Artículo 12.	26

Artículo 13.	26
Artículo 14.	26
Artículo 15.	26
TÍTULO IV.....	27
SECCIÓN I	
Del Poder Legislativo	27
Artículo 16.	27
Artículo 17.	27
Artículo 18.	27
Artículo 19.	27
Artículo 20.	27
SECCIÓN II	
Del Senado	27
Artículo 21.	27
Artículo 22.	29
Artículo 23.	28
SECCIÓN III	
De la Cámara de Diputados	28
Artículo 24.	28
Artículo 25.	29
Artículo 26.	29
SECCIÓN IV	
Disposiciones comunes a ambas Cámaras	29
Artículo 27.	29
Artículo 28.	29
Artículo 29.	29
Artículo 30.	30
Artículo 31.	30
Artículo 32.	30
Artículo 33.	31
Artículo 34.	31
Artículo 35.	31
Artículo 36.	32

SECCIÓN V	
Del Congreso	32
Artículo 37.	32
SECCIÓN VI	
De la formación y Efecto de las Leyes	34
Artículo 38.	34
Artículo 39.	34
Artículo 40.	35
Artículo 41.	35
Artículo 42.	36
Artículo 43.	36
Artículo 44.	36
Artículo 45.	36
Artículo 46.	36
Artículo 47.	36
Artículo 48.39	
TÍTULO V	39
SECCIÓN I	
Del Poder Ejecutivo	37
Artículo 49.	37
Artículo 50.	37
Artículo 51.	37
Artículo 52.	37
Artículo 53.	38
Artículo 54.	38
Artículo 55.	38
Artículo 56.	42
Artículo 57.	42
Artículo 58.	42
Artículo 59.	42
Artículo 60.	42
SECCIÓN II	
De los Secretarios de Estado	42
Artículo 61.	42
Artículo 62.	45

TÍTULO VI	43
SECCIÓN I	
Del Poder Judicial	43
Artículo 63.	43
SECCIÓN II	
De la Suprema Corte de Justicia	44
Artículo 64.	44
Artículo 65.	45
Artículo 66.	45
Artículo 67.	45
SECCIÓN III	
De las Cortes de Apelación	47
Artículo 68.	47
Artículo 69.	47
Artículo 70.	47
Artículo 71.	48
SECCIÓN IV	
Del Tribunal de Tierras	48
Artículo 72.	48
SECCIÓN V	
De los Juzgados de Primera Instancia	48
Artículo 73.	48
Artículo 74.	49
Artículo 75.	49
SECCIÓN VI	
De los Juzgados de Paz	49
Artículo 76.	49
Artículo 77.	49
TÍTULO VII	
DE LA CAMARA DE CUENTAS	49
Artículo 78.	49
Artículo 79.	50
Artículo 80.	50

Artículo 81.	50
TÍTULO VIII	
DEL DISTRITO NACIONAL Y DE LOS MUNICIPIOS	50
Artículo 82.	50
Artículo 83.	51
Artículo 84.	51
Artículo 85.	51
TÍTULO IX	
DEL REGIMEN DE LAS PROVINCIAS	51
Artículo 86.	51
Artículo 87.	51
TÍTULO X	
DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES	52
Artículo 88.	52
Artículo 89.	52
Artículo 90.	52
Artículo 91.	53
Artículo 92.	53
TÍTULO XI	
DE LAS FUERZAS ARMADAS	53
Artículo 93.	53
Artículo 94.	53
TÍTULO XII	
DISPOSICIONES GENERALES	53
Artículo 95.	53
Artículo 96.	54
Artículo 97.	54
Artículo 98.	54
Artículo 99.	54
Artículo 100.	55
Artículo 101.	55
Artículo 102.	55
Artículo 103.	55

Artículo 104.	55
Artículo 105.	55
Artículo 106.	56
Artículo 107.	56
Artículo 108.	56
Artículo 109.	56
Artículo 110.	56
Artículo 111.	57
Artículo 112.	57
Artículo 113.	57
Artículo 114.	58
Artículo 115.	58
TÍTULO XIII	
DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES	60
Artículo 116.	60
Artículo 117.	60
Artículo 118.	60
Artículo 119.	60
Artículo 120.	60
TÍTULO XIV	
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	61
Artículo 121.	61
Artículo 122.	61

LA ASAMBLEA NACIONAL

En nombre de la República
Constituida en Asamblea Revisora de la Constitución,
declara en vigor el siguiente texto de la

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

TÍTULO I

SECCIÓN I

De la Nación, de su Soberanía y de su Gobierno.

Artículo 1.

El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

Artículo 2.

La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por representación.

Artículo 3.

La Soberanía de la Nación dominicana, como Estado libre e independiente, es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.



La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas.

Artículo 4.

El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

SECCIÓN II

Del Territorio

Artículo 5.

El territorio de la República Dominicana es y será inalienable. Está integrado por la parte oriental de la Isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929, y su Protocolo de Revisión de 1936.

Se divide políticamente en un Distrito Nacional, en el cual estará comprendida la capital de la República, y en las provincias que determine la ley. Las provincias, a su vez se dividen en municipios.

Son también partes del territorio nacional, el mar territorial y el suelo y subsuelo submarinos correspondientes, así como el espacio aéreo sobre ellos comprendido. La extensión del mar territorial, del espacio aéreo y de la zona contigua y su defensa, lo mismo que las del suelo y subsuelo submarinos y su aprovechamiento, serán establecidos y regulados por la ley.

La ley fijará el número de las provincias, determinará sus nombres y los límites de éstas y del Distrito Nacional, así como



los de los municipios en que aquellas se dividen, y podrá crear también, con otras denominaciones, nuevas divisiones políticas del territorio.

Artículo 6.

La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es la capital de la República y el asiento del gobierno nacional.

SECCIÓN III

Del Régimen Económico y Social Fronterizo

Artículo 7.

Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como la difusión en el mismo de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano. El aprovechamiento agrícola e industrial de los ríos fronterizos se continuará regulando por los principios consagrados en el Artículo 6to. del Protocolo de Revisión de 1936 del Tratado de Frontera de 1929, y en el Artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929.

TÍTULO II

SECCIÓN I

De los Derechos Individuales y Sociales

Artículo 8.

Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:

1. La inviolabilidad de la vida. En consecuencia no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena



o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo.

2. La seguridad individual. En consecuencia:

- a) No se establecerá al apremio corporal por deuda que no proviniera de infracción a las leyes penales.
- b) Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito.
- c) Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta inmediatamente en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona.
- d) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad.
- e) Todo arresto se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo notificarse al interesado dentro del mismo plazo, la providencia que al efecto se dictare.
- f) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de la autoridad judicial competente.
- g) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido estará obligada a presentarlo tan pronto como se lo requiera la autoridad competente.
- h) La Ley de Habeas Corpus, determinará la manera de proceder sumariamente para el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las letras a), b), c), d), e), f) y g) y establecerá las sanciones que procedan.
- i) Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa.



- j) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo.
 - k) Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres.
3. La inviolabilidad de domicilio. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella prescribe.
 4. La libertad de tránsito, salvo las restricciones que resultaren de las penas impuestas judicialmente, o de las leyes de policía, de inmigración y de sanidad.
 5. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedirle lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes.
 6. Se prohíbe toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o a crítica de los preceptos legales.
 7. La libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres.



8. La libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.
9. La inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la substanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.
10. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional.
11. La libertad de trabajo. La ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean manuales o intelectuales.
 - a) La organización sindical es libre, siempre que los sindicatos, gremios u otras asociaciones de la misma índole se ajusten en sus estatutos y en su conducta a una organización democrática compatible con los principios consagrados en esta Constitución y para fines estrictamente laborales y pacíficos.
 - b) El Estado facilitará los medios a su alcance para que los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor.
 - c) El alcance y la forma de la participación de los trabajadores permanentes en los beneficios de toda empresa agrícola, industrial, comercial o minera, podrán ser fijados por la ley de acuerdo con la naturaleza de la empresa y respetando tanto el interés legítimo del empresario como el del obrero.



- d) Se admite el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales. Se prohíbe toda interrupción, entorpecimiento, paralización de actividades o reducción intencional de rendimiento en las labores de las empresas privadas o del Estado. Será ilícita toda huelga, paro, interrupción, entorpecimiento o reducción intencional de rendimiento que afecten la Administración, los servicios públicos o los de utilidad pública. La Ley dispondrá las medidas necesarias para garantizar la observancia de estas normas.
12. La libertad de empresa, comercio e industria. Solo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley.
13. El derecho de propiedad. En consecuencia, nadie puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por sentencia de tribunal competente. En casos de calamidad pública, la indemnización podrá no ser previa. No podrá imponerse la pena de confiscación general de bienes por razones de orden político.
- a) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Se destinan a los planes de la Reforma Agraria las tierras que pertenezcan al Estado o las que éste adquiera de grado a grado o por expropiación, en la forma prescrita por esta Constitución, que no estén destinadas o deban destinarse por el Estado a otros fines de interés general. Se declara igualmente como un objetivo principal de la política social del Estado el estímulo y cooperación para integrar efectivamente a la vida nacional la población campesina, mediante la renovación de los métodos de la producción agrícola y la capacitación cultural y tecnológica del hombre campesino.



- b) El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista.
14. La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias.
15. Con el fin de robustecer su estabilidad y bienestar, su vida moral, religiosa y cultural, la familia recibirá del Estado la más amplia protección posible.
- a) La maternidad, sea cual fuere la condición o el estado de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y tiene derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo. El Estado tomará las medidas de higiene y de otro género tendentes a evitar en lo posible la mortalidad infantil y a obtener el sano desarrollo de los niños. Se declara, asimismo, de alto interés social, la institución del bien de familia. El Estado estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de producción, de distribución, de consumo o de cualesquiera otras que fueren de utilidad.
- b) Se declara de alto interés social el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno o mejoras propias. Con esta finalidad, el Estado estimulará el desarrollo del crédito público en condiciones socialmente ventajosas, destinado a hacer posible que todos los dominicanos posean una vivienda cómoda e higiénica.
- c) Se reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia.
- d) La mujer casada disfrutará de plena capacidad civil. La ley establecerá los medios necesarios para proteger los derechos patrimoniales de la mujer casada, bajo cualquier régimen.
16. La libertad de enseñanza. La educación primaria será obligatoria. Es deber del Estado proporcionar la educación fundamental a todos los habitantes del territorio nacional y tomar las providencias necesarias para eliminar el



analfabetismo. Tanto la educación primaria y secundaria, como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica serán gratuitas. El Estado procurará la más amplia difusión de la ciencia y la cultura, facilitando de manera adecuada que todas las personas se beneficien con los resultados del progreso científico y moral.

17. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez.

El Estado prestará su protección y asistencia a los ancianos en la forma que determine la ley, de manera que se preserve su salud y se asegure su bienestar.

El Estado prestará, asimismo, asistencia social a los pobres. Dicha asistencia consistirá en alimentos, vestimenta y hasta donde sea posible, alojamiento adecuado.

El Estado velará por el mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios y las condiciones higiénicas, procurará los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas y de toda otra índole, así como también dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes, por sus escasos recursos económicos, así lo requieran.

El Estado combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y organizaciones internacionales. Para la corrección y erradicación de tales vicios, se crearán centros y organismos especializados.

SECCIÓN II

De los Deberes

Artículo 9.

Atendiendo a que las prerrogativas reconocidas y garantizadas en el artículo precedente de esta Constitución suponen la existencia de un orden correlativo de responsabilidad jurídica y moral que



obliga la conducta del hombre en sociedad, se declaran como deberes fundamentales los siguientes:

- a) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas.
- b) Todo dominicano hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación.
- c) Los habitantes de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, independencia o soberanía y estarán, en caso de calamidad pública, obligados a prestar los servicios de que sean capaces.
- d) Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar, siempre que esté legalmente capacitado para hacerlo.
- e) Contribuir en proporción a su capacidad contributiva para las cargas públicas.
- f) Toda persona tiene la obligación de dedicarse a un trabajo de su elección con el fin de proveer dignamente a su sustento y al de su familia, alcanzar el más amplio perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad.
- g) Es obligación de todas las personas que habitan el territorio de la República Dominicana, asistir a los establecimientos educativos de la Nación para adquirir, por lo menos, la instrucción elemental.
- h) Toda persona está en el deber de cooperar con el Estado en cuanto a asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades.
- i) Es deber de todo extranjero abstenerse de participar en actividades políticas en territorio dominicano.

Artículo 10.

La enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa, y por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza.



TÍTULO III

DERECHOS POLÍTICOS

SECCIÓN I

De la Nacionalidad

Artículo 11.

Son dominicanos:

1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él.
2. Las personas que al presente estén investidas de esta calidad en virtud de constituciones y leyes anteriores.
3. Todas las personas nacidas en el extranjero, de padre o madre dominicanos, siempre que, de acuerdo con las leyes del país de nacimiento, no hubieren adquirido una nacionalidad extraña; o que, en caso de haberla adquirido, manifestaren, por acto ante un oficial público remitido al Poder Ejecutivo, después de alcanzar la edad de diez y ocho (18) años, su voluntad de optar por la nacionalidad dominicana.
4. Los naturalizados. La ley dispondrá las condiciones y formalidades requeridas para la naturalización.

PÁRRAFO I. Se reconoce a los dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera.

PÁRRAFO II. La mujer dominicana casada con un extranjero podrá adquirir la nacionalidad de su marido.

PÁRRAFO III. La mujer extranjera que contrae matrimonio con un dominicano seguirá la condición de su marido, a menos que las leyes de su país le permitan conservar su nacionalidad, caso en el cual tendrá la facultad de declarar, en el acta de matrimonio, que declina la nacionalidad dominicana.

PÁRRAFO IV. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, los dominicanos que adquieran otra nacionalidad no podrán optar por la Presidencia o Vicepresidencia de la República.

SECCIÓN II

De la Ciudadanía

Artículo 12.

Son ciudadanos todos los dominicanos de uno y otro sexo que hayan cumplido 18 años de edad, y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad.

Artículo 13.

Son derechos de los ciudadanos:

1. El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el Artículo 90 de la Constitución.
2. El de ser elegibles para ejercer los mismos cargos a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 14.

Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable por traición, espionaje o conspiración contra la República, o por tomar las armas, prestar ayuda o participar en cualquier atentado contra ella.

Artículo 15.

Los derechos de ciudadanía quedan suspendidos en los casos de:

- a) Condenación irrevocable a pena criminal, hasta la rehabilitación.
- b) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure.
- c) Por admitir en territorio dominicano función o empleo de un gobierno extranjero, sin previa autorización del Poder Ejecutivo.



TÍTULO IV

SECCIÓN I

Del Poder Legislativo

Artículo 16.

El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de la República, compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados.

Artículo 17.

La elección de Senadores y de Diputados se hará por voto directo.

Artículo 18.

Los cargos de Senador y de Diputado son incompatibles con cualquier otra función o empleo de la administración pública.

Artículo 19.

Cuando ocurran vacantes de Senadores o de Diputados, la Cámara correspondiente escogerá el sustituto de la terna que le presentará el organismo superior del partido que lo postuló.

Artículo 20.

La terna deberá ser sometida a la Cámara donde se haya producido la vacante, dentro de los treinta días siguientes a su ocurrencia, si estuviere reunido el Congreso, y en caso de no estarlo, dentro de los treinta primeros días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado sin que el organismo competente del partido hubiese sometido la terna, la Cámara correspondiente hará libremente la elección.

SECCIÓN II

Del Senado

Artículo 21.

El Senado se compondrá de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará un período de cuatro años.



Artículo 22.

Para ser Senador se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad y ser nativo de la circunscripción territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos.

PÁRRAFO. Los naturalizados no podrán ser elegidos Senadores sino diez años después de haber adquirido la nacionalidad, y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdicción que los elija durante los cinco años que precedan a su elección.

Artículo 23.

Son atribuciones del Senado:

1. Elegir el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes.
2. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.
3. Aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expida el Poder Ejecutivo.
4. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un período determinado, por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En materia de acusación, el Senado no podrá imponer otras penas que las de destitución del cargo. La persona destituida quedará sin embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la ley.

El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros.

SECCIÓN III

De la Cámara de Diputados

Artículo 24.

La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provincias y del



Distrito Nacional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de veinticinco mil, sin que en ningún caso sean menos de dos.

Artículo 25.

Para ser Diputado se requiere las mismas condiciones que para ser Senador.

PÁRRAFO. Los naturalizados no podrán ser elegidos Diputados sino diez años después de haber adquirido la nacionalidad y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdicción que los elija durante los cinco años que precedan a su elección.

Artículo 26.

Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos en los casos determinados por el Acápito 5 del Artículo 23. La acusación no podrá formularse sino con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Cámara.

SECCIÓN IV

Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 27.

Las Cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en los casos indicados por la Constitución, debiendo estar presentes más de la mitad de los miembros de cada una de ellas.

Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos.

Artículo 28.

Cada Cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer las sanciones que procedan.

Artículo 29.

El Senado y la Cámara de Diputados celebrarán sus sesiones separadamente, excepto cuando se reúnan en Asamblea Nacional.

PÁRRAFO. Podrán también reunirse conjuntamente para recibir el mensaje del Presidente de la República y las memorias de los Secretarios de Estado, a que se refiere el Artículo 55, Inciso 22, y para la celebración de actos conmemorativos o de otra naturaleza que no se relacionen con el ejercicio de las atribuciones legislativas de cada Cámara ni de las que están señaladas por esta Constitución como exclusivas de cada una de ellas.

Artículo 30.

En cada Cámara será necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, en que decidirán las dos terceras partes de los votos, en su segunda discusión.

Artículo 31.

Los miembros de una y otra Cámara gozarán de la más completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones.

Artículo 32.

Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen. En todos los casos, el Senado o la Cámara de Diputados, o si éstos no están en sesión o no constituyen quórum, cualquier miembro podrá exigir que sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido detenido, arrestado, preso o privado en cualquier otra forma de su libertad. A este efecto se hará un requerimiento por el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o por el Senador o Diputado, según el caso, al Procurador General de la República; y si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado, por todo depositario de la fuerza pública, el apoyo de ésta.

**Artículo 33.**

Las Cámaras se reunirán ordinariamente el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año y cada legislatura durará noventa días, la cual podrá prorrogarse hasta por sesenta días más.

PÁRRAFO. Se reunirán extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo.

Artículo 34.

El 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos Bufetes Directivos, integrados por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios.

PÁRRAFO I. Cada Cámara designará sus empleados auxiliares.

PÁRRAFO II. El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán durante las sesiones poderes disciplinarios y representarán a su respectiva Cámara en todos los actos legales.

Artículo 35.

Cuando las Cámaras se reúnan en Asamblea Nacional o en reunión conjunta, asumirá la Presidencia el Presidente del Senado; la Vicepresidencia la ocupará la persona a quien corresponda en ese momento presidir la Cámara de Diputados, y la Secretaría las personas a quienes corresponda en ese momento las funciones de Secretarios de cada Cámara.

PÁRRAFO I. En caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado, y mientras no sea elegido el nuevo Presidente de dicha Cámara Legislativa, presidirá la Asamblea Nacional o la reunión conjunta el Presidente de la Cámara de Diputados.

PÁRRAFO II. En caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de Diputados, presidirá la Asamblea o la reunión conjunta el Vicepresidente del Senado, y, en su defecto, el Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Artículo 36.

Corresponde a la Asamblea Nacional examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente de la República, proclamarlos y, en su caso, recibirles juramento, aceptarles o rechazarles las renunciaciones y ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución.

SECCIÓN V

Del Congreso

Artículo 37.

Son atribuciones del Congreso:

1. Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión.
2. Aprobar o desaprobado, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
3. Conocer de las observaciones que a las leyes haga el Poder Ejecutivo.
4. Proveer a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el Inciso 10 del Artículo 55 y el Artículo 110.
5. Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y objetos antiguos y a la adquisición de éstos últimos.
6. Crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones políticas del territorio y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo estudio que demuestre la conveniencia social, política y económica justificativa del cambio.
7. En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio o suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su duración, el ejercicio de los derechos individuales



consagrados en el Artículo 8, en sus Incisos 2, letras b), c), d), e), f), g), y 3, 4, 6, 7 y 9.

8. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la inviolabilidad de la vida, tal como lo consagra el Inciso 1) del Artículo 8 de esta Constitución. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, que conllevará convocatoria del mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas.
9. Disponer todo lo relativo a la migración.
10. Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir tribunales ordinarios o de excepción.
11. Crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos contencioso-administrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia.
12. Votar el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y aprobar o no los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo.
13. Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo.
14. Aprobar o desaprobado los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo. \
15. Legislar cuanto concierne a la deuda nacional.
16. Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional.
17. Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días.
18. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
19. Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República de conformidad con el Inciso 10 del Artículo 55 y con el Artículo 110.



20. Decretar el traslado de las Cámaras Legislativas fuera de la capital de la República, por causa de fuerza mayor justificada o mediante convocatoria del Presidente de la República.
21. Conceder amnistía por causas políticas.
22. Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos Autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros.
23. Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del Estado o contraria a la Constitución.

SECCIÓN VI

De la formación y Efecto de las Leyes

Artículo 38.

Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes:

- a) Los Senadores y los Diputados.
- b) El Presidente de la República.
- c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.
- d) La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

PÁRRAFO. El que ejerza ese derecho podrá sostener su moción en la otra Cámara, si es el caso del Inciso a) de este artículo, y en ambas Cámaras mediante representante si se trata de uno cualquiera de los otros tres casos.

Artículo 39.

Todo proyecto de ley admitido en una de las Cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuere declarado previamente de urgencia deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas.

**Artículo 40.**

Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las Cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, observándose en ellas las mismas formas constitucionales. Si esta Cámara le hiciere modificaciones, devolverá dicho proyecto con observaciones a la Cámara en que se inició, y, en caso de ser aceptadas, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Pero si aquellas fueren rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra Cámara con observaciones; y si ésta las aprueba, enviará a su vez la ley al Poder Ejecutivo. Si fueren rechazadas las observaciones, se considerará desechado el proyecto.

Artículo 41.

Toda ley aprobada en ambas Cámaras será enviada al Poder Ejecutivo. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los ocho días de recibida y la hará publicar dentro de los quince días de la promulgación. Si la observare, la devolverá a la Cámara de donde procedió en el término de ocho días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado de urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el término de tres días. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley. Si después de esta discusión, las dos terceras partes del número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley. El Presidente de la República estará obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados.

PÁRRAFO I. Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera de las dos Cámaras al cerrarse la legislatura, deberán seguir los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o ser rechazados. Cuando esto no ocurriese así, se tendrá el proyecto como no iniciado.

PÁRRAFO II. Todo proyecto de ley recibido en una Cámara, después de haber sido aprobado en la otra, será fijado en el orden del día.



Artículo 42.

Cuando fuere enviada una ley al Presidente de la República para su promulgación y el tiempo que faltare para el término de la legislatura fuere inferior al que se determina en el precedente artículo para observarla, seguirá abierta la legislatura para conocer de las observaciones hasta el agotamiento de los plazos y del procedimiento establecido por el Artículo 41.

Las leyes, después de publicadas, son obligatorias para todos los habitantes de la República, si ha transcurrido el tiempo legal para que se reputen conocidas.

Artículo 43.

Los proyectos de ley rechazados en una Cámara no podrán presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.

Artículo 44.

Las leyes se encabezarán así: “El Congreso Nacional. En nombre de la República”.

Artículo 45.

Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que por la ley se determine, y serán obligatorias una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en cada parte del territorio nacional.

Artículo 46.

Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Artículo 47.

La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub-júdice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

**Artículo 48.**

Las leyes relativas al orden público, la policía, la seguridad y las buenas costumbres, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares.

TÍTULO V**SECCIÓN I****Del Poder Ejecutivo****Artículo 49.**

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República.

Artículo 50.

Para ser Presidente de la República se requiere:

1. Ser dominicano de nacimiento u origen.
2. Haber cumplido 30 años de edad.
3. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
4. No estar en servicio militar o policial activo, por lo menos durante el año que preceda a la elección.

Artículo 51.

Habrá un Vicepresidente de la República, que será elegido en la misma forma y por igual período que el Presidente y conjuntamente con éste. Para ser Vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente.

Artículo 52.

El Presidente y el Vicepresidente de la República, electos en los comicios generales, prestarán juramento de sus cargos el 16 de agosto siguiente a su elección, fecha en que deberá terminar el período de los salientes. Cuando el Presidente de la República electo no

pudiere hacerlo por encontrarse fuera del país o por enfermedad o por cualquiera otra causa de fuerza mayor, ejercerá las funciones de Presidente de la República interinamente el Vicepresidente de la República electo, y, a falta de éste, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 53.

Si el Presidente de la República electo faltare definitivamente sin prestar juramento de su cargo, el Vicepresidente de la República electo lo sustituirá y, a falta de éste, se procederá en la forma indicada en el Artículo 60.

Artículo 54.

El Presidente y el Vicepresidente de la República, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional o ante cualquier funcionario u oficial público, el siguiente juramento: “Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo”.

Artículo 55.

El Presidente de la República es el jefe de la administración pública y el jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República y de los cuerpos policiales.

Corresponde al Presidente de la República:

1. Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningún otro poder u organismo autónomo reconocido por esta Constitución o por las leyes, aceptarles sus renunciaciones y removerlos.
2. Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario.



3. Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.
4. Nombrar, con la aprobación del Senado, los miembros del Cuerpo Diplomático, aceptarles sus renunciaciones y removerlos.
5. Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus representantes.
6. Presidir todos los actos solemnes de la Nación, dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras u organismos internacionales, debiendo someterlos a la aprobación del Congreso, sin lo cual no tendrán validez ni obligarán a la República.
7. En caso de alteración de la paz pública, y si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, decretar, donde aquella exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio de los derechos que, según el Artículo 37, Inciso 7 de esta Constitución, se permite al Congreso suspender. Podrá también, en caso de que la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, declarar el estado de emergencia nacional, con los efectos y requisitos indicados en el Inciso 8 del mismo artículo. En caso de calamidad pública podrá, además, decretar zonas de desastres aquellas en que se hubieren producido daños, ya sea a causa de meteoros, sismos, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, así como a consecuencia de epidemias.
8. En caso de violación de las disposiciones contenidas en los apartados a) y d) del Inciso 10 del Artículo 8 de esta Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden público, la seguridad del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas, el Presidente de la República adoptará las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para conjurar la emergencia, debiendo informar al Congreso de esa emergencia y de las medidas adoptadas.



9. Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, de los Jueces de Instrucción, de los Jueces de Paz, del Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral, así como los miembros de la Cámara de Cuentas, cuando esté en receso el Congreso, con la obligación de informar al Senado de dichos nombramientos en la próxima legislatura para que éste provea los definitivos.
10. Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de veinte mil pesos oro o al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general de acuerdo con el Artículo 110; sin tal aprobación en los demás casos.
11. Cuando ocurran vacantes en los cargos de Regidores o Síndicos Municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de Suplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que le someterá el partido que postuló el Regidor o Síndico que originó la vacante. La terna deberá ser sometida al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días siguientes al de la ocurrencia de la vacante; de no ser sometida dicha terna en el indicado plazo, el Poder Ejecutivo hará la designación correspondiente.
12. Expedir o negar patentes de navegación.
13. Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Aduanas.
14. Disponer, en todo tiempo, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas de la Nación, mandarlas por sí mismo o por medio de la persona o personas que designe para hacerlo, conservando siempre su condición de Jefe Supremo de las mismas; fijar el número de dichas fuerzas y disponer de ellas para fines del servicio público.
15. Tomar las medidas necesarias para proveer a la legítima defensa de la Nación en caso de ataque armado actual o



- inminente de parte de nación extranjera, debiendo informar al Congreso sobre las disposiciones así adoptadas.
16. Hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades, a su juicio, fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o a las buenas costumbres.
 17. Nombrar o revocar los Miembros de los Consejos de Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
 18. Disponer todo lo relativo a zonas aéreas, marítimas, fluviales y militares.
 19. Determinar todo lo relativo a la habilitación de puertos y costas marítimas.
 20. Prohibir, cuando lo estime conveniente al interés público, la entrada de extranjeros en el territorio nacional.
 21. Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario.
 22. Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera Legislatura Ordinaria el 27 de febrero de cada año, un mensaje acompañado de las memorias de los Secretarios de Estado, en el cual dará cuenta de su administración del año anterior.
 23. Someter al Congreso, durante la segunda legislatura ordinaria, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al año siguiente.
 24. Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organizaciones internacionales en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros.
 25. Anular por decreto motivado los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.
 26. Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar inmuebles, y aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales.
 27. Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condicional, en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, con arreglo a la ley.

**Artículo 56.**

El Presidente de la República no podrá salir al extranjero por más de quince días sin autorización del Congreso.

Artículo 57.

El Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán renunciar sino ante la Asamblea Nacional.

Artículo 58.

En caso de falta temporal del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, ejercerá el Poder Ejecutivo, mientras dure esa falta, el Vicepresidente de la República; y a falta de éste, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 59.

En caso de falta definitiva del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, desempeñará la Presidencia de la República por el tiempo que falte para la terminación del período, el Vicepresidente de la República.

Artículo 60.

En caso de que el Vicepresidente de la República faltare definitivamente, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 15 días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija el sustituto definitivo, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso, hasta haber realizado la elección. En el caso de que, por cualquier circunstancia, no pudiere hacerse tal convocatoria, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho, inmediatamente, para llevar a cabo la elección en la forma arriba prevista.

SECCIÓN II**De los Secretarios de Estado****Artículo 61.**

Para el despacho de los asuntos de la administración pública, habrá las Secretarías de Estado que sean creadas por la ley.



También podrán crearse por la ley las Subsecretarías de Estado que se consideren necesarias, y que actuarán bajo la subordinación y dependencia del Secretario de Estado correspondiente.

Para ser Secretario o Subsecretario de Estado se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de 25 años.

PÁRRAFO. Los naturalizados no podrán ser Secretarios ni Subsecretarios de Estado sino diez años después de haber adquirido la nacionalidad.

Artículo 62.

La ley determinará las atribuciones de los Secretarios de Estado.

TÍTULO VI

SECCIÓN I

Del Poder Judicial

Artículo 63.

El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial creados por esta Constitución y las leyes. Este poder gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.

PÁRRAFO I. La ley reglamentará la carrera judicial y el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial.

PÁRRAFO II. Los funcionarios del orden judicial no podrán ejercer otro cargo o empleo público, salvo lo que se dispone en el Artículo 108.

PÁRRAFO III. Los jueces son inamovibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el Acápito 5 del Artículo 67.

PÁRRAFO IV. Una vez vencido el período por el cual fue elegido un juez, permanecerá en su cargo hasta que sea designado su sustituto.



SECCIÓN II

De la Suprema Corte de Justicia

Artículo 64.

La Suprema Corte de Justicia se compondrá de, por lo menos, once jueces, pero podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum que determine la ley, la cual reglamentará su organización.

PÁRRAFO I. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual estará presidido por el Presidente de la República y, en ausencia de éste, será presidido por el Vicepresidente de la República, y a falta de ambos, lo presidirá el Procurador General de la República. Los demás miembros serán:

1. El Presidente del Senado y un Senador escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente del Senado.
2. El Presidente de Cámara de Diputado y un Diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un Partido diferente al partido del Presidente de la Cámara de Diputados.
3. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
4. Un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de Secretario.

PÁRRAFO II. Al elegir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura dispondrá cuál de ellos deberá ocupar la Presidencia y designará un primero y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento.

PÁRRAFO III. En caso de cesación de un Juez investido con una de las calidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura elegirá un nuevo juez con la misma calidad o atribuirá esta a otro de los jueces.



Artículo 65.

Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia se requiere:

1. Ser dominicano por nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad.
2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
3. Ser licenciado o doctor en Derecho.
4. Haber ejercido durante, por lo menos, 12 años la profesión de abogado; o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de Juez de una Corte de Apelación, Juez de Primera Instancia o Juez del Tribunal de Tierras, o representante del Ministerio Público ante dichos tribunales. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse.

Artículo 66.

El Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia estará representado por el Procurador General de la República, personalmente o por medio de los sustitutos que la ley pueda crearle. Tendrá la misma categoría que el Presidente de dicha Corte y las atribuciones que le confieren las leyes.

Para ser Procurador General de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 67.

Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:

1. Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del

Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas y los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario; y de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada.

2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley.
3. Conocer, en último recurso de las causas cuyo conocimiento en primera instancia compete a las Cortes de Apelación.
4. Elegir los Jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los Jueces del Tribunal Contencioso Tributario y los Jueces de cualesquier otros tribunales del orden judicial creados por la ley, de conformidad a lo establecido en la Ley de Carrera Judicial.
5. Ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución en la forma que determine la ley.
6. Trasladar provisional o definitivamente, de una jurisdicción a otra, cuando lo juzgue útil, los Jueces de las Cortes de Apelación, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y los demás jueces de los tribunales que fueren creados por la ley.
7. Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Poder Judicial pueda cumplir cabalmente las atribuciones que le confiere esta Constitución y las leyes.
8. Nombrar todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial.
9. Fijar los sueldos y demás remuneraciones de los jueces y del personal administrativo perteneciente al Poder Judicial.



SECCIÓN III

De las Cortes de Apelación

Artículo 68.

Habrá, por lo menos, nueve Cortes de Apelación para toda la República. El número de jueces que deben componerlas, así como los distritos judiciales que a cada Corte correspondan, se determinarán por la ley.

PÁRRAFO I. Al elegir los Jueces de las Cortes de Apelación, la Suprema Corte de Justicia dispondrá cuál de ellos deberá ocupar la Presidencia, y designará un primero y segundo sustitutos para reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento.

PÁRRAFO II. En caso de cesación de un juez investido con una de las calidades arriba expresadas, la Suprema Corte de Justicia elegirá un nuevo juez con la misma calidad o atribuirá ésta a otro de los jueces.

Artículo 69.

Para ser juez de una Corte de Apelación se requiere:

1. Ser dominicano.
2. Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
3. Ser licenciado o doctor en Derecho.
4. Haber ejercido durante cuatro años la profesión de abogado, o haber desempeñado por igual tiempo, las funciones de Juez de Primera Instancia, de representantes del Ministerio Público ante los tribunales o de Juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse.

Artículo 70.

El Ministerio Público está representado en cada Corte de Apelación por un Procurador General, o por los sustitutos que la

ley pueda crearle, todos los cuales deberán reunir las mismas condiciones que los jueces de esas Cortes.

Artículo 71.

Son atribuciones de las Cortes de Apelación:

1. Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia.
2. Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a los Jueces de Primera Instancia, Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, Jueces de Instrucción, Procuradores Fiscales y Gobernadores provinciales.
3. Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.

SECCIÓN IV

Del Tribunal de Tierras

Artículo 72.

Las atribuciones del Tribunal de Tierras estarán determinadas por la ley.

PÁRRAFO. Para ser Presidente o Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para ser Juez de una Corte de Apelación, y para desempeñar el cargo de Juez de Jurisdicción Original, las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.

SECCIÓN V

De los Juzgados de Primera Instancia

Artículo 73.

En cada distrito judicial habrá un Juzgado de Primera Instancia, con las atribuciones que le confiere la ley.

PÁRRAFO. La ley determinará el número de los distritos judiciales, el número de los Jueces de que deben componerse los Juzgados de Primera Instancia, así como el número de cámaras en que éstos puedan dividirse.

**Artículo 74.**

Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser dominicano, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho, y haber ejercido la profesión de abogado durante dos años o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Paz o de Fiscalizador.

Artículo 75.

Para ser Procurador Fiscal o Juez de Instrucción se requieren las mismas condiciones exigidas para ser Juez de Primera Instancia.

SECCIÓN VI**De los Juzgados de Paz****Artículo 76.**

En el Distrito Nacional y en cada municipio habrá los Juzgados de Paz que fueren necesarios de acuerdo con la ley.

Artículo 77.

Para ser Juez de Paz o Fiscalizador o Suplente de uno u otro, se requiere ser dominicano, ser abogado y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tendrán las atribuciones que determine la ley.

No será necesaria la condición de abogado para desempeñar las antedichas funciones en los municipios donde no sea posible elegir o designar abogados para las mismas, excepto en el Distrito Nacional y en los municipios cabeceras de provincias donde estas funciones deberán ser desempeñadas por abogados.

**TÍTULO VII
DE LA CÁMARA DE CUENTAS****Artículo 78.**

Habrá una Cámara de Cuentas permanente compuesta de cinco miembros por lo menos, elegidos por el Senado de las ternas que le presente el Poder Ejecutivo.



PÁRRAFO. La Cámara de Cuentas tendrá carácter principalmente técnico.

Artículo 79.

Sus atribuciones serán, además de las que le confiere la Ley:

1. Examinar las cuentas generales y particulares de la República.
2. Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria de cada año el informe respecto de las cuentas del año anterior.

Artículo 80.

Los miembros de la Cámara de Cuentas durarán cuatro años en sus funciones.

Artículo 81.

Para ser miembro de la Cámara de Cuentas se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido la edad de 25 años y ser doctor o licenciado en Derecho, licenciado en Finanzas, o Contador Público Autorizado. La ley determinará las demás condiciones para ser miembro de dicho organismo.

TÍTULO VIII DEL DISTRITO NACIONAL Y DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 82.

El Gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo de un ayuntamiento, cuyos regidores, así como sus suplentes, en el número que será determinado por la ley proporcionalmente al de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco, serán elegidos, al igual que el Síndico del Distrito Nacional y de los Síndicos Municipales y sus suplentes, por el pueblo de dicho Distrito y de los municipios, respectivamente, cada cuatro años, en la forma que determinen la Constitución y las leyes, mediante candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales.

**Artículo 83.**

Los ayuntamientos así como los Síndicos, son independientes en el ejercicio de sus funciones, con las restricciones y limitaciones que establezcan la Constitución y las leyes, las cuales determinarán sus atribuciones, facultades y deberes.

Artículo 84.

La ley determinará las condiciones para ejercer los cargos indicados en los Artículos 82 y 83. Los extranjeros mayores de edad podrán desempeñar dichos cargos en las condiciones que prescriba la ley, siempre que tengan residencia de más de 10 años en la jurisdicción correspondiente.

Artículo 85.

Tanto en la formulación como en la ejecución de sus presupuestos, los ayuntamientos estarán obligados a mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios. Los ayuntamientos podrán, con la aprobación que la ley requiera, establecer arbitrios, siempre que éstos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes.

TÍTULO IX DEL RÉGIMEN DE LAS PROVINCIAS

Artículo 86.

Habrá en cada provincia un Gobernador Civil, designado por el Poder Ejecutivo.

PÁRRAFO. Para ser Gobernador se requiere ser dominicano, mayor de veinticinco años de edad y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Artículo 87.

La organización y régimen de las provincias, así como las atribuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, serán determinados por la ley.

TÍTULO X

DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES

Artículo 88.

Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio.

El voto será personal, libre y secreto.

No podrán votar:

1. Los que hayan perdido los derechos de ciudadanía y aquellos a quienes se les hayan suspendido tales derechos, por virtud de los Artículos 14 y 15 de esta Constitución.
2. Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de policía.

Artículo 89.

Las Asambleas Electorales se reunirán de pleno derecho el 16 de mayo de cada cuatro años para elegir el Presidente y Vicepresidente de la República; asimismo, para elegir los demás funcionarios electivos, mediando dos años entre ambas elecciones. En los casos de convocatoria extraordinaria, se reunirán a más tardar sesenta días después de la publicación de la ley de convocatoria.

Artículo 90.

Corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, los Senadores y los Diputados, los Regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus suplentes, así como cualquier otro funcionario que se determine por la ley.

PÁRRAFO. Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, ninguna de las candidaturas obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección cuarenta y cinco días después de celebrada la primera. En esta última elección participarán únicamente las dos candidaturas que hayan obtenido mayor número de votos en la primera elección.

**Artículo 91.**

Las Elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto, y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos.

Artículo 92.

Las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley.

PÁRRAFO. Para los fines de este artículo, la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública en los lugares en donde dichas votaciones se verifiquen.

TÍTULO XI DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 93.

Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y apolíticas y no tienen, en ningún caso, facultad para deliberar. El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público y sostener la Constitución y las leyes. Podrán intervenir, cuando así lo solicite el Poder Ejecutivo, en programas de acción cívica y en planes destinados a promover el desarrollo social y económico del país.

Artículo 94.

Las condiciones para que un ciudadano pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas están contenidas en la ley de su creación.

TÍTULO XII DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 95.

La bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y



que lleve en el centro el escudo de armas de la República. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo.

Artículo 96.

El escudo de armas de la República tendrá los mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual forma. Llevará en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima surgiendo ambos entre un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales, sin escudo, dispuestas a ambos lados; llevará un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho; estará coronado por una cinta azul ultramar en la cual se leerá el lema: Dios, Patria y Libertad, y en la base habrá otra cinta de color rojo bermellón con las palabras: República Dominicana. La forma del escudo nacional será de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base terminará en punta, y estará dispuesto en forma tal que si se traza una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde comienzan los ángulos inferiores, resulte un cuadrado perfecto.

PÁRRAFO. La ley reglamentará el uso y dimensiones de la bandera y del escudo nacionales.

Artículo 97.

El Himno Nacional es la composición musical consagrada por la Ley No. 700, de fecha 30 de mayo de 1934, y es invariable, único y eterno.

Artículo 98.

Los días 27 de febrero y 16 de agosto, aniversarios de la Independencia y la Restauración de la República, respectivamente, son de Fiesta Nacional.

Artículo 99.

Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisión acordada por la requisición de la fuerza armada es nula.

**Artículo 100.**

La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y en consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias.

Artículo 101.

Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, formará parte del patrimonio cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del Estado. La ley establecerá cuanto sea oportuno para su conservación y defensa.

Artículo 102.

Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.

Artículo 103.

Los yacimientos mineros pertenecen al Estado y solo podrán ser explotados por particulares en virtud de las concesiones o los contratos que se otorguen en las condiciones que determine la ley.

Artículo 104.

Es libre la organización de partidos y asociaciones políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en esta Constitución.

Artículo 105.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 23, Inciso 5, de esta Constitución, el Presidente y Vicepresidente de la República



electos o en funciones no podrán ser privados de su libertad antes o durante el período de su ejercicio.

Artículo 106.

La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se prestará ante cualquier funcionario u oficial público.

Artículo 107.

El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cual fuere la fecha de su elección, terminará el 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional.

PÁRRAFO I. Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destitución, inhabilitación u otra causa, el que lo sustituya permanecerá en el ejercicio hasta completar el período.

PÁRRAFO II. Una vez vencido el período para el cual fueron designados los Miembros de la Cámara de Cuentas y el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral, permanecerán en sus cargos hasta que el Senado haga las nuevas designaciones para el período que se inicia.

Artículo 108.

Ninguna función o cargo público a que se refieren esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honoríficos y los docentes, sin perjuicio del Artículo 18.

Artículo 109.

La justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República.

Artículo 110.

No se reconocerá ninguna exención, ni se otorgará ninguna exoneración, reducción o limitación de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales, en beneficio



de particulares, sino por virtud de la ley. Sin embargo, los particulares pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la ley, o mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho irrevocable de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión o el contrato, y cumpliendo con las obligaciones que la una y el otro les impongan, de exenciones, exoneraciones, reducciones o limitaciones de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales incidentes en determinadas obras o empresas de utilidad pública o en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economía nacional, o para cualquier otro objeto de interés social, la inversión de nuevos capitales.

Artículo 111.

La unidad monetaria nacional es el peso oro.

PÁRRAFO I. Sólo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos por una entidad emisora única y autónoma, cuyo capital sea de la propiedad del Estado, siempre que estén totalmente respaldados por reservas en oro y por otros valores reales y efectivos, en las proporciones y condiciones que señale la ley y bajo la garantía ilimitada del Estado.

PÁRRAFO II. Las monedas metálicas serán emitidas a nombre del Estado por mediación de la misma entidad emisora, y se pondrán en circulación sólo en reemplazo de un valor equivalente de billetes. La fuerza liberatoria de las monedas metálicas en curso y de las que se emitieren en lo adelante será determinada por la ley.

PÁRRAFO III. La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad emisora, cuyo órgano superior será una Junta Monetaria, compuesta de miembros que serán designados y sólo podrán ser removidos de acuerdo con la ley y responderán del fiel cumplimiento de sus funciones de conformidad con las normas establecidas en la misma.

PÁRRAFO IV. Queda prohibida la emisión o la circulación de papel moneda, así como de cualquier otro signo monetario no autorizado por esta Constitución, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona o entidad pública o privada.

Artículo 112.

Toda modificación en el régimen legal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros de una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta.

Artículo 113.

Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente.

Artículo 114.

Anualmente, en el mes de abril, se publicará la cuenta general de los ingresos y egresos de la República hechos en el año anterior.

Artículo 115.

La Ley de Gastos Públicos se dividirá en capítulos que correspondan a los diferentes ramos de la administración y no podrán trasladarse sumas de un capítulo a otro ni de una partida presupuestaria a otra, sino en virtud de una ley. Esta ley, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

PÁRRAFO I. No tendrá efecto ni validez ninguna ley que ordene o autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley cree fondos especiales para su ejecución o disponga que el pago se haga de las entradas calculadas del año, y de éstas quede en el momento de la publicación de la ley una proporción disponible suficiente para hacerlo.



PÁRRAFO II. El Congreso no podrá votar válidamente ninguna erogación, a menos que esté incluida en el proyecto de Ley de Gastos Públicos sometido por el Poder Ejecutivo, en virtud del Artículo 55 de esta Constitución, o que sea solicitada por el Poder Ejecutivo después de haber enviado dicho proyecto, sino en el caso de que la ley que ordene esa erogación haya sido apoyada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara; y todo sin derogación de la regla general establecida en el párrafo primero del presente artículo.

PÁRRAFO III. El Congreso no podrá modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Gastos Públicos sometidos por el Poder Ejecutivo, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara; y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el párrafo primero de este artículo. El Congreso podrá, sin embargo, modificar las referidas partidas con la mayoría ordinaria cuando sea a iniciativa del Poder Ejecutivo.

PÁRRAFO IV. Cuando por cualquier circunstancia el Congreso cierre la legislatura sin haber votado el presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, continuará rigiendo la Ley de Gastos Públicos del año anterior.

PÁRRAFO V. Cuando el Congreso esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá disponer por medio de decreto los traslados o transferencias de sumas dentro de la Ley de Gastos Públicos que exijan las necesidades urgentes del servicio administrativo, así como las creaciones o supresiones de cargos administrativos o servicios públicos que afecten aquella ley, con la obligación de someter al Congreso en la próxima legislatura, para su aprobación, las referidas disposiciones. Podrá, asimismo, en el caso previsto por este párrafo, del mismo modo, erogar los fondos necesarios para atender gastos de la administración pública, dando cuenta al Congreso cuando éste se reúna.



TÍTULO XIII

DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

Artículo 116.

Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.

Artículo 117.

La necesidad de la reforma se declarará por una ley. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional, determinará el objeto de la reforma e indicará los artículos de la Constitución sobre los cuales versará.

Artículo 118.

Para resolver acerca de las reformas propuestas, la Asamblea Nacional se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declare la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las Cámaras. Una vez votadas y proclamadas las reformas por la Asamblea Nacional, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados.

Por excepción de lo dispuesto en el Artículo 27, las decisiones se tomarán en este caso, por la mayoría de las dos terceras partes de los votos.

Artículo 119.

Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo.

Artículo 120.

La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni



anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares.

TÍTULO XIV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 121.

El período presidencial que se inicia el 16 de agosto de 1994 concluirá, por excepción, el 16 de agosto de 1996.

Artículo 122.

Las próximas elecciones presidenciales serán celebradas el 16 de mayo de 1996 y el Presidente y el Vicepresidente de la República electos asumirán sus funciones el 16 de agosto de 1996. Las próximas elecciones congresionales y municipales tendrán lugar el 16 de mayo del 1998 y los funcionarios que resulten electos asumirán cargos el 16 de agosto de 1998.

DADA Y PROCLAMADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, en el Palacio del Congreso Nacional, sito en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy día 25 del mes de julio del año Dos mil dos (2002); años 159 de la Independencia y 139 de la Restauración.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REVISORA:

ANDRÉS BAUTISTA GARCÍA

Representante de la Provincia Espaillat

LA VICEPRESIDENTA:

RAFAELA ALBÚRQUERQUE DE GONZÁLEZ

Representante por la Provincia de San Pedro de Macorís.

**LEY ELECTORAL No. 275-97
Y SUS MODIFICACIONES**

ÍNDICE

TÍTULO I

DEL EJERCICIO DEL DERECHO A ELEGIR	75
Artículo 1. Ejercicio del Derecho a Elegir.	75

TÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS ELECTORALES	75
Artículo 2. Órganos Electorales.	75

TÍTULO III

DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL	75
Artículo 3. Asiento. Jurisdicción.	75
Artículo 4. Composición e Integración.	76
Artículo 5. Atribuciones del Presidente.	77
Artículo 6. Atribuciones de la Junta Central Electoral.	78
Artículo 7. Sesiones.	86
Artículo 8. Quórum.	86
Artículo 9. Convocatoria.	86
Artículo 10. Decisiones.	87
Artículo 11. Del Desempeño del Cargo.	87
Artículo 12. Minutas y Actas.	87
Artículo 13. Tablilla de Publicaciones.	88
Artículo 14. Publicaciones de Actas.	89
Artículo 15. Sello.	89
Artículo 16. Impugnaciones y Recusaciones.	89

TÍTULO IV

DE LAS JUNTAS ELECTORALES	91
Artículo 17.	91

Artículo 18. Integración, Designación y Requisitos de los Miembros.	91
Artículo 19. Funciones de los Suplentes.	92
Artículo 20. Incompatibilidades.	92
Artículo 21. Antecedentes Penales.	92
Artículo 22. Afiliación Política.	92
Artículo 23. Atribuciones de las Juntas Electorales.	93
Artículo 24. Desempeño del Cargo.	94
Artículo 25. Sesiones, Quorum y Mayoría.	95
Artículo 26. Convocatorias.	95
Artículo 27. Convocatoria a los Partidos Políticos.	95
Artículo 28. Minutas y Actas.	96
Artículo 29. Tablillas de Publicaciones.	96
Artículo 30. Publicaciones de Actas.	97
Artículo 31. Sellos.	97

TÍTULO V

ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS	97
--	----

Artículo 32. Atribuciones Generales.	97
Artículo 33. Recepcion y Entrega de Documentos.	98

TÍTULO VI

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES	99
--	----

Artículo 34. Colegios Electorales.	99
Artículo 35. Creación, Traslado, Fusión y Supresión.	99
Artículo 36. Composición.	100
Artículo 37. Nombramientos y Credenciales.	100
Artículo 38. Designación y Numeración.	101

TÍTULO VII

DEL REGISTRO ELECTORAL	101
-------------------------------------	-----

Artículo 39. Del Registro Electoral y su Revisión.	101
Artículo 40. Otras Revisiones.	101

TÍTULO VIII

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	102
Artículo 41. Condiciones para el Reconocimiento.	102
Artículo 42. Forma de Solicitud.	102
Artículo 43. Constitución del Partido.	104
Artículo 44. Formalidades Complementarias y Expediente del Reconocimiento.	105
Artículo 45. Efectos del Reconocimiento. Actos De Caracter Político.	105
Artículo 46. Personalidad Jurídica.	107
Artículo 47. Fuentes de Ingresos.	107

SECCIÓN II

De la Contribución a los Partidos Políticos	108
Artículo 48.	108
Artículo 49.	108
Artículo 50.	109
Artículo 51.	109
Artículo 52.	110
Artículo 53.	110
Artículo 54.	110
Artículo 55.	111

SECCIÓN III

De Los Delegados de los Partidos Politicos	111
Artículo 56. Designaciones, Condiciones.	111
Artículo 57. Sustitutos de Delegados.	112
Artículo 58. Caso de Falta de Designacion.	112
Artículo 59. Funciones de los Delegados.	112

SECCIÓN IV

Causas de Extinción	113
Artículo 60.	113

SECCIÓN V

De La Extinción por Acto Voluntario	114
---	-----

Artículo 61. Comunicacion a la Junta Central Electoral. .. 114

SECCIÓN VI

De las Fusiones, Alianzas o Coaliciones de Partidos. 114

Artículo 62. Aprobación e Impugnación de Fusiones, Alianzas y Coaliciones. 114

Artículo 63. De La Fusión. 116

Artículo 64. De Las Alianzas y Coaliciones. 116

SECCIÓN VII

De la Extinción por no Alcanzar suficientes Votos o Representacion Congressional o Municipal 117

Artículo 65. 117

SECCIÓN VIII

Liquidación 118

Artículo 66. 118

TÍTULO IX

DE LOS CANDIDATOS DE PARTIDOS 118

SECCIÓN I

De La Nominación 118

Artículo 67. Derecho de Proponer Candidatos. 118

Artículo 68. Nominacion De Candidatos. 118

SECCIÓN II

De Las Propuestas 119

Artículo 69. Forma de las Propuestas. 119

Artículo 70. Plazos 121

Artículo 71. Publicación y Comunicación. 121

Artículo 72. Corrección de Defectos e Irregularidades. 121

Artículo 73. Conocimiento y Decisión. 121

Artículo 74. Apelación o Revisión. 122

Artículo 75. Resolucion de Admisión De Candidaturas. 122

SECCIÓN III

De las Candidaturas Independientes	123
Artículo 76. Declaración.	123
Artículo 77. Requisitos.	124
Artículo 78. Candidaturas Municipales en Elecciones Sucesivas.	125

TÍTULO X

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 125

Artículo 79.	125
Artículo 80.	125
Artículo 81.	126

TÍTULO XI

DEL SÚFRAGIO DE LOS DOMINICANOS

EN EL EXTRANJERO 126

Artículo 82.	126
Artículo 83.	126
Artículo 84.	127
Artículo 85.	127

SECCIÓN I

Disposiciones Preliminares	127
Artículo 86. Clasificación.	127
Artículo 87. Proclamas.	128

SECCIÓN II

Del Periodo Electoral	128
Artículo 88. Comienzo y Terminación.	128
Artículo 89. Seguridad Personal.	129
Artículo 90. Libertad de Reunión.	129
Artículo 91. Libertad de Tránsito.	130
Artículo 92. Protección de los Bienes de Agrupaciones y Partidos.	130

Artículo 93. Inviolabilidad de la Correspondencia y Documentos.	130
Artículo 94. Igualdad de Acceso a Medios de Divulgación.	131

SECCIÓN III

De la Boleta Electoral	132
Artículo 95. Fecha en que debe disponerse la impresión.	132
Artículo 96. Cantidad.	132
Artículo 97. Forma.	133

SECCIÓN IV

Locales, Materiales y Útiles para los Colegios ElectORAles Locales	134
Artículo 98. Obtención.	134
Artículo 99. Requisitos.	134
Artículo 100. Anuncio.	135
Artículo 101. Distribucion y Mobiliario.	135
Artículo 102. Materiales y Útiles.	135
Artículo 103. Entrega, Responsabilidad.	136
Artículo 104. Instrucciones a los Colegios ElectORAles.	136

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES DESTINADAS A ASEGURAR EL LIBRE EJERCICIO DEL DERECHO DE ELEGIR	137
---	-----

Artículo 105. Caracter no laborable del día de Elección.	137
Artículo 106. Libertad Individual.	137
Artículo 107. Libertad de Tránsito.	137
Artículo 108. Prohibicion de Espectaculos y Manifestaciones.	137
Artículo 109. Prohibición del Expendio de bebidas.	138
Artículo 110. Prohibicion de Injerencia ostentacion de Fuerzas Armadas.	138

Artículo 111. Amparo.....	139
Artículo 112. Independencia de Acción del personal de los Colegios Electorales.	139

TÍTULO XIV

DE LAS VOTACIONES.....	139
Artículo 113. Votación en un solo día.	139
Artículo 114. Instalación de los Colegios Electorales.	139
Artículo 115. Lista De Electores (Padrón Electoral).	140
Artículo 116. Acuerdos y Actas.	140
Artículo 117. Apertura de Votaciones.	140
Artículo 118. Identificación de los Electores.	140
Artículo 119. Protestas.	141
Artículo 120. Forma de Votar.	141
Artículo 121. Electores Incapacitados para Votar sin ayuda.	142
Artículo 122. Secreto del Voto.	143
Artículo 123. Preservacion del Orden.	144
Artículo 124. Servicio de Policia.	144
Artículo 125. Cierre de la Votación.	144

TÍTULO XV

ESCRUTINIO DE LOS COLEGIOS ELECTORALES.	144
Artículo 126. Atribución del Colegio Electoral.	145
Artículo 127. Procedimiento del Escrutinio.	145
Artículo 128. Rechazamiento de Boletas Anuladas.	145
Artículo 129. Boletas Nulas.	145
Artículo 130. Boletas con Manchas e Imperfecciones.	145
Artículo 131. Diferencia entre las Boletas Computadas y la Lista de Electores.	146
Artículo 132. Boletas de mas o de menos.	146
Artículo 133. Derecho de Verificación.	146
Artículo 134. Desaparición de las Boletas.	146
Artículo 135. Consignación en el Acta De Escrutinio.	146

Artículo 136. Relaciones de Votaciones.	147
Artículo 137. Distribución de las Relaciones de Votación.	148
Artículo 138. Entrega de Urnas y Documentos.	148

TÍTULO XVI

DEL CÓMPUTO Y LA RELACIÓN DEL MUNICIPIO	150
---	-----

Artículo 139. Plazo para efectuar el Cómputo y la Relación.	150
Artículo 140. Procedimiento.	151
Artículo 141. Boletas Anuladas Por Los OColegios Electorales.	152
Artículo 142. Examen De Boletas Observadas.	152
Artículo 143. Acta De Computo.	155
Artículo 144. Reparos.	156
Artículo 145. Relacion General de la Votación en el Municipio.	156
Artículo 146. Relación de Candidatos Elegidos a Cargos Municipales.	157
Artículo 147. Formalidades comunes a ambas Relaciones.	157
Artículo 148. Relación Provisional.	157
Artículo 149. Publicación y Distribución de las Relaciones.	157
Artículo 150. Remisión de Documentos.	158

TÍTULO XVII

DE LA ANULACIÓN DE LAS ELECCIONES	158
---	-----

SECCIÓN I

De La Anulacion de Oficio	158
Artículo 151.	158

SECCIÓN II

De la demanda en nulidad	158
Artículo 152.	158

Artículo 153. Procedimiento.	159
Artículo 154. Conocimiento y fallo.	160

SECCIÓN III

De Las Apelaciones	160
Artículo 155. Forma y plazo.	160
Artículo 156. Conocimiento y fallo.	161
Artículo 157. Relaciones definitivas.	161

SECCIÓN IV

De la nueva Elección en caso de anulación	162
Artículo 158. Disposición que debe dictar la Junta Central Electoral.	162
Artículo 159.	162

SECCIÓN V

Del Computo y las Relaciones Nacionales	163
Artículo 160. Del cómputo General Nacional.	163
Artículo 161. Relacion General del Resultado de la Elección.	163

SECCIÓN VI

Determinacion de los Candidatos Elegidos	163
Artículo 162. Caso en que no haya lugar a Representacion Proporcional.	163
Artículo 163. Empate.	164
Artículo 164. Representacion Proporcional.	165

SECCIÓN VII

De los Certificados de Elección y de la proclamación de los Candidatos Elegidos	165
Artículo 165. Certificados de Elección.	165
Artículo 166. Duplicado de los Certificados de Elección.	166
Artículo 167. Proclamación.	166

TÍTULO XVIII

DISPOSICIONES GENERALES	166
-------------------------------	-----

Artículo 168. Franquicia de Comunicaciones.	166
--	-----

Artículo 169. Exención de Impuestos Y Derechos	166
--	-----

Sobre Documentos.	166
------------------------	-----

TÍTULO XIX

DE LAS INFRACCIONES ELECTORALES	167
---------------------------------------	-----

Artículo 170. Competencias en las Infracciones Electorales.	167
---	-----

SECCIÓN I

De Los Crimenes Electorales	167
-----------------------------------	-----

Artículo 171. Falsedad En Materia Electoral.	167
---	-----

Artículo 172. Otras Falsedades Y Otros Crimenes Electorales.	168
--	-----

SECCIÓN II

De Los Delitos Electorales	169
----------------------------------	-----

Artículo 173. Delitos Electorales	169
---	-----

Artículo 174. Otros Delitos Electorales	171
---	-----

Artículo 175. Delito De Coartar el Derecho de Elegir	173
---	-----

Artículo 176.	173
--------------------	-----

Artículo 177.	174
--------------------	-----

Artículo 178.	174
--------------------	-----

Artículo 179.	174
--------------------	-----

Artículo 180.	174
--------------------	-----

EL CONGRESO NACIONAL

En nombre de la República, ha dado la siguiente Ley

LEY ELECTORAL NO. 275-97

TÍTULO I DEL EJERCICIO DEL DERECHO A ELEGIR

Artículo 1.- Ejercicio del derecho a elegir.

El derecho de elegir que la Constitución confiere a los ciudadanos será ejercido de conformidad con las normas establecidas en la misma y en la presente ley.

TÍTULO II DE LAS AUTORIDADES Y ORGANOS ELECTORALES

Artículo 2.- Órganos Electorales.

La organización, vigilancia y realización de los procesos electorales, en las formas establecidas en la presente ley estará a cargo de los siguientes órganos:

1. La Junta Central Electoral.
2. Las Juntas Electorales.
3. Los Colegios Electorales.

TÍTULO III DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Artículo 3.- Asiento. Jurisdicción.

La Junta Central Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Tiene su asiento en la ciudad capital y su jurisdicción se extiende a toda la República.

Constituye una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen y con autonomía económica y presupuestaria.

Artículo 4.- Composición e Integración.

(Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

La Junta Central Electoral estará conformada por dos Cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa Electoral, que ejercerán las atribuciones que les confiere la presente ley. Estará integrada por nueve (9) miembros: Un presidente y ocho (8) miembros, cada uno de los cuales tendrá un suplente, elegidos por el Senado de la República y durarán en sus funciones cuatro (4) años. Los miembros de la Junta Central Electoral estarán adscritos a la respectivas Cámaras, en la forma siguiente: tres (3) miembros en la Cámara Administrativa y cinco (5) miembros a la Cámara Contenciosa Electoral. El Pleno de la Junta Central Electoral estará constituido por los miembros de ambas Cámaras y por el Presidente de la Junta Central electoral.

Para ser Presidente, miembro titular o Suplente de la Junta Central Electoral se requiere ser dominicano de nacionalidad u origen, tener mas de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Sus miembros titulares y suplentes, incluidos su presidente y suplente de presidente, deben ser licenciados o doctores en derecho, con doce (12) años mínimo de ejercicio.

PÁRRAFO I. Los miembros de la Junta Central Electoral, titulares y suplentes, además de satisfacer las condiciones requeridas por la Constitución, deben tener o fijar su residencia en la ciudad de Santo Domingo, sede del máximo organismo electoral.

PÁRRAFO II. Entre los miembros no puede haber vínculo de parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado



inclusive, ni con los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.

Si al momento de la designación de un titular o suplente no hubiere parentesco con candidatos a cargos electivos en el nivel presidencial, el hecho de que posteriormente exista parentesco con algún candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República no es motivo para inhabilitar al titular o suplente, a menos que el parentesco sea en primer grado.

PÁRRAFO III. Al elegir los miembros de cada una de las Cámaras, el Pleno de la Junta Central electoral dispondrá cuál de ellos ocupará la Presidencia de la Cámara de que se trate; el Presidente de la Junta Central Electoral no presidirá ninguna de las Cámaras. En caso de falta o impedimento del Presidente de una Cámara, desempeñará esas funciones el miembro, integrante de la misma, de mayor edad. Sin embargo, el Pleno podrá escoger, si fuere necesario, a cualquiera otro de los integrantes de esa Cámara.

Ley 02-03 Art. 2. (TRANSITORIO). Una vez integrado el Pleno de la Junta Central Electoral, al entrar en vigencia la presente Ley, se abocará a conformar las Cámaras creadas para que las mismas asuman sus atribuciones de inmediato.

Artículo 5.- Atribuciones del Presidente. (Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

Además de las atribuciones que por otras disposiciones legales le correspondan, el Presidente de la Junta Central Electoral tiene las siguientes:

- a) Ejercer la representación legal del organismo;
- b) Abrir y cerrar las sesiones, anticipar o prorrogar las horas de despacho en caso de que así lo requiera algún asunto urgente o grave, y convocar extraordinariamente a sus miembros cuando fuere necesario;
- c) Fijar el orden en que deban tratarse los asuntos sujetos al conocimiento de este organismo;



- d) Dirigir los debates y someter a votación los asuntos cuando el organismo los considere discutido;
- e) Presidir, ex-oficio, todas las comisiones designadas por la Junta Central Electoral;
- f) Tener bajo su control todas las actividades administrativas no atribuidas a la Cámara Administrativa.

**Artículo 6.- Atribuciones de la Junta Central Electoral.
(Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)**

Además de las atribuciones que expresamente le concede la Constitución de la República, la Junta Central Electoral ejercerá, a través de la Cámara Administrativa, de la Cámara Contenciosa y del Pleno, las siguientes:

CÁMARA ADMINISTRATIVA:

- a) Recomendar al Pleno, para su designación, todos los funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral y sus dependencias, y fijarles sus remuneraciones. El Director de Elecciones, Director de Cómputos, el Director Nacional del Registro del Estado Civil y el Director de la Cédula de Identidad y Electoral, que estará a cargo del Registro Electoral, los cuales serán designados previa consulta con los partidos políticos;
- b) Establecer el horario que deba cumplirse en sus propias oficinas y las de sus dependencias;
- c) Poner semestralmente a disposición de los partidos reconocidos, a más tardar quince (15) días después del cierre de las inscripciones, las bases de datos del registro que contienen las listas actualizadas de los inscritos en el Registro Electoral, con especificaciones de los datos personales de los electores, las nuevas inscripciones, los traslados y las cancelaciones, así como el programa utilizado para el conteo de votos;
- d) Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones



que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el derecho al voto. Dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efectos durante el período electoral de las elecciones de que se trate;

- e) Crear los colegios electorales que estime necesarios para cada elección, determinando su ubicación y jurisdicción territorial; disponer el traslado, la refundición o la supresión de colegios electorales cuando lo juzgue necesario o conveniente;
- f) Asegurar el regular funcionamiento de las juntas electorales, para obtener la correcta aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;
- g) Disponer todo lo relativo a la adquisición, la preparación y el suministro del equipo y los impresos, materiales y útiles de todo género que sean necesarios para la ejecución de la presente ley y para el buen funcionamiento de las juntas y colegios electorales;
- h) Velar para que las juntas electorales se reúnan con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de sus atribuciones;
- i) Fiscalizar, cuando lo estime necesario o conveniente, por iniciativa propia o por solicitud, las asambleas y convenciones que celebren los partidos para elegir sus autoridades y/o nombrar sus candidatos a cargos electivos, procurando en todo momento que éstas sean efectuadas con estricto apego a lo que dispone la ley, los reglamentos y los estatutos, sin la cual serán nulas;
- j) Tomar las medidas de lugar, en coordinación con las autoridades que correspondan, con miras a que la propaganda mural no afecte el medio ambiente, ni dañe o lesione la propiedad privada, ni las edificaciones y monumentos públicos;

- k) Dirigir y vigilar administrativa, técnica y económicamente todas las juntas y funcionarios electorales, conforme el reglamento interno;

CÁMARA CONTENCIOSA:

I. CONOCER Y DECIDIR EN INSTANCIA ÚNICA:

- a) De las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las Juntas Electorales, de conformidad con lo que dispone esta ley; suspender en el ejercicio de sus funciones a los que sean objeto de tales impugnaciones o recusaciones, hasta tanto se haya decidido definitivamente respecto de las mismas, en los casos de notoria urgencia y gravedad;
- b) Respecto de los recursos de revisión previstos en la ley contra sus propias decisiones;
- c) De las impugnaciones y otras acciones previstas en esta ley y promovidas de conformidad con los procedimientos establecidos en la misma;
- d) De los conflictos internos que se produjeran en los partidos y organizaciones políticas reconocidos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas, y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos dictados por la Junta Central Electoral o los estatutos partidarios. No se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos del partido tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos;
- e) De cualesquiera otros recursos en materia electoral, previstos en esta ley, no atribuidos en primer grado a las juntas electorales;
- f) Ordenar, en única o última instancia, la celebración de nuevas elecciones cuando hubieren sido anuladas las que se hayan celebrado en determinados colegios electorales, siempre que la votación en éstos sea susceptible de afectar el resultado de la elección.



II. COMO JURISDICCIÓN DE SEGUNDO Y ÚLTIMO GRADO:

- a) Resolver acerca de la nulidad de las elecciones en uno o más colegios electorales, cuando esa nulidad haya sido pronunciada por las respectivas juntas electorales;
- b) Conocer y decidir de las impugnaciones, apelaciones, protestas, reclamaciones u otros recursos que se produzcan a causa de fallos en primer grado de las juntas electorales;
- c) De los casos de protestas en el proceso de votación ante los colegios electorales, de conformidad con la presente ley;
- d) Conocer de cualesquiera otros recursos de alzada previstos en esta ley;
- e) Conocer y decidir, ya sea en única o en última instancia, de todo cuanto se relaciona con los actos y procedimientos electorales y sobre la validez de toda elección.

PLENO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL:

El pleno de la Junta Central Electoral, conformado por la totalidad de sus miembros, ejercerá las atribuciones siguientes:

- a) El Pleno de la Junta Central Electoral tendrá la facultad de crear, suprimir, trasladar, limitar o ampliar la circunscripción o ámbito de competencia territorial de las Oficialías del Estado Civil por resolución;
- b) Dictar, dentro de los plazos señalados al efecto, la proclama por medio de la cual se anuncia la celebración de elecciones;
- c) Formular, a la vista de las relaciones hechas por las juntas electorales, y dentro del plazo que esta ley determina, la relación general del resultado de cada elección, consignando en ella los datos que la ley requiera y hacerla publicar en la Gaceta Oficial;



- d) Declarar los ganadores de las elecciones y otorgar los certificados correspondientes a los electos presidente y vicepresidente de la República, así como a los senadores y diputados electos;
- e) Convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda, de conformidad con la Constitución y la ley, dictando al efecto la correspondiente proclama;
- f) Elaborar y dictar el reglamento interno del Pleno y de las Cámaras para su funcionamiento, así como para los demás órganos electorales dependientes;
- g) Dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a las a elecciones y el regular desenvolvimiento de éstas;
- h) Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado;
- i) Reglamentar todo lo relativo al financiamiento público de los partidos;
- j) Reglamentar la propaganda en los medios de comunicación, con el fin de evitar distorsiones, alusiones calumniosas o injuriosas que afecten el honor o la consideración de candidatos o dirigentes políticos, así como menciones que puedan crear intranquilidad o confusión en la población;
- k) Reglamentar todo lo concerniente a las actividades de los observadores electorales;
- l) Reglamentar y disponer todo lo concerniente a la formación, depuración y conservación del Registro Electoral;
- m) Podrá, mediante resolución administrativa, modificar la conformación del carné de la Cédula de Identidad y Electoral, aún antes de la revisión decenal del Registro Electoral;



- n) Modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada, los plazos que establece la presente ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho del sufragio;
- ñ) Resolver acerca del reconocimiento y extinción de los partidos políticos;
- o) Resolver todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos políticos;
- p) Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos establezca la ley;
- q) Publicar la memoria del proceso electoral y sus resultados en su oportunidad, incluyendo a la jurisprudencia en materia electoral;
- r) Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados, así como de todos los derechos y obligaciones relacionados con la campaña electoral previstos en la presente ley;
- s) Asumir el control de las emisiones relacionadas con el proceso electoral durante el período comprendido entre las veinticuatro (24) horas antes y después del día de las votaciones, mediante una cadena de emisoras estatales de radio y televisión. A dichas cadenas podrán adherirse los medios privados de esta naturaleza que deseen hacerlo. A estos últimos les está prohibido emitir o difundir noticias, informaciones, mensajes, comunicados u otros de índole electoral, o que, en alguna otra forma, trastornen el normal desarrollo del proceso electoral;

- t) Elaborar y ejecutar su presupuesto anual y el de sus dependencias, el que no podrá ser mayor del 1.5% del Presupuesto de la Nación, el cual deberá ser incluido en el proyecto de Presupuesto y ley de Gastos Públicos que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, sin perjuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados a un proceso electoral;
- u) Asumir la dirección y mando de la fuerza pública o Policía Militar Electoral, bajo la supervisión de un Oficial General designado por el Poder Ejecutivo, en los lugares que se celebren las votaciones;
- v) Conocer de las impugnaciones y recusaciones contra los miembros de la propia Junta Central Electoral, de conformidad con lo que dispone la ley, y suspender en el ejercicio de sus funciones a los miembros que sean objeto de tales impugnaciones o recusaciones, hasta tanto se haya decidido definitivamente respecto de las mismas, en los casos de notoria urgencia y gravedad;
- w) Las demás atribuciones que le confiera la ley.

PÁRRAFO I. Las decisiones en materia contenciosa serán tomadas después de oídos, o habiendo sido regularmente citados, los partidos políticos y/o candidatos interesados, en audiencia pública o en cámara de consejo, especialmente si ha de fallar un medio de inadmisión, una nulidad o cualquier otra excepción.

Las impugnaciones y recursos serán depositadas en la Secretaría de la Junta Central Electoral, la cual procederá al apoderamiento del Pleno o de la Cámara correspondiente. No da lugar a excepciones de incompetencia, nulidad o inadmisibilidad un apoderamiento directo, sino a declinar por ante quien tenga competencia.

PÁRRAFO II. Las decisiones de la Junta Central Electoral dictadas en última o única instancia son irrevocables y no pueden ser recurridas ante ningún tribunal, salvo en los casos



en que la ley autorice los recursos de revisión, o cuando, juzgados en única instancia, aparezcan documentos nuevos que, de haber sido discutidos, podrían eventualmente variar la suerte final del asunto de que se trate. Este recurso, por excepción, sólo podrá ejercerse una vez.

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

PÁRRAFO III. Para el despacho de cuestiones administrativas, la Junta Central Electoral se asistirá, entre otros, de los funcionarios siguientes:

- a) Un Secretario con las atribuciones que le asignan los artículos 32 y 33 de la presente ley, y las demás que le asigne la Junta Central Electoral. Cada Cámara tendrá su secretario y los empleados que fuesen necesarios;
- b) Un Director Administrativo, que tendrá a su cargo los servicios administrativos y técnicos, con las atribuciones que le asigne la Junta Central Electoral;
- c) Un Director Nacional de Elecciones, quien organizará las elecciones bajo la dirección de la Junta Central Electoral;
- d) Un Director Nacional del Registro del Estado Civil, quien tendrán su cargo los servicios del Estado Civil;
- e) Un Director de Registro Electoral, quien organizará lo concerniente al registro de electores y tendrá a su cargo todo lo relativo al proceso de cedulación;
- f) Un Director de Informática, quien dará apoyo sobre la materia a toda las dependencias de la Junta Central Electoral;
- g) Un Consultor Jurídico, encargado del asesoramiento legal de la Junta Central Electoral;
- h) Un Director de Inspección, encargado de supervisar las labores de inspección indicada por la Junta Central Electoral; e
- i) Cualquier otro funcionario o área administrativa que la Junta Central Electoral considere a bien crear.



Las condiciones requeridas para el desempeño de estos cargos estará establecidas en el Reglamento Interno de la Junta Central Electoral.

Artículo 7.- Sesiones.

La Junta Central Electoral celebrará sesiones con la frecuencia que juzgue necesaria para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas.

Artículo 8.- Quórum.

(Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

El Pleno y las Cámaras de la Junta Central Electoral no podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente sin que se encuentren presentes la totalidad de sus miembros titulares o suplentes y sin que haya constancia de que han sido debidamente convocados los delegados de partidos políticos reconocidos y acreditados ante ella y/o sus respectivos sustitutos, en los casos en que la ley lo requiera.

En caso de que faltare un miembro titular y su suplente, cualesquiera de los suplentes de los otros miembros titulares podrán sustituirlos.

Cuando la sesión tenga por objeto conocer y decidir asuntos administrativos, se convocará a los partidos políticos reconocidos para oír sus opiniones en aquellas materias en que se estime útil o necesario ese requisito.

Las sesiones donde se conozca de la solicitud de reconocimiento y/o extinción de partidos políticos o de la solicitud de aprobación, de los pactos de fusión, de alianzas o coalición de dos o más agrupaciones políticas, de la creación, supresión o traslados de colegios electorales, así como del nombramiento de los integrantes de las juntas electorales, del Secretario y del Director General de Elecciones, serán convocadas y celebradas con arreglo a lo prescrito en el párrafo I del artículo 6 de la presente ley.

Artículo 9.- Convocatoria.

El secretario enviará la convocatoria con la agenda correspondiente, por comunicación escrita, por lo menos cuarenta



y ocho (48) horas antes de la señalada para la sesión, expresando siempre el día, la hora y el objeto de la reunión.

En caso de urgencia, el presidente podrá ordenar que la convocatoria sea hecha con menos tiempo de anticipación, pero deberá haber constancia por escrito de que todas las personas a quienes va dirigida han sido notificadas con antelación suficiente para concurrir.

Artículo 10.- Decisiones.

(Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

Las resoluciones y los acuerdos del Pleno y de las Cámaras respectivas de la Junta Central Electoral serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de los miembros.

Las resoluciones y los acuerdos del Pleno y de las Cámaras respectivas de la Junta Central Electoral serán firmados por todos los miembros que estén presentes en la sesión al momento de ser tomados. Si alguno de los miembros no estuviese de acuerdo con la mayoría, deberá razonar su voto y hacerlo constar en la propia acta. La falta de firma de uno de los miembros no invalida el documento.

Las decisiones de mero trámite, así como las que se sitúen dentro de las atribuciones del artículo cinco (5) serán firmadas sólo por el presidente y el secretario.

Artículo 11.- Del Desempeño del Cargo.

El presidente y los miembros de la Junta Central Electoral disfrutarán de sueldos permanentes, que se consignarán en el Presupuesto y la Ley de Gastos Públicos, y estarán sometidos a la prohibición del ejercicio de toda actividad partidista y de todo cargo público. También disfrutarán de iguales sueldos los suplentes de dichos funcionarios, cuando sean llamados a reemplazar a los titulares en el ejercicio de sus funciones o cuando sean integrados a labores contempladas en la legislación electoral.

Artículo 12.- Minutas y Actas.

El Secretario de la Junta Central Electoral anotará brevemente en un libro de minutas los acuerdos aprobados y particularidades



de las deliberaciones, que sean necesarios para el acta de cada sesión, con las oportunas observaciones o aclaraciones. Serán firmadas por todos los miembros y por todos los delegados de partidos políticos presentes.

El secretario procederá, bajo su responsabilidad, a extender, conforme dichas notas, el acta correspondiente, en un libro encuadernado. Este libro, lo mismo que el de minutas al que se ha hecho referencia en este artículo, será autorizado en la primera y última página por el Presidente y el Secretario de la Junta Central Electoral, foliado y sellado debidamente. En cada acta se consignarán los nombres del presidente, los miembros y los delegados de partidos políticos o de sus respectivos sustitutos que asistieren.

Cuando hubiere discrepancia en alguna materia, se harán constar los votos favorables y contrarios y los fundamentos de los acuerdos votados.

Después de extendidas las actas en el libro correspondiente, serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta Central Electoral, antes de que, con arreglo a esta ley, se fije copia de las mismas en la tablilla de publicaciones. Firmadas las actas y fijadas sus copias en la tablilla, no podrán ser objeto de enmiendas, tachaduras o interlíneas, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las correcciones por errores sufridos en la redacción de las actas se harán en la misma acta, al margen, mediante acuerdo de la Junta Central Electoral.

Artículo 13.- Tablilla de Publicaciones.

La Junta Central Electoral hará fijar, en la parte exterior de su local, una tablilla de tamaño adecuado, nunca menos de cincuenta (50) centímetros por cada lado, situada de tal manera que los avisos que se fijan en ella estén, en cuanto sea posible, a cubierto de la intemperie y puedan ser leídos cómodamente.

Si fuere necesario cambiar de lugar la tablilla, se hará fijar en el sitio donde antes se encontraba, un aviso que indique



donde haya sido trasladada. Este aviso deberá permanecer fijado por un término no menos de quince (15) días después del traslado.

Siempre que en la presente ley se disponga la publicación de actas, avisos u otros documentos, sin determinarse el modo de publicación, se entenderá que ésta debe hacerse por medio de la fijación en la tablilla antes mencionada.

Artículo 14.- Publicaciones de Actas.

A más tardar el día que siga a aquél en que se hubiere celebrado una sesión, el Secretario de la Junta Central Electoral fijará en la tablilla una copia fiel del acta autorizada con su firma y con el sello de la Junta Central Electoral.

Artículo 15.- Sello.

La Junta Central Electoral tendrá un sello, en el cual aparecerá su denominación y jurisdicción territorial y que será estampado en todas sus actas, registros y documentos oficiales.

Este sello estará bajo la responsabilidad del Secretario de la Junta Central Electoral.

Artículo 16.- Impugnaciones y Recusaciones.

Las designaciones de miembros titulares y suplentes y de secretarios o sus sustitutos de las juntas electorales, podrán ser impugnadas por quien así lo estime, mediante un escrito motivado que será dirigido a la Junta Central Electoral dentro de los diez (10) días siguientes a las designaciones.

La Junta Central Electoral, dentro de las veinticuatro (24) horas, enviará copia por secretaría de ese escrito a los partidos políticos reconocidos, y celebrará una sesión a más tardar ocho (8) días después, a fin de conocer de la impugnación formulada. Esta será resuelta dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de la sesión, sin que esa decisión pueda ser objeto de recurso alguno.

Cuando la impugnación o la recusación fueren de urgencia y de notoria gravedad, la Junta Central Electoral podrá



suspender, en el ejercicio de su cargo, a la persona impugnada o recusada.

En el caso en que fueren impugnados o recusados uno o más miembros de la Junta Central Electoral, conocerá de la impugnación o recusación la misma junta, completada por los suplentes correspondientes.

Cuando la impugnación o recusación se refiera a miembros o secretarios de los colegios electorales, el escrito será dirigido, dentro de los tres (3) días siguientes a la designación, a la junta electoral correspondiente, la cual, después de haberlo comunicado a los partidos políticos reconocidos dentro de las veinticuatro horas de recibo, conocerá del caso y lo decidirá dentro de los tres (3) días siguientes. Estas decisiones no serán susceptibles de recurso alguno.

No se admitirán por ninguna causa impugnaciones o recusaciones dirigidas contra la totalidad de los miembros y suplentes de una misma junta, ni contra un número de miembros y suplentes que impida la integración de la misma.

Cuando sea admitida por la Junta Central Electoral la impugnación de uno de sus propios miembros, titulares o suplentes, éste cesará de inmediato en el ejercicio de sus funciones y se dará conocimiento del caso al Senado de la República, a fin de que dicha Cámara promueva la elección de la persona que deba llenar la vacante en la forma que la Constitución establece.

Cuando la Junta Central Electoral admita las impugnaciones de uno o más miembros titulares o suplentes de una junta electoral, éstos cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones y la Junta Central Electoral procederá a designar la o las personas que deban reemplazar a los titulares o suplentes que hayan cesado.

Cuando se admita una recusación, la persona que hubiere sido objeto de ella quedará impedida de actuar en el asunto o en el caso a que se refiera la recusación.



TÍTULO IV

DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Artículo 17.-

Las juntas electorales son órganos de carácter permanente, dependientes de la Junta Central Electoral, encargadas de los procesos electorales en la jurisdicción que le corresponda. Habrá una junta electoral en el Distrito Nacional y una en cada municipio.

Artículo 18.- Integración, Designación y Requisitos de los Miembros.

La Junta Electoral del Distrito Nacional se compondrá de un presidente y cuatro vocales. Las demás juntas electorales se compondrán de un presidente y dos vocales. Tendrán dos suplentes cada uno. Serán designados por la Junta Central Electoral, la cual podrá removerlos y aceptarles sus renunciaciones.

Para ser miembro titular o suplente de una junta electoral se requiere: Ser mayor de 21 años de edad, saber leer y escribir, estar domiciliado en el municipio y tener por lo menos un año de residencia en él, estar en el pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena reputación.

Cuando un miembro titular, regularmente convocado, faltare a tres sesiones consecutivas, sin excusa previa debidamente justificada, se considera que automáticamente ha renunciado a su cargo. Igual trato se le dará a los suplentes cuando sean llamados a integrar las juntas electorales correspondientes.

Para el despacho de las cuestiones administrativas, cada junta electoral se asistirá de un secretario, nombrado por la Junta Central Electoral.

Los presidentes y los secretarios de las juntas electorales de las mismas, deberán ser doctor o licenciado en derecho preferiblemente.

**Artículo 19.- Funciones de los Suplentes.**

Los suplentes de los miembros de las juntas electorales reemplazarán a éstos, temporalmente, en caso de recusación, de excusa legítima, o cuando sin ella, dejaren de concurrir a integrar las juntas a la hora señalada para una sesión.

Artículo 20.- Incompatibilidades.

No pueden ser miembros ni secretarios de una misma junta electoral personas que tengan vínculos de parentesco o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ya sea entre sí o con candidatos o con miembros de órganos directivos o con delegados de partidos políticos que actúen en la jurisdicción del cuerpo electoral a que pertenezcan.

PÁRRAFO I. No podrán ser miembros de las juntas electorales personas que formen parte de cualquiera de los poderes del Estado ni de organismos municipales.

PÁRRAFO II. Cuando no sea posible integrar una junta electoral con personas respecto a quienes no existan los vínculos de parentescos o afinidad indicados en este artículo, la Junta Central Electoral podrá resolver el caso prescindiendo de este requisito.

Artículo 21.- Antecedentes Penales.

Están incapacitados para ser miembros o secretarios de las juntas electorales, titulares o suplentes, las personas que se encuentren subjúdices o hayan sido condenadas por infracción a la ley electoral, por crimen en general, por delito contra la propiedad, por soborno o cohecho, por falsificaciones o por malversación de los fondos públicos.

Artículo 22.- Afiliación Política.

Al designar los miembros y secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes sustitutos, se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si esto no fuere posible, se deberá nombrar a afiliados no activistas de dos o más partidos políticos reconocidos, de tal modo que ninguno de estos tengan mayoría de votos en la junta



y, especialmente, se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos suplentes y sustitutos, pertenezcan a partidos políticos distintos.

Artículo 23.- Atribuciones de las Juntas Electorales.

Las juntas electorales tendrán las siguientes atribuciones:

ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Corresponden a las juntas electorales, independientemente de las que resulten de otras disposiciones de la Constitución y de la ley, las siguientes atribuciones:

1. Nombrar los miembros y secretarios de los colegios electorales que deban funcionar en su jurisdicción, así como los sustitutos de los secretarios.
2. Gestionar los locales donde deban funcionar los colegios electorales de su jurisdicción.
3. Velar por la distribución adecuada y oportuna del equipo y de los materiales electorales: boletas, sobres para las boletas protestadas, útiles e impresos necesarios para el buen funcionamiento de los colegios electorales de su jurisdicción, aprobados por la Junta Central Electoral.
4. Verificar el cómputo de la votación efectuada en cada elección, a la vista de las relaciones formuladas por los colegios electorales y de conformidad con las disposiciones que al efecto se establecen en otro lugar de la presente ley.
5. Formular, basándose en el cómputo efectuado según se ha dicho en el párrafo anterior, la relación general de la votación del municipio y de la relación de los candidatos que hubiesen resultado elegidos para cargos congresionales y municipales, de conformidad con lo que se dispone en otra parte de la presente ley.
6. Expedir los correspondientes certificados de elección a los candidatos que hubiesen resultado elegidos a cargos municipales, y proclamarlos.



7. Una vez terminada una elección, tomar las disposiciones pertinentes a la conservación del equipo y mobiliario utilizado en ella.
8. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdicción, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le conciernen, así como las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral.

DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL.

1. Conocer y decidir en primera instancia de los casos de protesta en el proceso de votación ante los colegios electorales de conformidad con la presente ley.
2. Conocer y decidir acerca de las impugnaciones, protestas y otras acciones, previstas en esta ley y promovida de conformidad con los procedimientos establecidos en la misma;
3. Anular las elecciones realizadas en uno o más colegios de su jurisdicción, cuando hubiere lugar a ello, de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley.

Artículo 24.- Desempeño del Cargo.

Los cargos de miembros de juntas electorales, tanto titulares como suplentes, son de aceptación obligatoria. Aquellos que fueren nombrados para desempeñarlos, no podrán rehusarlos ni abstenerse de ocuparlos y ejercerlos, ni renunciar a ellos, a no ser por motivos graves, debidamente justificados.

Los presidentes y los demás miembros de las juntas electorales, podrían recibir sueldos permanentes o pagaderos durante determinados períodos, según lo disponga la Junta Central Electoral.

Serán remunerados los secretarios de las juntas electorales con sueldos permanentes, que se consignarán en el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos. También disfrutarán de sueldos que podrán ser permanentes o temporales, según lo disponga la Junta Central Electoral, los empleados auxiliares y demás personal que requieran las juntas, de acuerdo a sus necesidades.



Artículo 25.- Sesiones, Quórum y Mayoría.

Las juntas electorales celebrarán sesiones administrativas, en Cámara de Consejo, con la frecuencia que los juzguen necesarios para el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. No podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente, sin que se encuentren presentes todos sus miembros titulares o, en su defecto, sus suplentes respectivos. En caso de que faltare un miembro titular o suplente, llenará la vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

Además de las sesiones ordinarias, se celebrarán sesiones extraordinarias, siempre que el interés público lo exija, por disposiciones del presidente, o cuando lo pidieren dos de sus miembros.

Artículo 26.- Convocatorias.

Los secretarios enviarán las convocatorias con las agendas correspondientes, por comunicación escrita, por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de la señalada para la sesión, expresando siempre el día, la hora y el objeto de la reunión. En caso de urgencia el presidente podrá ordenar que la convocatoria sea hecha con menos tiempo de anticipación, pero deberá haber constancia por escrito de que todas las personas a quienes vayan dirigidas han sido notificadas con antelación suficiente para concurrir.

Artículo 27.- Convocatoria a los Partidos Políticos.

A las sesiones administrativas se convocará a los partidos políticos reconocidos para oír sus opiniones, en aquellas materias en que la Junta Electoral estime útil o necesario ese requisito, en los asuntos referentes a esas entidades y para conocer las solicitudes de nuevas organizaciones políticas. Estas sesiones podrán ser públicas según decida en cada caso la Junta Electoral correspondiente.



Artículo 28.- Minutas y Actas.

El secretario anotará brevemente, en un libro de minutas, los acuerdos aprobados y particularidades de la deliberación, que sean necesarios para el acta de cada sesión con las oportunas observaciones o aclaraciones. Serán firmados por todos los miembros y por todos los delegados de partidos presentes.

El secretario procederá, bajo su responsabilidad, a extender, conforme, dichas notas, el acta correspondiente, en un libro encuadernado. Este libro, lo mismo que el de minutas a que se ha hecho referencia en este artículo, será autorizado en la primera y última página por el presidente y el secretario, y foliado y sellado debidamente. En cada acta se consignarán los nombres del presidente, los vocales y los delegados de partidos políticos o de sus respectivos sustitutos que asistieren.

Cuando hubiere discrepancia en alguna materia, se harán contar los votos favorables y contrarios y los fundamentos de los acuerdos votados.

Después de extendidas las actas en libro correspondiente, serán firmadas por el presidente y el secretario, antes de que, con arreglo a esta ley, se fije copia de las mismas en la tablilla de publicaciones. Firmadas las actas y fijadas sus copias en la tablilla, no podrán ser objeto de enmiendas, tachaduras o interlíneas, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente:

Las correcciones por errores sufridos en la redacción de las actas se harán en la misma acta, al margen, mediante acuerdos de la Junta Central Electoral o de la junta electoral correspondiente.

Artículo 29.- Tablillas de Publicaciones.

Las juntas electorales harán fijar, en la parte exterior del local donde tengan sus oficinas, una tablilla de tamaño adecuado, nunca menos de cincuenta centímetros por cada lado, situada de tal manera que los avisos que se fijen en ella estén, en cuanto sea posible, a cubierto de la intemperie y puedan ser leídos cómodamente.



Si fuere necesario cambiar de lugar la tablilla, se hará fijar en el sitio donde antes se encontraba, un aviso que indique donde haya sido trasladada. Este aviso deberá permanecer fijado por un término no menos de quince días después del traslado.

Siempre que en la presente ley se disponga la publicación de actas, avisos u otros documentos, sin determinarse el modo de publicación, se entenderá que ésta debe hacerse por medio de la fijación en la tablilla antes mencionada.

Artículo 30.- Publicaciones de Actas.

A más tardar el día que siga a aquel en que se hubiere celebrado una sesión, el secretario fijará en la tablilla una copia fiel del acta, autorizada con su firma y con el sello de la junta electoral correspondiente.

Artículo 31.- Sellos.

Las juntas electorales tendrán un sello, en el cual aparecerá su denominación y jurisdicción territorial, y que será estampado en todas sus actas, registros y documentos oficiales. Este sello estará bajo la responsabilidad del secretario.

TÍTULO V

ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS

Artículo 32.- ATRIBUCIONES GENERALES.

El Secretario de la Junta Central Electoral y los secretarios de las juntas electorales deberán estar presentes en las sesiones que celebren estos organismos, y tendrán voz pero no voto. Además de las atribuciones que les sean conferidas por otras disposiciones de esta ley, tendrán bajo su custodia los sellos, los registros y los archivos de la Junta Central Electoral y de las juntas electorales a las cuales pertenezcan, que deberán conservar en las oficinas de las mismas o en cualquier otro lugar en que, por acuerdo de dichas juntas, se les ordenen, así como de todos los documentos que se presenten. Llevarán la correspondencia y las cuentas y cumplirán todo lo que la Junta Central Electoral o las



juntas electorales a que pertenezcan o sus presidentes le encomendaren. El secretario deberá residir en la localidad que tenga su asiento el organismo electoral a que pertenezca.

Artículo 33.- Recepción y Entrega de Documentos.

Salvo lo que para los casos especiales se dispongan por esta ley, todos los documentos que se presentaren a la Junta Central Electoral y a cada junta electoral serán entregados a los secretarios de las mismas, quienes harán constar al dorso o al margen de cada uno: el día, hora y minutos en que los recibieren, el nombre del organismo en que actúen, estampando el sello de éste y su firma y entregarán a las personas que lo hubieren presentado, una copia del mismo, fechado, firmado y sellado por él, expresando el día, hora y minutos de la presentación.

El Secretario de la Junta Central Electoral y los secretarios de todas las demás juntas y subjuntas electorales expedirán, a requerimiento motivado escrito del representante legal o candidato de cualquier partido o agrupación política reconocida, copias certificadas de todo documento que obre en los archivos bajo su custodia, así como certificaciones sobre los registros y anotaciones consignados en los libros a su cargo.

Además:

- a) De todo documento que despachen los secretarios entregarán una copia que explique la naturaleza del documento, el número de páginas de que conste y, hasta donde fuere posible, su contenido.
- b) Los secretarios registrarán, en libros destinados al efecto, los documentos que recibieren o entregaren. En cada asiento se hará constar el día, hora y minutos de la entrega o recibo, el nombre de la persona que haga o a quien se haga, con relación concisa del objeto de cada documento o modificación y de la persona o personas cuyos derechos afectaren el documento de que se trate. Los asientos correspondientes se harán en el registro del mismo día del recibo o de la entrega y, de ser posible, en el mismo momento.



TÍTULO VI

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES

Artículo 34.- Colegios Electorales. (Modificado Ley Art.1, 02-03 del7/1/03)

Se entiende por Colegios Electorales las mesas electorales creadas por la Junta Central Electoral bajo las condiciones que se establezcan, en torno a las cuales se reunirán las asambleas electorales debidamente convocadas, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer el sufragio, previa identificación del votante.

El elector, tan pronto haya depositado su voto y cumplido con los requisitos establecidos, abandonará el local del colegio electoral.

Artículo 35.- Creación, Traslado, Fusión Y Supresión.

La Junta Central Electoral creará, con no menos de treinta (30) días de anticipación los colegios electorales que juzgue necesarios para cada elección, determinará los lugares donde deban situarse, haciéndolo de conocimiento público, y señalará la demarcación territorial que haya de abarcar cada uno. Para ello, tomará en consideración las distancias y el número de electores inscritos en el registro de cada barrio o sección, de modo que las elecciones puedan efectuarse con regularidad. A cada colegio electoral se asignará no más de 400 electores. La Junta Central Electoral puede aumentar ese número hasta 600 electores. Cuando el número de electores de una demarcación territorial determinada supere esta última cifra, la Junta Central Electoral creará un colegio adicional y prorrateará entre los dos colegios la totalidad de los electores.

Podrá también, conforme lo requieran las circunstancias, disponer el traslado o la fusión de dichos colegios electorales.

Podrá crearse más de un colegio electoral para un barrio o sección, cuando así lo requiera el número de electores inscrito en el registro electoral, ubicándolos en lugares que faciliten el acceso a los electores.



Nunca se agruparán en la demarcación de un mismo colegio electoral, barrios, Secciones o lugares que no colinden entre sí.

Artículo 36.- Composición.

Cada colegio electoral se compondrá de un presidente, un primer y segundo vocal, un secretario y un sustituto de secretario, que serán nombrados por las juntas electorales, preferentemente de entre los electores que figuren en el listado del colegio de que se trate.

Para ser miembro, presidente, secretario y sustituto de secretario de un colegio electoral es preciso ser elector y tener su residencia en el municipio al cual corresponda ésta. Los integrantes de los colegios electorales no deberán ser miembros dirigentes de partidos políticos o pertenecer a comités de campaña de algún candidato.

En caso de que fueren afiliados a partidos políticos o simpatizantes de las candidaturas que tercian en las elecciones, las juntas electorales, velarán para que la composición de los colegios electorales no se corresponda con un sólo partido político, coalición o candidatura, debiéndose integrar con la mayor pluralidad y equilibrio posible.

Artículo 37.- Nombramientos y Credenciales.

Cada junta electoral procederá al nombramiento del personal de los colegios electorales que haya de funcionar en su jurisdicción, por lo menos quince (15) días antes de la fecha en que deban celebrarse las elecciones.

Las credenciales expresarán el nombre de la persona designada, el cargo, la designación del colegio electoral, el lugar donde estará situado, la fecha en que hayan de celebrarse las elecciones, el nombre del sustituto o del titular correspondiente, según el caso. Serán firmadas por el presidente y el secretario de la junta electoral y llevarán estampado el sello de ésta.



Las credenciales deberán ser entregadas a los designados a más tardar ocho (8) días antes de la fecha de las elecciones, personalmente.

Si por cualquiera causa legal la persona designada para un cargo en un colegio electoral no pudiere desempeñarlo, deberá, tan pronto como reciba la credencial correspondiente o sobrevenga la causa que le impida servir, ponerlo en conocimiento de la correspondiente junta electoral por escrito, expresando la causa y acompañando la prueba que la justifique, para que dicha junta resuelva en consecuencia.

Artículo 38.- Designación y Numeración.

Los colegios electorales se designarán por el nombre del barrio o sección, el municipio y la provincia a que pertenezcan, y se distinguirán entre sí por un número de orden, comenzando por el número uno en cada municipio.

TÍTULO VII DEL REGISTRO ELECTORAL

Artículo 39.- Del Registro Electoral y su Revisión.

El Registro Electoral consistirá en la inscripción personal, obligatoria y gratuita de todo individuo y ciudadano dominicano que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, se encuentre en aptitud de ejercer el sufragio y, además, en la inscripción de los menores que vayan a cumplir 18 años de edad antes o en la fecha de las más próximas elecciones.

El Registro Electoral será revisado cada diez años, para lo cual la Junta Central Electoral dictará las disposiciones que considere de lugar.

Artículo 40.- Otras Revisiones.

La Junta Central Electoral podrá también disponer la revisión del Registro Electoral de uno más municipios o de toda la República en cualquiera época, cuando a su juicio fuere necesario o conveniente.



TÍTULO VIII

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 41.- Condiciones para el Reconocimiento.

Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado.

Artículo 42.- Forma de Solicitud.

El reconocimiento deberá ser solicitado por los organizadores a la Junta Central Electoral, con la presentación de los siguientes documentos:

- a) Exposición sumaria de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el partido, en armonía con lo que establece el Artículo 4 de la Constitución de la República;
- b) Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Central Electoral;
- c) Constancia de la denominación o el lema del partido, que sintetizarán en lo posible las tendencias que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos;
- d) Los dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma y color o los colores que deberán distinguir al



partido de cualesquiera otros ya existentes. A los símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o lemas. Además, no deberán coincidir en todo ni en parte con el Escudo o la Bandera de la República, ni en ningún caso podrán llevar los nombres de los Padres de la Patria o de los Restauradores.

- e) Una declaración jurada por los organizadores de que el partido cuenta con un número de afiliados no menor de dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, en aquellas provincias donde presente organismos de dirección, de una lista con los nombres, número de Cédula de Identidad y Electoral y direcciones de aquellos que respaldan la solicitud, con no menos del uno por ciento (1%) de los votantes de las provincias en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, pero manteniendo siempre la obligatoriedad de depositar el listado total en el ámbito nacional con no menos del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales. Además de la indicada lista, estas informaciones deben presentarse en medios informáticos compatibles con los de la Junta Central Electoral;
- f) Una declaración de los organizadores en la cual se haga constar que el partido tiene organismos de dirección provisionales operando y locales abiertos funcionando en, por lo menos, en cada uno de los municipios cabeceras de provincias del país y del Distrito Nacional, y que los mismos deberán estar ubicados en las zonas urbanas. Esta declaración deberá acompañarse de una relación de dichos organismos de dirección, con indicación de los nombres, direcciones, profesión, número de Cédula de Identidad y Electoral, residencia y cargo de cada uno de los directores, así como las direcciones de los locales;
- g) El presupuesto de ingresos y gastos del partido durante el proceso de organización y reconocimiento, con



indicación detallada de los aportes recibidos y sus fuentes, así como de los egresos realizados hasta la fecha de solicitud. Nombres y cargos de las personas autorizadas a recabar y recibir fondos a nombre del partido y de los que aprueban los desembolsos y detalles del manejo de los fondos;

- h) El presupuesto de ingresos y gastos del partido hasta las próximas elecciones generales, con indicación detallada de las fuentes de ingresos.

La Junta Central Electoral verificará la veracidad de esas declaraciones.

Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones o partidos políticos deben ser sometidas a la Junta Central Electoral, a más tardar, ocho (8) meses antes de la fecha de celebración de la próxima elección ordinaria. En ese mismo plazo las agrupaciones independientes deben hacer a la Junta Central Electoral las declaraciones a que se refiere el Artículo 67 de esta ley.

No será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por una agrupación o partido político que hubiere sido reconocido en dos ocasiones o más y que se hubiere extinguido con posterioridad al último reconocimiento por una cualquiera de las causas establecidas en el Artículo 61 de esta ley.

Artículo 43.- Constitución del Partido.

Si la Junta Central Electoral encontrare que los principios y propósitos que sustentará el partido no están en conflicto con la Constitución y las leyes y que los documentos presentados en la solicitud se amoldan en su esencia y forma a las prescripciones legales, y luego de verificar que los requisitos establecidos en los literales e) y f) del Artículo 42 se han cumplido, extenderá el reconocimiento de dicho partido, lo comunicará así a los organizadores, quienes podrán entonces proceder a su constitución formal.



Al afecto, deberán promover la celebración de la asamblea constituyente, que estará integrada por delegados de cada uno de los municipios donde tenga órganos directivos y de los directorios provisionales. Corresponderá a la asamblea constituyente votar los estatutos, elegir los miembros de los cuerpos directivos y consultivos definitivos para el primer período que dichos estatutos determinen.

Los estatutos deberán disponer la reunión periódica de convenciones ordinarias, en las cuales residirá la autoridad del partido.

Artículo 44.- Formalidades Complementarias y Expediente del Reconocimiento.

Una vez celebrada la asamblea constituyente, el directorio nacional elegido por los delegados que a ella hubiesen concurrido completará la documentación enviada a la Junta Central Electoral con un ejemplar o copia certificada por funcionario competente, de las actas de las sesiones de dicha asamblea, en la que deberán constar los nombres de los delegados, los acuerdos y resoluciones adoptados, los resultados de la elección del directorio nacional del partido y el texto completo de los estatutos, tal como hubiesen quedado aprobados.

Con los documentos sometidos, según antes se ha dicho, la Junta formará el expediente del partido, que podrá ser libremente consultado. A dicho expediente serán incorporadas las resoluciones de carácter general que dicten las asambleas, las cuales, para su obligatoriedad, deberán ser autenticadas por la Junta con la leyenda: “Es conforme con la Legislación Electoral”. Al expediente serán también incorporados todos los documentos que se relacionen con alianzas o coaliciones concertadas por el partido o con la extinción de éste por cualesquiera de las causas previstas por la ley.

Las diferencias que surgieren entre la Junta y representantes legales de los partidos, en lo atinente a sus resoluciones, serán resueltas mediante procedimiento sumario que será establecido previamente por la Junta.



Artículo 45.- Efectos del Reconocimiento. Actos de Caracter Político.

Todo partido reconocido de conformidad con la presente ley estará en libertad de realizar todos los actos propios de ese género de instituciones, que no le estén prohibidos por la Constitución y las leyes, y deberá ceñirse a las disposiciones legales y a las que emanen de la Junta Central Electoral.

Se prohíbe a los partidos toda actividad que tienda o tenga por resultado suprimir, desconocer, disminuir o adulterar los derechos humanos o las libertadas, derechos o garantías individuales y sociales que consagra la Constitución, predicar, poner en práctica teorías o doctrinas que pugnen con la forma civil, republicana, democrática y representativa del gobierno; promover o propiciar la alteración del orden jurídico; escoger sus integrantes por razón de raza o religión; influir por medio de violencia, amenazas o engaños sobre los ciudadanos para obtener votos en favor de sus candidatos o en contra de los otros partidos; imponer o aceptar exacciones o deducciones de salarios a los empleados públicos o a las empresas particulares, aún cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios; y usar, en cualquier forma y a cualquier título, los bienes del Estado, de las provincias y de los municipios, o de los fondos públicos en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley.

Se prohíbe igualmente a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquier agrupación o partido político o de cualquier candidato, o permitirle el uso, en cualquier forma y a cualquier título, de tales bienes o fondos.

A más tardar sesenta (60) días antes de la fecha de cualquier elección, cada partido deberá presentar a la Junta Central Electoral una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos, desde las últimas elecciones. La Junta tendrá facultad para disponer el examen de los documentos relativos a los ingresos y gastos por intermedio de auditores designados por ella. La Junta podrá



disponer, según lo justifiquen a su juicio las circunstancias y el interés público, que este examen se verifique a expensas del Estado.

A más tardar tres (3) meses después de cada elección ordinaria, los partidos enviarán a la Junta Central Electoral informes pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto de establecer que sus fondos no provienen de fuentes que la ley prohíba y que han sido invertidos en actos lícitos de organización, proselitismo y propaganda.

Artículo 46.- Personalidad Jurídica.

Todo partido político reconocido estará investido de personalidad jurídica y podrá, en consecuencia, ser sujeto activo y pasivo de derechos y realizará todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para los fines que les son propios. Será representado de pleno derecho por el presidente de su órgano directivo central o por quien haga la veces de éste, salvo cuando hubiere otorgado regularmente mandato a otra u otras personas o entidades para tal representación.

Artículo 47.- Fuentes de Ingresos.

Todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica a los partidos son función exclusiva de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas. Por tanto, sólo se considerarán como ingresos lícitos de los partidos, los donativos o contribuciones que provengan de éstas; y será ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizadas o de empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extrajera, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas. Tal intervención, sea cual fuere la forma en que se produzca, constituye presunción de entendimiento con los partidos o sus candidatos en beneficio de los interesados de esas entidades o sus propietarios, socios,



accionistas, beneficiarios, directores o representantes, y en tal virtud, queda absolutamente prohibida.

Se prohíbe a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas, o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley. La Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado.

Es obligación de los partidos políticos depositar cada dos años en la Junta Central Electoral una lista actualizada de los miembros de sus órganos directivos y del tribunal disciplinario, para fines de control y de conocimiento por parte de la Junta Central Electoral.

SECCIÓN II

De La Contribución a los Partidos Políticos

Artículo 48.-

La contribución del Estado a los partidos políticos consiste en los aportes que éste les dará anualmente de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 49.-

Se consignará en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales.

**Artículo 50.- (Modificado art. 1, ley No. 78-05 del 18-08-05)**

En los años de Elecciones Generales, la distribución de las contribuciones ordinarias del Estado se hará de la manera siguiente:

- 1.- El ochenta por ciento (80%) se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los últimos comicios.
- 2.- El veinte por ciento (20%) se distribuirá de la siguiente manera: el doce por ciento (12%) en partes iguales para los que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las elecciones previas y los de nuevo reconocimiento si los hubiere; el restante ocho por ciento (8%) se distribuirá en proporción a los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones.

PARRAFO: Cuando luego de las elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidente de la República, hubiere de celebrarse una segunda ronda entre los dos candidatos más votados, el Estado proveerá adicionalmente el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de lo aportado ese año, a distribuirse entre los dos partidos, en partes iguales, a más tardar diez (10) días después de la proclama correspondiente”.

Artículo 51.- (Modif. art. 2, ley No. 78-05 del 18-08-05)

En caso de que dos o más partidos políticos concurren aliados a las elecciones con recuadro único, la parte correspondiente a la contribución electoral la recibirá el que personifique la alianza o coalición quedando a criterio de éstos la distribución entre sí.

PÁRRAFO 1: Cuando un partido político asiste a las elecciones pero con recuadros individuales y mantenga su



reconocimiento de conformidad con la presente ley, recibirá la contribución electoral de acuerdo a como lo establece el artículo 50 precedente.

PÁRRAFO II: En caso de que un partido político haya asistido a las elecciones, ya sea con recuadro único o con recuadro individual, y perdiera su reconocimiento por las causas establecidas en la presente ley, no tendrá derecho a los beneficios establecidos en el Artículo 50 precedentemente señalado”.

Artículo 52.-

Los partidos que hayan optado por la contribución electoral se obligan a crear un sistema contable de acuerdo a los principios legalmente aceptados, en el que se reflejen los movimientos de ingresos y egresos del partido.

PÁRRAFO I. El hecho de no recurrir a la contribución electoral no exime a partido alguno de implementar el indicado sistema contable, el que será auditado en el momento que la Junta Central Electoral lo disponga.

PÁRRAFO II. La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República, que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes.

Artículo 53.-

Si un partido que haya recibido la contribución electoral se retirare de participar en las elecciones sin causa de fuerza mayor que lo justifique tendrá que rembolsar al Estado las sumas obtenidas hasta el momento de su retiro.

Artículo 54.- (Modificación art. 3, ley No. 78-05 del 18-08-05)

En los años no electorales, la contribución de un cuarto por ciento (1/4%) de los ingresos nacionales se hará en pagos mensuales de duodécimas a los partidos que mantengan su reconocimiento, de conformidad a los mismos porcentajes establecidos en el Artículo 50 precedente.



PÁRRAFO: En los casos de las alianzas y coaliciones de partidos que participen con recuadros únicos, el texto de los acuerdos de las mismas debe especificar cómo se distribuirán entre éstos la contribución del Estado. En caso contrario, se entregará dicha contribución a los partidos que las personifiquen de acuerdo a la ley.

Artículo 55.-

Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas.

SECCIÓN III

De los Delegados de los Partidos Políticos

Artículo 56.- Designaciones, Condiciones.

Todo partido político reconocido que haya declarado su propósito de concurrir a una elección y de presentar candidaturas podrá designar un delegado, con el sustituto correspondiente, ante la Junta Central Electoral y ante cada junta y colegio electoral.

Salvo lo dispuesto en el Artículo 64 de esta ley, los partidos políticos reconocidos que concurren a las elecciones podrán designar un delegado, con el sustituto correspondiente, ante cada colegio electoral.

Estos nombramientos, así como la remoción de los designados, pueden ser hechos libremente y en tiempo por el organismo directivo del partido que representen, dentro de la jurisdicción de la junta ante la cual sean acreditados.

No podrán ser nombrados delegados de partidos políticos, ya sean titulares o sustitutos, los parientes o afines hasta el segundo grado inclusive, de cualesquiera de los miembros titulares o sustitutos de la junta ante la cual sean acreditados o del secretario titular o sustituto de la misma.



Los delegados ante una junta electoral permanente y sus sustitutos deben residir en el municipio donde tenga su asiento la junta ante la cual sean acreditados.

Artículo 57.- Sustitutos de Delegados.

Los sustitutos de los delegados reemplazarán a éstos en los casos de excusa, ausencia o impedimento temporal; y en caso de renuncia, muerte o inhabilitación, ejercerán sus funciones hasta cuando el organismo a quien corresponda haya hecho nueva designación.

En ausencia de un delegado o sustituto, podrá desempeñar sus funciones un candidato del partido que aquél represente.

Artículo 58.- Caso de falta de designación.

Cuando un partido que tenga el derecho de hacerlo de conformidad con esta ley, no hubiere nombrado su delegado ante una junta electoral, o el designado hubiere cesado y no hubiere sido reemplazado, ésta podrá constituirse válidamente sin su participación hasta cuando lo hiciere.

Artículo 59.- Funciones de los Delegados.

Además de las atribuciones que por esta u otra ley les sean conferidas, corresponde a los delegados en sentido general, la representación de los partidos que les hayan designado ante los respectivos organismos electorales.

Toda comunicación, petición, reclamación, protesta, impugnación o recurso, podrán ser presentados por mediación de dichos delegados, a menos que los organismos competentes de los partidos representados adopten y comuniquen otras decisiones en virtud de sus disposiciones estatutarias. Todas las comunicaciones, notificaciones, citaciones o avisos de cualquier género que las juntas electorales deban dirigir a los partidos reconocidos serán hechos válidamente en la persona o la dirección postal del correspondiente delegado, a menos que la ley determine otro procedimiento para ello.

Salvo los casos exceptuados por disposiciones de esta ley, los delegados y sus respectivos sustitutos deberán ser convocados



a todas las sesiones que celebren las juntas ante las cuales estén acreditados, del mismo modo y al mismo tiempo que los miembros de dichas juntas. Los delegados o sustitutos participarán en dichas sesiones con voz, pero sin voto. Los delegados o sustitutos que asistan a las sesiones deberán firmar las minutas de las mismas, pero si, por cualquier motivo, dejaren de hacerlo, esta circunstancia no invalidará el documento.

Los partidos políticos que hubiesen obtenido el dos por ciento (2%) o más de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales podrán acreditar, cada uno, un observador técnico en el Centro de Procesamiento de Datos de la Junta Central Electoral, con acceso a todas las informaciones técnicas producidas o procesadas por dicha dependencia. Estos observadores desempeñan sus funciones con arreglo a lo que reglamente la Junta Central Electoral. Los partidos políticos reconocidos que no hubieren obtenido el dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, elegirán entre todos ellos, por voto mayoritario, dos observadores técnicos que rendirán las mismas funciones.

SECCIÓN IV

Causas de Extinción

Artículo 60. -

Los partidos políticos se extinguen por una cualquiera de las siguientes causas:

1. Por acto voluntario adoptado en asamblea general ordinaria o extraordinaria del mismo partido.
2. Por fusión con uno o más partidos.
3. Por no haber alcanzado en alguna elección los sufragios requeridos.
4. Por no tener representación congresional o municipal;
5. Por no participar en dos elecciones generales ordinarias sucesivas.

SECCIÓN V

De la Extinción por Acto Voluntario

Artículo 61.- Comunicación a la Junta Central Electoral.

Todo acto voluntario por virtud del cual quede extinguido un partido político debe ser comunicado sin demora a la Junta Central Electoral por el directorio nacional o por representantes designados al efecto por la asamblea que lo hubiere acordado, remitiendo un ejemplar o copia, certificada por funcionario competente, del acta correspondiente. La Junta, previa verificación de la regularidad de la documentación presentada, dictará una resolución por medio de la cual declarará extinguido el partido y ordenará que su expediente sea clausurado y archivado, después de incorporar en él la referida documentación.

SECCIÓN VI

De las Fusiones, Alianzas o Coaliciones de Partidos

Artículo 62.- Aprobación e Impugnación de Fusiones, Alianzas y Coaliciones.

Los partidos políticos una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la presente ley y por los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral. Las fusiones, alianzas o coaliciones deberán ser aprobadas por mayoría de votos de los delegados de las convenciones nacionales que, a ese efecto, celebrare cada uno de los partidos y cuyas actas deberán ser sometidas al examen de la Junta Central Electoral, ante la cual podrán reclamar los disconformes con la fusión, la alianza o la coalición, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de aprobada ésta por las convenciones de los partidos; pero dichas reclamaciones deberán, en todo caso, fundarse en transgresiones de orden estatuario o legal bien definidas.

Las fusiones, alianzas y coaliciones son modalidades diferentes de vinculación de distintos partidos que deciden unir sus fuerzas, las cuales se definen como siguen:



Para los fines de esta ley:

Fusión es la integración de dos o más partidos con el objeto de constituir uno solo para todos los fines legales y electorales.

Alianza es el acuerdo establecido entre dos o más partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más demarcaciones electorales.

Coalición es el conjunto de partidos que postulan los mismos candidatos y que han establecido alianzas electorales con uno o más de los integrantes de la misma, aunque no con todos ellos, siempre que tengan en común un partido que los personifique.

Es potestativo de la Junta Central Electoral denegar de plano las reclamaciones contra las fusiones, alianzas o coaliciones de partidos, o conocer de ellas contradictoriamente, en forma sumaria.

La solicitud de aprobación de fusión, alianza o coalición deberá ser depositada en la Secretaría de la Junta Central Electoral a más tardar setenta y cinco (75) días antes de la fecha señalada para las próximas elecciones, acompañada de los documentos que requiere la Junta Central Electoral.

La Junta Central Electoral fijará la audiencia correspondiente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, y convocará a todos los partidos políticos reconocidos para conocer el caso, el cual será decidido dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas.

La resolución que dicte la Junta Central Electoral al respecto deberá ser publicada conjuntamente con el pacto de fusión, alianza o coalición, en espacio pagado en un periódico de circulación nacional, a cargo del partido político que conserve el reconocimiento, en caso de fusión, y a cargo de la Junta Central Electoral o del partido más diligente, en caso de alianza o coalición. Ambos documentos serán comunicados por escrito a todos los demás partidos políticos reconocidos, dentro de los diez (10) días de haber sido dictadas, sin lo cual no tendrá validez la fusión, alianza o coalición de que se trate. El cumplimiento de esta disposición se probará con el depósito en la Secretaría de la Junta



Central Electoral de un ejemplar certificado por el editor del diario en el cual se hizo la publicación y la constancia de recibo de las comunicaciones hechas por la Junta o el partido interesado a los demás partidos políticos reconocidos.

Cuando el partido o agrupación política a quien se dirige la comunicación se negare a firmar un ejemplar de la carta de remisión como constancia de recepción de los documentos a que se refiere este artículo, el partido remitente lo enviará por acto de alguacil, hecho que comunicará a la Junta Central Electoral, vía secretaría, en los tres (3) días siguientes a la fecha de remisión, con copias de constancia del acto de alguacil.

Artículo 63.- De la Fusión.

La fusión determina la extinción de la personería de todos los partidos que intervengan en ella, subsistiendo únicamente la de aquél que personifique la fusión.

Artículo 64.- De las Alianzas y Coaliciones.

La alianza o coalición de partidos tendrá siempre un carácter transitorio y, dentro de ella, cada uno de los partidos aliados o coaligados conserva su personería, limitada por el pacto de alianza o coalición a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de afiliados. Para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad, con una representación común, igual a la de los otros partidos, en las juntas electorales y colegios electorales.

PÁRRAFO I. Las alianzas o coaliciones podrán pactarse con recuadro único y recuadro individual, solamente con respecto al partido que personifique la alianza en la boleta electoral.

PÁRRAFO II. Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidatos de un mismo nivel:

- a) Para las candidaturas presidencial y vicepresidencial.
- b) Para todas las candidaturas del país en los niveles congresionales y municipales.



- c) Para todas las candidaturas del país de nivel congresional o municipal.
- d) Para candidaturas congresionales o municipales en una o varias demarcaciones políticas.

Las agrupaciones políticas accidentales independientes, en razón de su carácter, no podrán establecer alianza o coalición con los partidos políticos, y en caso de que lo hagan con otra agrupación similar, se considerarán fusionadas en una sola para todos los fines de la presente ley.

A los partidos y agrupaciones que no hayan hecho pacto de alianza o coalición, no podrán sumárseles los votos para los fines de una elección aunque hubiesen presentado los mismos candidatos.

SECCIÓN VII

De la Extinción por no alcanzar suficientes Votos o Representación Congresional o Municipal

Artículo 65.-

Después de cada elección general, si de conformidad con los resultados del cómputo nacional que deberá verificar la Junta Central Electoral de acuerdo con la presente ley, y que habrán de constar en la relación general que dicha Junta deberá formular y hacer publicar, si algún partido se encuentra en una de las situaciones siguientes:

- a) No haber obtenido por lo menos un dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones nacionales ordinarias presidenciales, siempre y cuando no ostente representación congresional o municipal;
- b) No haber obtenido representación a nivel congresional o municipal;
- c) No haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas.

En estos casos, la Junta Central Electoral, mediante resolución motivada, declarará extinguida la personería legal de dicho partido, cerrará el expediente y ordenará su depósito en el archivo de la Junta.

SECCIÓN VIII

Liquidación

Artículo 66.-

Cuando un partido quedare extinguido, excepto en el caso de fusión, su patrimonio será liquidado de conformidad con disposiciones que para tal fin deberán contener sus estatutos o documentos constitutivos, bajo la fiscalización de la Junta Central Electoral.

TÍTULO IX

DE LOS CANDIDATOS DE PARTIDOS

SECCIÓN I

De la Nominación

Artículo 67.- Derecho de proponer Candidatos.

Todo partido político que esté reconocido de conformidad con la presente ley tiene el derecho de proponer candidatos a cualesquiera cargos electivos que hayan de cubrirse, siempre que se ciña a los requisitos, formalidades y plazos que para ello se establecen más adelante.

Artículo 68.- Nominación de Candidatos. (Modificado Ley 12-2000 del 2/03/2000)

La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres (3) días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de aviso público en un diario de circulación nacional.

Además dichas convenciones deberán estar constituidas de conformidad con las disposiciones que a ese respecto habrán de contener los estatutos del partido.

En la composición total de las nominaciones y propuestas a la Junta Central Electoral, cuando se trate de cargos de



diputados, en la composición total de las nominaciones y propuestas a la Junta Central Electoral, los partidos y las agrupaciones políticas incluirán una proporción no menor del treinta y tres por ciento (33%) de mujeres a esos cargos. Igual proporción de mujeres incluirán en las nominaciones y propuestas que formulen los partidos y las agrupaciones políticas para los cargos municipales presentados por ante las juntas electorales del municipio correspondiente, excepto el cargo de síndico. Este porcentaje deberá ser colocado en la lista de elección en lugares alternos con relación a los cargos asignados a los hombres. La Junta Central Electoral y las juntas electorales velarán porque se cumplan estas disposiciones incluyendo las circunscripciones electorales. Toda propuesta en la cual no se respete este porcentaje será nula y no podrá ser aceptada por el organismo electoral. (Modificado Ley No. 12-2000 del 2-03-2000)

SECCIÓN II

De las Propuestas

Artículo 69.- Forma de las Propuestas.

Las propuestas de candidatos serán formuladas por el organismo directivo central o por los respectivos organismos directivos provinciales, municipales o del Distrito Nacional, según los casos, de conformidad con las designaciones hechas por las convenciones correspondientes; y serán presentadas por medio de escrito que se entregará al Secretario de la Junta Central Electoral o de la correspondiente junta electoral.

I. TODA PROPUESTA DEBERA EXPRESAR:

- a) El nombre del partido que la sustente;
- b) La fecha o el lugar en que se hubiere celebrado la convención que haya hecho la nominación de los candidatos comprendidos en ella;
- c) El nombre, edad, ocupación, estado civil, domicilio o residencia y Cédula de Identidad y Electoral de cada



uno de los candidatos comprendidos en la propuesta, así como el cargo para el cual se le propone, la división territorial a que corresponde y el período durante el cual deberá ejercerlo.

- d) La indicación del emblema o la enseña con que será distinguida la candidatura, si no se encontrare ya depositado en ocasión del reconocimiento del partido que haga la propuesta.

PÁRRAFO I. Todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por una agrupación o partido político para cargos de presidente y vicepresidente de la República, senador, diputado y síndico municipal y regidores, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso facto, con disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones.

PÁRRAFO II. Se exceptúan de estas disposiciones los postulados a tales cargos que, al momento de la aceptación de su candidatura, ocupen cargos electivos. Pero no podrán prevalerse de su condición en actos públicos o ante los medios de comunicación para no crear desigualdad frente a los demás candidatos.

II. A LA PROPUESTA SE LE DEBERA ACOMPAÑAR DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- a) Una copia del acta de la convención que hubiera acordado la nominación de los candidatos comprendidos en ella, debidamente certificada por el presidente y por el secretario de la convención;
- b) Un ejemplar, certificado por el impresor, de la edición del diario en la que haya publicado la convocatoria para la convención; y



- c) Ninguna propuesta deberá contener más de un candidato para cada uno de los cargos que deban ser cubiertos por elección.

Artículo 70.- Plazos.

Las propuestas, para que puedan ser admitidas deberán ser presentadas a más tardar sesenta (60) días antes de la fecha en que deba celebrarse la próxima elección ordinaria. Cuando se trate de elección extraordinaria, la Junta Central Electoral determinará el plazo dentro del cual deben presentarse las propuestas.

Artículo 71.- Publicación y Comunicación.

En el mismo día de la presentación de la propuesta de candidatos, o a más tardar a las diez horas de la mañana del día siguiente, el Secretario de la Junta Central Electoral o de la junta electoral a quien le hubiere sido entregada, fijará copia en la tablilla de publicaciones y dará cuenta de ella al presidente de la junta, quien ordenará que sea comunicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a las juntas de su dependencia, a fin de que a su vez procedan a hacer publicar la propuesta en igual forma, y que se remita copia a cada una de las demás agrupaciones y partidos reconocidos.

Artículo 72.- Corrección de Defectos e Irregularidades.

Los defectos e irregularidades de que adolezcan las propuestas pueden ser corregidos en la secretaría de la junta a la cual hayan sido sometidas por cualquier representante debidamente autorizado del organismo que las hubiere formulado, hasta el momento en que la junta competente hubiere conocido de dichas propuestas.

Artículo 73.- Conocimiento y Decisión.

La junta electoral a la cual haya sido sometida una propuesta de candidatos deberá reunirse dentro de los cinco (5) días que sigan a su presentación y declarada admitida, cuando compruebe que se ajusta a todas las disposiciones



pertinentes de la Constitución y de las leyes. En caso contrario, la rechazará.

La resolución que intervenga deberá ser comunicada al organismo directivo de la agrupación o partido que hubiere presentado la propuesta, así como a los organismos directivos de los demás partidos que hubiesen propuestos candidatos dentro de las veinticuatro horas siguientes a la resolución de aceptación o rechazo. Cuando dicha junta no decida dentro del indicado plazo de cinco (5) días, el secretario estará obligado a remitir inmediatamente, a la Junta Central Electoral, al vencimiento del expresado plazo, una nómina certificada de las candidaturas y toda la documentación de la propuesta, a fin de comprobar si reúne las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes, sin lo cual será rechazada.

Artículo 74.- Apelación o Revisión.

De las resoluciones que dicten la Junta Central Electoral y las juntas electorales de conformidad con el artículo precedente, se podrá recurrir en apelación o en revisión ante la Junta Central Electoral, según que la resolución emane de alguna junta electoral o de la propia Junta Central Electoral, dentro de los tres (3) días de haber sido comunicada. La Junta Central Electoral fallará sumariamente dentro de los que dictare será comunicado inmediatamente a los interesados, así como a la junta electoral de donde emane la disposición impugnada cuando se tratare de una apelación.

Artículo 75.- Resolución de Admisión de Candidaturas.

La Junta Central Electoral comunicará a las juntas de su dependencia y a todos los partidos que hubieren hecho propuestas las candidaturas que hubieren sido admitidas por aquéllas, para los efectos de publicación dentro de las veinticuatro (24) horas de haberlas admitido.

Admitida una candidatura, no podrá ser retirada ni rectificada por el partido o la agrupación que la hubiere presentado, salvo el caso de que uno o varios de los candidatos comprendidos en ella



renunciaren, fallecieren, quedaren incapacitados o fueren rechazados. En estos casos, la nueva propuesta podrá ser hecha por el organismo directivo correspondiente del partido o la agrupación que sustente la propuesta, y la Junta Central Electoral o la junta electoral correspondiente conocerá de ella en forma sumaria y sin lugar a recurso alguno.

Si la muerte, renuncia, inhabilitación o rechazamiento de uno o más candidatos ocurriere cuando ya no fuere posible imprimir en las boletas los nombres de los candidatos designados para reemplazarlos, los votos que sean emitidos a favor de los candidatos muertos, renunciantes, inhabilitados o rechazados serán computados en favor de los nuevos candidatos propuestos por el partido político correspondiente.

La Junta Central Electoral o las juntas electorales, una vez que hayan aceptado la nueva propuesta, lo comunicará a las juntas electorales correspondientes, a fin de que se proceda en la forma en que se indica en este párrafo.

SECCIÓN III

De las Candidaturas Independientes

Artículo 76.- Declaración.

Podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial o municipal, que surjan a través de agrupaciones políticas accidentales en cada elección. Al efecto, las agrupaciones que se propongan sustentarlas deberán declararlo previamente a la Junta Central Electoral, cuando menos sesenta (60) días antes de cada elección.

Para sustentar candidaturas independientes provinciales, municipales en el Distrito Nacional, las agrupaciones políticas deberán estar constituidas por un número de miembros no menor del porcentaje que, a continuación, se indica, calculado sobre el número de inscritos en el Registro Electoral:

Quando el número de inscritos en el Distrito Nacional o en un municipio sea de 5,000 ó menos.....20%



- Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional o en un municipio sea de 5,001 a 20,000..... 15%
- Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional o en el municipio sea de 20,001 hasta 60,000 12%
- Cuando el número de inscritos en el Distrito Nacional o en el municipio exceda de 60.000..... 7%

Artículo 77.- Requisitos.

Para sustentar candidatura independiente para la presidencia de la República se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en toda la República, y un programa de gobierno definido para el período en que hayan de presentarse.

Las candidaturas para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva.

Las candidaturas para cargos de elección popular en los municipios deberán presentar a la Junta Central Electoral una organización municipal completa y un programa a cumplir durante el período a que aspiren los candidatos.

Serán aplicables a las candidaturas independientes y a las agrupaciones que las sustenten las demás disposiciones que establece la presente ley en lo que se refiere a los partidos políticos y a las candidaturas sustentadas por éstos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral.

Artículo 78.- Candidaturas Municipales en Elecciones Sucesivas.

Las agrupaciones que sustenten candidaturas independientes para cargos electivos en los municipios podrán mantener sus organizaciones locales e intervenir en elecciones sucesivas, siempre que cumplan con los requisitos del Artículo 60.



TÍTULO X

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Artículo 79.-

Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen.

Artículo 80.-

Las circunscripciones electorales partirán de la división en cuarteles, Secciones y parajes que han sido implementados por la Junta Central Electoral, asignando la cantidad de diputados y regidores correspondientes de conformidad con el número de habitantes, tomando en cuenta que la suma de los representantes por circunscripciones electorales debe coincidir con la cantidad que tiene derecho a elegir en la división política correspondiente, según lo establece la Constitución de la República.

PÁRRAFO I. Para los fines de elecciones congresionales, las circunscripciones deben tener 50,000 habitantes o fracciones no menor de 25,000, y pueden cubrir territorialmente más de un municipio, siempre garantizando que por la provincia no haya menos de dos (2) diputados al Congreso.

PÁRRAFO II. Para los fines de elección de regidores, los municipios se dividirán por circunscripciones, tomando en cuenta la cantidad de habitantes y la extensión geográfica de conformidad a la ley y a la Constitución. Estas circunscripciones pueden no coincidir con las mismas que representan los diputados.

PÁRRAFO III. Los votos computados a los candidatos de una circunscripción determinada no les serán sumados a candidatos de otras circunscripciones, aunque sean del mismo partido.



PÁRRAFO IV. Se exceptúan de la presente disposición los candidatos a senadores y síndicos, a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia o en el municipio, según sea el caso.

Artículo 81.-

En los casos de las provincias o los municipios en las que no sea necesario o posible el establecimiento de estas subdivisiones territoriales demográficas, sus diputados y regidores se elegirán en su conjunto conforme a lo establecido en esta ley y la Constitución de la República.

Para la implementación de las circunscripciones electorales, la Junta Central Electoral se auxiliará, además de su Sección de Estadísticas, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y de cualquier otra institución del Estado que sea preciso.

En aquellos municipios en que se hayan establecido las circunscripciones electorales, las juntas electorales harán el cómputo de los votos válidos, tomando en cuenta dichas subdivisiones, para garantizar rigurosamente los resultados que correspondan a cada circunscripción.

PÁRRAFO. El departamento de procesamiento de datos electrónicos de la Junta Central Electoral, en su programa de conteo de votos, tomará en cuenta estas disposiciones, a fin de hacer los ajustes correspondientes.

TÍTULO XI DEL SUFRAGIO DE LOS DOMINICANOS EN EL EXTRANJERO

Artículo 82.-

Los dominicanos residentes en el extranjero, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrán ejercer el derecho al sufragio para elegir presidente y vicepresidente de la República.

Artículo 83.-

La Junta Central Electoral dictará cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación del sistema del sufragio de los dominicanos residentes en el exterior.

**Artículo 84.-**

La Junta Central Electoral, después de haber tomado las medidas pertinentes para hacer posible el ejercicio del sufragio de los dominicanos residentes en el exterior, reglamentará el procedimiento y la forma. Su ejecución se establece a partir del año 2000, pero queda a opción de la Junta Central Electoral (JCE) la fecha definitiva en que entrará en vigencia lo previsto en el Artículo 83 de la presente ley.

Artículo 85.-

En el Presupuesto Nacional y la Ley de Gastos Públicos se harán consignar las partidas presupuestales estimadas por la Junta Central Electoral para la implementación de las elecciones de los dominicanos en el extranjero.

TÍTULO XII DE LAS ELECCIONES

SECCIÓN I

Disposiciones Preliminares

Artículo 86.- Clasificación.

Se entiende por elecciones ordinarias aquéllas que se verifican periódicamente en fechas previamente determinadas por la Constitución. Se denominan elecciones extraordinarias, las que se efectúen por disposición de una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas determinadas de antemano por preceptos constitucionales para proveer los cargos electivos correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones, de acuerdo con la ley o para cualquier otro fin.

Se entenderá por elecciones generales las que hayan de verificarse en todo el territorio de la República. Se entenderá por elecciones parciales, las que se limiten a una o varias divisiones de dicho territorio.



Se denominará nivel de elecciones el que contienen candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas. El nivel presidencial se refiere a la elección conjunta del presidente y del vicepresidente de la República. El nivel provincial, se refiere a la elección conjunta de senadores y diputados. El nivel municipal se refiere a la elección conjunta de síndicos, regidores y sus suplentes.

Artículo 87.- Proclamas.

Toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral.

La proclama anunciará la clase de elección, la extensión territorial que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse, la fecha en que tendrá lugar, los cargos que hayan de ser provistos, el período para el cual han de serlo y cualesquiera otros particulares que se estimen necesarios o útiles.

La proclama por la cual se anuncie una elección ordinaria deberá ser publicada a más tardar noventa (90) días antes de la fecha en que deba celebrarse. La proclama para la segunda elección será publicada dentro de los tres (3) días siguientes de haberse proclamado las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos válidos en la primera elección. La que se refiere a una elección extraordinaria deberá publicarse dentro de los cinco (5) días que sigan a la publicación de la ley de convocatoria, cuando ésta haya sido dispuesta por ese medio; y por la propia resolución de la Junta Central Electoral que disponga la celebración de tal elección, cuando le haya sido otorgada a dicha junta electoral la atribución de convocarla.

SECCIÓN II

Del Periodo Electoral

Artículo 88.- Comienzo y Terminación.

El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos.



Artículo 89.- Seguridad Personal.

Durante los ocho (8) días que precedan a una elección, y en el día en que ésta se celebre, no podrán ser privados de su libertad, salvo en caso de crimen flagrante:

- a) Los candidatos;
- b) Los miembros, secretarios y escribientes de las juntas electorales y sus suplentes;
- c) Los representantes acreditados ante las juntas electorales por las agrupaciones y partidos políticos reconocidos, y sus sustitutos;
- d) Los miembros de los organismos directivos de las agrupaciones y partidos políticos debidamente reconocidos;
- e) Los funcionarios de la Junta Central Electoral especificados en el Párrafo II de las atribuciones reglamentarias del Artículo 6 de esta Ley Electoral.
- f) Las personas comprendidas en los literales que anteceden podrán acreditar su identidad por medio de certificaciones que, a su solicitud, les serán expedidas por la Junta Central Electoral o la junta electoral correspondiente ante la cual estén acreditados o por la cual hayan sido designados.
- g) Si en violación de esta prohibición una persona fuere privada de su libertad, cualquiera otra persona podrá requerir, por medio de escrito a cualquier juez o autoridad de la República, para que ponga inmediatamente en libertad a la persona a quien se hubiere privado de ella; y si el requerido no lo hiciera en el término de una hora, se recurrirá a la Junta Central Electoral para que decida sin demora su puesta en libertad.

Artículo 90.- Libertad De Reunion.

Las reuniones públicas de ciudadanos para fines electorales pueden celebrarse sin licencia, o permiso oficial, y no podrán ser entorpecidas por ningún funcionario o



autoridad. Cuando se trate de manifestaciones o mítines de partidos diferentes, no podrán celebrarse en una misma ciudad o localidad en un mismo día.

Estará a cargo de la Junta Central Electoral reglamentar todo lo dispuesto en este artículo.

Artículo 91.- Libertad De Tránsito.

La libertad de tránsito de los dirigentes, candidatos y delegados de los partidos y agrupaciones reconocidos no podrá ser restringida por parte de las autoridades públicas durante el período electoral, con excepción de los casos de crimen flagrante o de orden escrita y motivada de juez competente fundada en la ley.

Queda prohibido a los ayuntamientos y a toda autoridad administrativa o judicial, o a cualquier miembro de la Policía Nacional o de la fuerza pública, tomar disposiciones de cualquier naturaleza que puedan entorpecer el libre tránsito de los electores en sus respectivos municipios, desde que quede abierto el proceso electoral. Tampoco podrán, por ningún medio, dificultar el ejercicio del sufragio. Son nulas de pleno derecho las disposiciones que hubieren dado en tal sentido.

Artículo 92.- Protección de los Bienes de Agrupaciones Y Partidos.

Los locales de las agrupaciones y partidos políticos reconocidos, sus bienes muebles e inmuebles, y, en general, todo cuanto constituya su patrimonio, en ningún caso podrá ser objeto de persecución, embargo, secuestro, expropiación o desposesión total o parcial, ni por parte de las autoridades públicas ni de particulares, durante el período electoral.

Artículo 93.- Inviolabilidad de la Correspondencia Y Documentos.

La correspondencia, los documentos, registros, papeles y archivos pertenecientes a las agrupaciones y partidos políticos, y que se encuentran en sus locales, oficinas y dependencias,



no podrán ser ocupados ni registrados por las autoridades públicas durante el período electoral, salvo en los casos de delito flagrante o por orden escrita y motivada de juez competente fundada en la ley.

Artículo 94.- Igualdad de Acceso a Medios de Divulgación.

Todas las agrupaciones o partidos políticos deberán disfrutar de posibilidades iguales para la utilización de los medios de divulgación durante el período electoral. En consecuencia:

- a) Se prohíbe a las empresas o servicios de divulgación, tales como los periódicos y revistas, servicios de prensa, radio, televisión, cinematógrafos y otros, y a los de correos, transporte o distribución de correspondencia, teléfonos, telégrafos y otros servicios de telecomunicaciones, negar o restringir injustificadamente el uso de sus instalaciones o servicios a ninguna agrupación o partido político reconocido o en formación, que esté dispuesto a pagar para utilizarlos, las tarifas acostumbradas, que no podrán ser mayores para la actividad política que las que se pagan por dichos espacios, servicios o instalaciones cuando se trate de asuntos comerciales, profesionales, personales o de cualquier otra índole.
- b) Se prohíbe a los abastecedores de papel en general, papel de periódico o papelería de oficina, así como a las imprentas, talleres de litografía o de otras artes gráficas, negar o restringir injustificadamente el suministro de sus materiales o servicios a ninguna agrupación o partido político reconocido o en formación, que esté dispuesto a pagar los precios acostumbrados para la obtención de esos materiales o servicios.
- c) Una vez concluido el plazo para la presentación de candidaturas y aprobadas éstas, la Junta Central Electoral dispondrá que, a los partidos y/o alianzas o coaliciones que hubieren inscrito candidatos presidenciales, congresionales y municipales, se les concedan espacios gratuitos para promover sus

candidaturas y programas en los medios de masa electrónicos de radio y televisión propiedad del Estado. Dichos espacios deberán ser asignados conforme a los principios de equidad e igualdad.

- d) Durante el período electoral ninguna agrupación o partido político podrá usar frases ni emitir conceptos, por cualquier medio de difusión, contrario a la decencia, al decoro y a la dignidad de las agrupaciones o partidos políticos adversos o a sus candidatos. Con este fin, la Junta Central Electoral queda investida de la facultad de hacer admoniciones a las agrupaciones o partidos políticos que violen esta norma de la propaganda, con derecho a requerir de la persona o empresa de divulgación o comunicación de masas la identificación de la entidad política o su representante que autorizó a efectuar tal publicación, y publicar el desagravio o desmentido correspondiente según la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.

SECCIÓN III

De la Boleta Electoral

Artículo 95.- Fecha en que debe disponerse la impresión.

Tan pronto como las juntas electorales a las cuales se hayan sometido propuestas de candidatos se pronuncien respecto de su admisión o su rechazamiento de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, o cuando haya recaído decisión sobre los recursos de apelación o de revisión que hubieren sido interpuestos, la Junta Central Electoral ordenará la impresión de las boletas que deban utilizarse para la votación, a fin ponerlas en tiempo oportuno a disposición de las juntas que hayan de intervenir en la elección.

Artículo 96.- Cantidad.

Las boletas serán impresas en la cantidad que la Junta Central Electoral estime necesaria para cada municipio, de acuerdo con la población electoral.



Artículo 97.- Forma.

Las boletas se imprimirán con tinta negra, en cartulina o papel grueso que no sea transparente, y con el formato que establezca la Junta Central Electoral.

En el encabezamiento se imprimirá la leyenda República Dominicana, el nombre de la provincia y el municipio a los cuales corresponda; la clase y la fecha de la elección. Habrá un recuadro para cada partido en la boleta. Se imprimirá a continuación el nombre y el símbolo o emblema del partido, o la candidatura, que haya hecho la propuesta, y debajo de éste, el nombre del candidato, si fuere uno sólo, o los nombres de los candidatos, si fueren varios; en este caso, en el mismo orden en que figure en la propuesta correspondiente.

Los diversos cargos que hayan de cubrirse serán colocados en orden de arriba a abajo. Cuando la Junta Central Electoral dispusiere un tipo de boleta que incluya dos o más partidos y que su diseño o tamaño no permita la colocación de los nombres de todos los candidatos, ordenará la confección de carteles que se colocarán en lugar visible en el interior de los locales que ocupen los colegios electorales, de modo que puedan ser consultados por los sufragantes al momento de votar, en los cuales figurarán los nombres de todos los candidatos para todos los cargos, con indicación de los partidos que los postulan, en el mismo orden en que figuran en la propuesta correspondiente.

La Junta Central Electoral publicará, en un periódico de circulación nacional, por lo menos cinco (5) días antes de la fecha de la elección, un facsímil de la boleta. Cuando se trate de candidatos congresionales o municipales, bastará con la publicación de una lista contentiva de los nombres, cargos y partidos que postulan a los candidatos.

Si un partido retira su participación en las elecciones, luego de estar confeccionados los artes de las boletas electorales, deberán hacerse las gestiones de lugar para que el recuadro del partido quede vacío. Si no es posible, porque se hayan impreso las boletas con el recuadro del partido retirado, las boletas



marcadas en dicho recuadro se considerarán nulas de pleno derecho.

SECCIÓN IV

Locales, Materiales y Útiles para los Colegios Electorales Locales.

LOCALES

Artículo 98.- Obtención.

A más tardar treinta días antes de la fecha en que deba celebrarse una elección, las juntas electorales escogerán los locales en que hayan de funcionar los colegios electorales correspondientes a sus respectivas jurisdicciones, cuya obtención deberán gestionar con arreglo a las disposiciones de la presente ley y a las órdenes e instrucciones que al efecto dicte la Junta Central Electoral.

Artículo 99.- Requisitos.

La selección de los centros de votación se haría a partir de un inventario y un análisis de la situación de los locales que en el pasado han sido utilizados por la Junta Central Electoral para la realización de los comicios, tanto desde el punto de vista de los colegios electorales que puedan acoger, como de las condiciones que posean para garantizar una votación adecuada y eficiente.

En adición, si fuere necesario, se seleccionarían nuevos locales que reúnan las condiciones para alojar colegios electorales y facilitar la mayor fluidez en las operaciones de identificación de los electores, realización de las votaciones y escrutinios de los votos.

Los colegios electorales deberán instalarse con preferencia en edificios públicos o en escuelas de los barrios o Secciones a que correspondan. Estas deberán tener, por lo menos, dos puertas, a fin de que los electores entren y salgan de la sala de votaciones por puertas distintas, que serán previamente señaladas por el presidente del colegio electoral.

**Artículo 100.- Anuncio.**

El local donde funcionará cada colegio electoral será anunciado con un mes de anticipación a la fecha de las elecciones, y no se cambiará después sin el consentimiento expreso de la Junta Central Electoral. Sólo se cambiará por alguna causa que impidiera su uso para fines electorales.

Si hubiere necesidad de cambiar el local destinado a un colegio electoral, la junta electoral lo decidirá, y se procederá a instalarlo en otro que quede lo más cerca posible del anterior, anunciándose el cambio por medio de edictos en sitios adecuados y por cualesquiera otros medios que fueren posibles.

Artículo 101.- Distribución y Mobiliario.

En el local donde funcione cada colegio electoral, se colocará un escritorio o mesa, que será ocupado por los miembros del colegio que tengan funciones específicas.

La urna será colocada frente al escritorio de trabajo, visible y bajo la supervisión directa de los miembros del colegio. La caseta de votación tendrá cuatro compartimientos, a fin de que cuatro ciudadanos al mismo tiempo puedan marcar su boleta manteniendo la privacidad. Debe colocarse en un lugar visible para que pueda ser supervisada por los miembros del colegio.

Si al ubicar la caseta hubiere ventanas, puertas o rendijas contiguas al lugar en que se coloque, éstas deben ser clausuradas y selladas por el presidente y el secretario del colegio. Estos sellos no deben quitarse hasta que concluya la votación.

ATERIALES Y ÚTILES**Artículo 102.- Materiales y Útiles.**

La Junta Central Electoral hará llegar a las juntas electorales, con antelación suficiente al día de las elecciones, las boletas y sobres para boletas observadas, impresos para declaraciones de protestas, los efectos de escritorio, lápices, impresos, libros para actas y registros y cualesquiera otros materiales y útiles



que fueren necesarios para el cabal cumplimiento de las atribuciones que corresponden a los colegios electorales.

Las juntas electorales darán recibo a la Junta Central Electoral por dichos materiales y útiles en detalle y serán responsables de su conservación hasta cuando hayan hecho entrega de los mismos a los colegios electorales.

Artículo 103.- Entrega, Responsabilidad.

Con no más de cuatro (4) ni menos de dos (2) días de antelación a la fecha de una elección, el presidente y el secretario de cada colegio electoral se presentarán en la secretaría de la junta electoral de su jurisdicción y recibirán del secretario de la misma los materiales para uso del colegio electoral, así como las boletas y copias certificadas de la lista de electores a quienes corresponda votar en ella, la que será extractada del Registro Electoral.

El secretario de la junta electoral expedirá el recibo correspondiente. A partir de ese momento el presidente y el secretario de cada colegio electoral serán responsables de la debida conservación y uso de dicho material.

El presidente del colegio electoral quedará especialmente encargado de la conservación y el uso del sello del colegio electoral, del cual no deberá desprenderse, a no ser para entregarlo a quien legalmente le sustituya en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.- Instrucciones a los Colegios Electorales.

Las juntas electorales deberán reunir el personal de los colegios electorales de su jurisdicción, por lo menos dos (2) días antes de las elecciones, con el fin de instruirlos en lo concerniente al ejercicio de las atribuciones que les correspondan. Al efecto, les harán entrega de las cartillas, circulares y cualesquiera otros medios de instrucción; les enseñarán muestras de las boletas que vayan a ser utilizadas, de los pliegos destinados a la formulación de relaciones, y del libro de actas; y les explicarán cuidadosamente el uso de cada uno de los registros y formas



impresas y de los materiales y útiles, indicándoles las disposiciones de esta ley a las cuales habrán de ajustar sus actuaciones. Las juntas electorales deberán responder, en todo momento, a las consultas que se les hicieren y darán explicaciones respecto del cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES DESTINADAS A ASEGURAR EL LIBRE EJERCICIO DEL DERECHO DE ELEGIR

Artículo 105.- Caracter no Laborable del Día de Elección.

El día en que se celebren elecciones de cualquier clase no será laborable en el territorio en que hayan de efectuarse. Cuando se trate de trabajos que no puedan ser suspendidos, los empleadores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar que tengan a su servicio dispongan del tiempo que fuere menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salarios y otros derechos que les correspondan.

Artículo 106.- Libertad Individual.

Ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión o privar en cualquiera otra forma de su libertad a un ciudadano hábil para votar, durante las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, salvo en caso de flagrante delito, o en virtud de orden escrita y motivada de juez competente.

Artículo 107.- Libertad de Tránsito.

En ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores hasta los lugares de votación durante el tiempo necesario para trasladarse a ellos con el fin de ejercer este derecho y para regresar a sus domicilios o puntos de partida.

Artículo 108.- Prohibición de Espectáculos y Manifestaciones.

Durante el día de la elección no podrán celebrarse espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado; ni desde



veinticuatro horas antes podrán llevarse a efecto manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

Tampoco podrá hacerse en el mismo intervalo de veinticuatro horas antes de la elección ninguna clase de incitación ni propaganda electoral por la prensa, radio, televisión, avisos, carteles, telones y otros medios similares.

De la misma forma, queda prohibido la propaganda en los colegios electorales el día de las elecciones.

Artículo 109.- Prohibición del expendio de bebidas.

Desde veinticuatro horas antes de la elección, no podrá expendirse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas, hasta tres horas después de terminada la votación.

Artículo 110.- Prohibición de injerencia u ostentación de fuerzas armadas.

Queda prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección. La actuación de las Fuerzas Armadas, en general, con excepción de las de la Policía Electoral indispensables para mantener el orden durante el acto electoral estará sujeta a lo que se dispone en la presente ley, y deberán permanecer acuartelados durante todo el día en que aquél se realice.

Los jefes u oficiales de las Fuerzas Armadas y autoridades policiales no podrán encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio, ni tampoco hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.

El personal retirado de las Fuerzas Armadas, cualquiera que fuere su jerarquía, no podrá concurrir vistiendo uniforme a ningún acto político electoral.

Sólo los agentes de la Policía Electoral que estén al servicio de las autoridades electorales pueden penetrar armados en los locales en donde se efectúen las inscripciones y las votaciones, cuando fueren requeridos.

**Artículo 111.- Amparo.**

Todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquier otra persona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o autoridad, y especialmente ante la Junta Central Electoral o por ante la junta electoral correspondiente.

Artículo 112.- Independencia de acción del personal de los Colegios Electorales.

Los miembros y secretarios de los colegios electorales, así como los delegados de agrupaciones o partidos políticos que actúen en ellos y sus respectivos sustitutos, obrarán con entera independencia de toda autoridad, y no estarán obligados a obedecer ninguna orden que les impida el ejercicio de sus funciones. Mientras permanezcan en ese ejercicio no podrán ser privados en forma alguna de su libertad, salvo en caso de flagrante delito o por orden escrita y motivada de juez competente.

TÍTULO XIV DE LAS VOTACIONES

Artículo 113.- Votación en un solo día. (Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

Toda votación se realizará en un solo día. Comenzará a las seis (6) de la mañana y terminará a las seis (6) de la tarde, como plazo máximo, salvo que la Junta Central Electoral, por razones atendibles, decida extender el mismo.

Artículo 114.- Instalación de los Colegios Electorales.

Los miembros del personal de cada colegio electoral, incluyendo al sustituto del secretario, están en la obligación de presentarse en el local donde éste deba laborar, a más tardar media hora antes de la señalada para el comienzo de la votación.

Si a la hora de iniciarse la votación no se hubiese presentado ni el presidente ni los vocales a ocupar sus puestos en un colegio



electoral, la instalación comenzará cuando se presentare alguno de ellos, quien deberá escoger uno o dos ciudadanos que reúnan las condiciones exigidas para ser elector que sustituyan a los miembros ausentes hasta que éstos se presenten. Si quien faltare fuere el presidente, presidirá el primer vocal. Si faltare el secretario y su sustituto, el presidente o quien haga sus veces designará a un ciudadano capaz de desempeñar tales funciones hasta tanto se presentare uno de ellos.

Artículo 115.- Lista de Electores (Padrón Electoral). (Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

En cada Colegio Electoral habrá una lista definitiva de electores con los nombres de los(as) ciudadanos(as) con derecho al voto, en el que figurará la foto, el número de la cédula de identidad y electoral de los electores y cualquiera otra de sus generales que estime conveniente la Junta Central Electoral.

Artículo 116.- Acuerdos y Actas.

Todas las actuaciones que se realicen en cada colegio electoral se consignarán en un acta, que será firmada por todos los miembros del mismo y el secretario, así como por los representantes, titulares o sustitutos, de agrupaciones o partidos políticos que hubieren tomado parte en tales actuaciones, si desearan hacerlo.

Artículo 117.- Apertura de Votaciones. (Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

Antes de comenzar la votación, el presidente del colegio verificará la disponibilidad de los materiales electorales necesarios para ejercer el sufragio.

Seguidamente el presidente declarará que empieza la votación, depositará su voto, conforme el procedimiento establecido en la presente ley, siguiéndole los demás miembros, el secretario y sus sustitutos y los delegados de agrupaciones o partidos políticos presentes, así como sus respectivos sustitutos, aún cuando no figuren en la lista de electores correspondiente a ese colegio, después de lo cual



continuará la votación de los electores hasta la hora fijada por esta ley o la que se disponga por resolución.

Artículo 118.- Identificación de los Electores. (Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

Una vez abierta la votación, los electores entrarán al local que ocupe el colegio electoral, en el orden de su llegada, para lo cual el presidente dispondrá, con el auxilio del personal del colegio y de los agentes policiales destinados a su servicio, si fuere necesario, que los electores se coloquen en filas en el orden de llegada.

El elector entregará su cédula de identidad y electoral al presidente del colegio electoral, o a quien haga sus veces, para verificar que figura en el listado de electores (padrón electoral). Sin estos requisitos el elector no podrá ejercer el derecho al voto.

PÁRRAFO. El orden sucesivo de votación se regirá por el orden de llegada de cada elector, salvo con las excepciones siguientes:

- a) El presidente y el vicepresidente constitucionales de la República, los ex-presidentes constitucionales de la República, los senadores y diputados, así como los candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, síndicos municipales y sus respectivos suplentes, los candidatos a regidores y sus suplentes;
- b) El presidente, miembros titulares y suplentes y los funcionarios de la Junta Central Electoral; el presidente y vocales y secretarios de las juntas electorales; y
- c) Los delegados políticos y sus suplentes ante la Junta Central Electoral, las juntas electorales y ante los colegios electorales.

Artículo 119.- Protestas.

Cualquier miembro del colegio electoral o el representante de cualquier agrupación o partido político que tenga propuesta



admitida podrá oponerse a que vote cualquiera persona que se presente con el propósito de hacerlo, fundándose en que no es la persona que alega ser, o en que no tiene el derecho de elegir por alguna de las causas que la Constitución establece, para lo cual hará una declaración de protesta en una forma impresa que le será suministrada por el colegio, con expresión del motivo.

De toda protesta se hará mención en el acta, indicándose el nombre del que protesta y del objetado.

Si el objetado sostuviera ser la persona que alega, o negare el motivo invocado por quien hubiere hecho la protesta, se hará constar así en el acta. El presidente le entregará entonces un sobre especial, que se denominará “Sobre para boleta observada”, dentro del cual colocará el votante el sobre de votación en que haya introducido su boleta, cerrándole y entregándolo al presidente del colegio. En dicho sobre se escribirán los nombres y apellidos del votante, el número y serie de su Cédula de Identidad y Electoral y el número con que aparezca en la lista de electores del colegio, y la palabra “observada”, firmando el presidente y el secretario y estampándose el sello del colegio electoral.

El presidente advertirá al objetado y al autor de la objeción que quedan citados a comparecer ante la junta electoral a las diez de la mañana siguiente, con las pruebas que deseen hacer valer, a fin de que dicha junta decida acerca de la admisión o el rechazamiento de la protesta.

Si el objetado no sostiene su identidad o reconoce el hecho en que se haya fundado la protesta, no será admitido a votar y se le perseguirá por infracción a esta ley, según se dispone en otro lugar, para lo cual se identificará y se hará constar su verdadero nombre en el acta, si fuere posible.

Si a la hora indicada más arriba, el objetante no se presentare, o si es rechazada la causa de objeción, el sufragio será reconocido como válido, se abrirá el sobre, se escrutará y la Cédula de Identidad y Electoral será devuelta a su titular.



Todos los procedimientos relativos a las protestas aquí previstos se llevarán a efecto con la mayor rapidez posible, y en ningún caso, deberán retardar el curso de la votación.

No se permitirá ninguna otra objeción ni impugnación ni discusión en el colegio durante el proceso de la votación, siendo el presidente responsable de cualquier perturbación que ocurriera.

Artículo 120.- Forma de Votar.

El votante, ya dentro del compartimiento o cuarto cerrado marcará en la o las boletas, previamente firmada(s) y sellada(s) por el presidente del colegio, el o los candidatos de su preferencia, según sea el caso, la doblará y la depositará en la urna correspondiente. Finalmente, se hará constar en la lista definitiva de electores, que éste ha votado mediante la firma del elector o, en su defecto, con su huella digital. Luego se le entintará el dedo índice de la mano izquierda o, a la falta del mismo, otro dedo, en señal de que ya ejerció el sufragio.

Artículo 121.- Electores incapacitados para Votar sin ayuda.

Cuando un elector esté incapacitado para votar sin ayuda, podrá, con autorización del presidente del colegio electoral, valerse de un individuo de su confianza que le acompañe a la caseta o compartimiento o al cuarto cerrado y le prepare su boleta, sin que se permita que ninguna otra persona esté bastante cerca para ver u oír lo que se haga o diga mientras se prepara dicha boleta.

Artículo 122.- Secreto del Voto.

El secreto del voto es, a la vez, un derecho y un deber para el elector. A nadie le es lícito, bajo ningún pretexto, excepto a la persona que le ayude a prepararlo, cuando así lo permita esta ley, averiguar por cuáles candidatos o en qué sentido ha votado. Tampoco le está permitido al elector exhibir, de modo alguno, la boleta con que vote, ni hacer ninguna manifestación que signifique violar el secreto del voto.

**Artículo 123.- Preservación del orden.**

Toda persona que perturbe el orden de un colegio electoral, y requerido por el presidente, si insistiera, será expulsado del local.

No podrán formarse grupos de personas a menos de cincuenta metros de los locales donde se realicen las votaciones.

Artículo 124.- Servicio de Policía.

El presidente del colegio podrá requerir el auxilio de la Policía Electoral o de la fuerza pública, cuando fuere necesario, para mantener el orden y el curso regular de la votación.

Para tal fin, dispondrá el servicio de los agentes, de manera que puedan atender prontamente a este requerimiento. Sin embargo, ningún miembro de la fuerza pública podrá acercarse a menos de cincuenta metros del local que ocupa un colegio electoral, excepto cuando fuere requerido, como antes se ha dicho.

Artículo 125.- Cierre de la Votación. (Modificado Art.1, Ley 02-03 del 7/1/03)

A la hora del cierre de la votación, el presidente del colegio ordenará que no se permita la entrada a nadie más y emitirán sus votos los electores que se encuentren en el local.

Inmediatamente después de votar el último de los electores presentes, se declarará cerrada la votación y el presidente del colegio pronuncia el inicio del escrutinio.

TÍTULO XV**ESCRUTINIO DE LOS COLEGIOS ELECTORALES****Artículo 126.- Atribución del Colegio Electoral.**

Terminada la votación, se procederá al escrutinio de los votos, el cual estará a cargo de cada colegio electoral, sin que éste pueda en ningún caso, delegar o encomendar sus operaciones a personas extrañas al mismo, ni suspenderlas.

**Artículo 127.- Procedimiento del Escrutinio. (Modificado Ley 02-03 del 7/1/03)**

Se abrirá la urna y se sacarán de ella las boletas que hubieren sido depositadas, contándolas, para confrontar su número con el de electores que hubieren votado según el listado de electores (padrón electoral). Se pondrán aparte los sobres que contengan las boletas protestadas, y se verificará si el número de éstos coincide con el número de declaraciones de protestas que hayan sido presentadas y con las anotaciones hechas al respecto en el acta del colegio electoral. Los sobres que contengan boletas protestadas serán empacados sin abrir. Luego, el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasado ésta al presidente, quien la examinará y exhibirá a los demás miembros y delegados presentes.

Artículo 128.- Rechazamiento de Boletas Anuladas.

Si aparecieron boletas anulables según esta ley, serán rechazadas, poniéndolas en grupo aparte y anotándolas con la firma del presidente y del secretario, así como con las de los demás miembros, y de los representantes políticos que desearan hacerlo. Se consignará enseguida en el acta el número de votos válidos, el de boletas protestadas y el de boletas rechazadas.

Artículo 129.- Boletas Nulas.

Serán nulas las boletas que no tengan el sello del colegio electoral y la firma del presidente del mismo, las que tengan enmiendas, tachaduras, nombres o palabras o cualesquiera otros agregados. También serán nulas las boletas que no correspondan a las autorizadas por la Junta Central Electoral.

Artículo 130.- Boletas con manchas e imperfecciones.

No será anulable ninguna boleta por tener manchas, ni tampoco porque presente alguna imperfección en la preparación siempre que se pueda determinar con certeza a favor de cuáles candidatos se ha querido votar.



Artículo 131.- Diferencia entre las boletas computadas y la Lista de Electores.

Si el número de boletas por las cuales se hubieren computado votos excediere del de las personas que hayan votado en el colegio, según aparezcan en la lista definitiva de electores, se certificará esta circunstancia, haciendo constar en el acta y en la relación de boletas votadas el número del exceso que resultare.

Artículo 132.- Boletas de Mas o de Menos.

Si al contar las boletas emitidas, se determina que el número de éstas excede al de los electores que hayan ejercido su derecho al voto, conforme a la lista definitiva de electores, y previa comprobación de la legitimidad de las mismas, se introducirán de nuevo en la urna para removerlas y extraer luego al azar tantas boletas cuantas sean las excedentes y sin desdoblarlas, incinerarlas.

En el acta de escrutinio se certificará la circunstancia de que habla este ordinal, haciendo constar el número exacto del exceso de boletas que resultare.

Si se establece que en un colegio electoral en que aparezcan boletas de menos hubo fraude, la elección es anulable.

Artículo 133.- Derecho de Verificación.

Cualquier representante de agrupación o partido político que haya sustentado candidatura podrá verificar, en presencia del colegio, cuando así lo solicite, el contenido de una boleta que haya sido leída.

Artículo 134.- Desaparición de las Boletas.

Si desaparecieren las boletas usadas, en su totalidad o parte, los miembros del colegio que sean responsables serán enjuiciados de acuerdo con esta ley.

Artículo 135.- Consignación en el Acta de Escrutinio.

De las operaciones del escrutinio se dará constancia en el acta del colegio electoral, consignándose el número de sobres



encontrados en la urna y su coincidencia o disparidad con el número de votantes que muestre la lista definitiva de electores, el número de sobres para boletas observadas por causa de protestas; el número de boletas anuladas por cualquiera causa prevista en esta ley; el número de votos válidos obtenidos por cada partido o agrupación; y la constancia de haberse dado cumplimiento al procedimiento prescrito por esta ley para el escrutinio.

El acta deberá ser firmada por el presidente, por el secretario y por los vocales del colegio, y podrá serlo por los delegados políticos que deseen hacerlo.

Los miembros del colegio y los representantes de las agrupaciones y partidos políticos y sus sustitutos que hayan sustentado candidaturas podrán formular al pie del acta las observaciones que les merezcan las operaciones del escrutinio y firmarán dichas observaciones con el presidente y el secretario del colegio.

Artículo 136.- Relaciones de Votaciones.

Terminado el escrutinio, y una vez consignadas en el acta las operaciones correspondientes al mismo, se formarán dos relaciones por quintuplicado, una para los cargos de elección nacional, congresional y otra para los cargos de elección municipal. En ellas se hará constar el título de cada cargo que haya de cubrirse y los nombres de las personas que figuren como candidatos, expresándose con palabras y en guarismos el número de votos alcanzados por cada candidato para cada cargo.

También se expresará en dichas relaciones, con palabras y guarismos:

- a) El número total de las boletas rechazadas por algún motivo legal;
- b) El número total de sobres de boletas observadas;
- c) El número total de boletas por las que se hayan contado votos;



- d) El número total de boletas encontradas en la urna;
- e) El número total de votantes que conste en la lista definitiva de electores; y
- f) La diferencia, si la hubiere, entre el total del apartado “d” y el apartado “e”.

Firmarán cada pliego de las relaciones el presidente, los vocales y el secretario del colegio electoral, así como los representantes de agrupaciones o partidos políticos acreditados ante el mismo, o sus respectivos sustitutos, y certificarán que las relaciones son completas, exactas y conforme con el acta, y estamparán en cada pliego el sello del colegio. Si algún representante de agrupación o partido político no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia.

A cada representante de agrupación o partido político se le expedirá un extracto en el que conste el número de votos que alcanzó cada candidatura.

Después de leerse en alta voz, se fijará un ejemplar de cada relación en el exterior del local en que se haya celebrado la elección, junto a la puerta del mismo.

Artículo 137.- Distribución de las Relaciones de Votación.

Sendos ejemplares de las relaciones de votación a que se refiere el artículo anterior, serán remitidos bajo sobre sellado a la Junta Central Electoral y a la junta electoral correspondiente.

La remisión a la junta electoral se hará por medio de una comisión compuesta por el presidente o quien haga sus veces y los dos vocales o sus respectivos sustitutos. Cualquier representante de agrupación o partido político podrá acompañar a la comisión, cooperar a la custodia y vigilancia de los paquetes y presenciar el acto de entrega, siempre asistidos por la Policía Militar Electoral.

Artículo 138.- Entrega de Úrnas y Documentos.

Junto con las relaciones de votación y con la lista definitiva de electores, se enviarán a la junta electoral correspondiente cuatro



paquetes sellados y respectivamente marcados, que contendrán los siguientes documentos:

1. Las boletas válidas;
2. Las boletas rechazadas;
3. Los sobres de boletas observadas;
4. El acta del colegio, las credenciales de los miembros del colegio y las de los representantes de agrupaciones o partidos políticos, y la del secretario que haya funcionado o votado en el colegio y todos los demás documentos pertenecientes a la misma.

Dichos paquetes se reunirán en uno sólo, que se sellará con lacre en presencia de todos los miembros del colegio. En la cubierta del paquete se indicarán los documentos contenidos en el mismo, con la firma del presidente y del secretario, de los miembros del colegio y de los delegados que desearan hacerlo.

Al recibir la documentación, la junta electoral le dará un recibo a la comisión, en el cual constará el número y el barrio o sección del colegio de donde procede la documentación, los nombres de los representantes de agrupaciones o partidos que presenciaron la entrega, el estado de la documentación y la hora y minutos de la entrega.

Con el fin de recibir las urnas y los documentos, las oficinas de las juntas electorales, desde las cuatro pasado meridiano del día en que se celebren las elecciones, estarán abiertas a todas horas, y los miembros de cada junta permanecerán en el local en sesión permanente, inclusive los representantes de agrupaciones o partidos políticos, si lo desearan, hasta que se reciban las urnas y los documentos de todos los colegios electorales de su jurisdicción. En esta sesión permanente se irán recibiendo las comisiones de los colegios electorales con los expedientes, y, a medida que llegue una comisión, se conocerán las relaciones, se contarán los votos de los paquetes y se irán anotando los resultados, expidiendo recibos a los comisionados.

TÍTULO XVI

DEL COMPUTO Y LA RELACION DEL MUNICIPIO

Artículo 139.- **Plazo para efectuar el Computo y la Relación.**

Inmediatamente después de concluidas las elecciones, la junta electoral comenzará a levantar una relación provisional del resultado de los comicios en sus jurisdicciones respectivas, basadas en las relaciones de votación a que se refieren los Artículos 136, 137 y 138 de la presente ley. En dicha relación se indicarán los votos obtenidos para cada partido o agrupación política en las candidaturas nacionales, congresionales y municipales; la relación será confeccionada en presencia de los delegados de los partidos y agrupaciones políticas participantes en las elecciones.

Mientras se concluya la relación provisional total, las juntas electorales autorizarán, con la frecuencia que estimen conveniente, boletines parciales, en los que se indicarán la hora y el número de colegios relacionados hasta el momento y los votos obtenidos por cada partido o agrupación política en los diferentes niveles de votación. Dichos boletines serán entregados de inmediato a los delegados de los partidos y agrupaciones políticas que participen en las elecciones y a los medios de difusión, y enviados a la Junta Central Electoral.

Estas relaciones deberán ser formuladas y difundidas con la mayor celeridad, y las sesiones en que ellas se elaboren podrán ser suspendidas únicamente para el descanso indispensable de los integrantes de las juntas y de los delegados de los partidos políticos ante ellas.

Luego de publicada la relación provisional final, las juntas electorales comenzarán el cómputo definitivo de las relaciones de votación formuladas por los colegios electorales de la jurisdicción, como resultado de los escrutinios que hubieren verificado.

Dicho cómputo se continuará sin interrupción cada día, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde por lo menos,



y deberá quedar terminado dentro de un período no mayor de dos (2) días, a menos que ello no fuere posible por causas insuperables, caso en el cual se hará constar la causa en el acta correspondiente. La Junta Central Electoral podrá enviar uno o más comisionados con encargo de observar los trabajos e investigar las causas del retardo. En la medida en que las juntas y subjuntas electorales vayan computando las relaciones de votación de los distintos colegios electorales, permitirán que los partidos y agrupaciones políticas que lo deseen se hagan expedir copias de las mismas.

Si una o varias de las relaciones así obtenidas no coincidieren con las que los delegados del partido o agrupación de que se trate hubieren recibido en los colegios electorales, el partido interesado podrá requerir la comprobación física con las actas de los colegios correspondientes, lo cual deberá obtener siempre que las discrepancias pudieren hacer variar los resultados de las elecciones.

En todos los casos de discrepancias prevalecerán las anotaciones consignadas en el acta del colegio electoral. Si este faltare, se atribuirá validez a las copias de las actas firmadas por los miembros de los colegios y delegados de los partidos o agrupaciones políticas que sean coincidentes entre sí.

Artículo 140.- Procedimiento.

Las juntas electorales efectuarán el cómputo públicamente en sus locales respectivos, debidamente citados los presidentes y secretarios de los colegios electorales y los representantes de las agrupaciones o partidos políticos. Podrán presenciar el cómputo y demás operaciones los candidatos o sus respectivos apoderados y los electores que lo deseen y que quepan cómodamente en el local, a juicio de la junta.

Durante esta operación, el local permanecerá abierto, pero podrá ser cerrado por mandato del presidente en caso de desorden, situación en la cual permanecerán en el interior del local solamente los candidatos o sus apoderados y los electores



presentes que se condujeran correctamente. Los causantes de desórdenes serán desalojados. Al restablecerse el orden, el local será nuevamente abierto.

Durante estas operaciones, las listas definitivas de electores de todos los colegios electorales del municipio se hallarán al alcance de las juntas electorales.

Los presidentes y secretarios de los colegios electorales podrán retirarse una vez terminado el examen de los documentos correspondientes al colegio en que hubiere actuado cada uno de ellos. Si el presidente y el secretario que han actuado en el colegio no se encontraren presentes durante el examen de los documentos correspondientes al colegio, se hará constar en el acta.

Las cubiertas de los paquetes o sobres que contengan las relaciones sólo se romperán por la junta electoral, en sesión formal y en presencia de las comisiones que los entreguen.

Si la cubierta o los sellos no se encontraren en buen estado al abrir los paquetes o sobres, se hará constar en el acta.

Artículo 141.- Boletas Anuladas por los Colegios Electorales.

Las juntas electorales examinarán una por una las boletas que hubieren sido anuladas por cada colegio electoral, y confirmarán o revocarán según proceda, la decisión adoptada en cada caso por dicho colegio.

Los votos que las juntas electorales declaren válidos serán agregados al cómputo del colegio electoral correspondiente, si fuere posible determinarlo, haciéndose una anotación respecto al margen del acta del colegio electoral y de la relación de votación correspondiente. Las decisiones de la junta se harán constar en un formulario para decisión que se llenará, firmará y sellará, y al cual se anexará la boleta que sea objeto de la decisión.

Artículo 142.- Examen de Boletas observadas.

La junta electoral que ejecute el cómputo de su jurisdicción, procederá enseguida a conocer de las boletas observadas.



Serán desechadas por la junta todas las observaciones contenidas en el sobre para votos observados que no estén fundadas en las causas que establece esta ley en el Artículo 119, en el sentido de que el sufragante carece del derecho al sufragio, a menos que un representante de agrupación o partido político pruebe ante la junta que el sufragante denunciado ha votado también en otro colegio electoral. Si éste fuere el caso, la junta examinará la lista de inscritos del colegio electoral que se señale en la denuncia, admitirá la objeción en el caso en que verifique que el sufragante de que se trate votó también en tal colegio, o, en caso contrario, la rechazará.

El sobre contentivo de la boleta observada será abierto y la boleta de votación extraída, será mezclada con las demás que se encuentren en el mismo caso. Luego serán examinadas y los votos que de ellas resulten, se agregarán al cómputo del colegio electoral correspondiente, salvo que hubieren de ser anulados por otras causas legales, inscribiéndose las consiguientes anotaciones al margen del acta y de la relación de votación del colegio electoral correspondiente.

Los sobres para las boletas que hayan sido observadas con el fundamento de que los sufragantes que así votaron carecían del derecho al sufragio, serán examinados mediante el siguiente procedimiento:

- a) Antes de las 10:00 a.m. del día siguiente, el delegado del partido político o el miembro del colegio que hubiere formulado la objeción al elector que, por dicha razón, votó en condición de observado, no se apersonare ante la junta correspondiente para presentar las pruebas documentales y testimoniales que sustenten su objeción, dicho voto se reputará como legítimo y se procederá al examen de la boleta conforme al método establecido en este artículo.
- b) Si dentro del plazo establecido anteriormente, el elector objetado no se presentare ante la junta correspondiente, pero sí lo hiciera el objetante, se procederá a conocer el fondo de la acusación en ausencia del elector objetado.



En caso de que se determinara la pertinencia de la objeción, el sobre que contiene el voto observado permanecerá cerrado y será declarado nulo, agregándose a la relación de votación del colegio electoral correspondiente. En caso contrario, se procederá al escrutinio de dicho voto conforme al procedimiento que rige la materia.

- c) Si dentro del plazo consignado, ambos, el elector objetado y el objetante, no se presentaren ante la junta correspondiente, se reputará como legítimo al elector y se procederá al examen de la boleta conforme al principio que se establece en el literal a) de este procedimiento.
- d) Si ambas partes, el elector objetado y el objetante, se presentaren dentro del plazo establecido ante la junta correspondiente, ésta procederá a conocer el fondo de la objeción, verá los documentos y oirá los testigos presentados por dichas partes, si los hubiere, y decidirá sobre la admisión o el rechazo de la objeción. En caso de admisión, el voto será anulado. Si es rechazado, se procederá al examen de la boleta conforme ha quedado establecido.

Terminado el examen de los sobres de observación y de las boletas contenidas en ellos, los votos válidos que de ellas resulten se agregarán al cómputo del colegio electoral correspondiente y al cómputo municipal anteriormente realizado, así como los votos que hubieren de ser anulados, tanto por decisión de las juntas al fallar sobre la objeción que dio origen al voto observado, como por las demás causas legales que invalidan el voto, y se harán las anotaciones consiguientes al margen del acta y de la relación de las juntas, según sea el caso.

En los casos a que se refiere el presente artículo, las decisiones de las juntas electorales, se consignarán en un documento para decisiones que será previamente llenado, que firmará el presidente, los vocales y el secretario de la junta, y que se anexará al sobre de la boleta observada de que se trate, a los documentos



presentados por las partes a las juntas y a un resumen de las declaraciones de los testigos oídos, si los hubiere.

Dichas decisiones serán inapelables cuando rechacen la objeción, pero serán susceptibles de apelación ante la Junta Central Electoral en la forma y plazo que se establecen en otra parte de la presente ley.

Artículo 143.- Acta de Cómputo.

El acta de la junta que realice las operaciones del cómputo, enunciará el día y la hora en que terminen dichas operaciones, los nombres de los miembros de la junta que hayan participado en cada actuación de las mismas, los de los representantes de partidos políticos que los hayan presenciado en todo o en parte; la presencia o ausencia del presidente y del secretario de cualquier colegio electoral durante el examen de los documentos correspondientes al colegio; el hecho de que los sellos y cubiertas de los paquetes correspondientes a cualquier colegio se encontraren en mal estado y en el momento de ser abiertos por la junta; el número de votos que la junta agregue al cómputo de cada colegio electoral, en razón de las decisiones que adopten la junta al validar las boletas que fueron anuladas por el colegio o en razón de haber desechado la junta las observaciones a votos contenidos en sobres para boletas observadas, y los reparos que cualquier representante de agrupación o partido político, o cualquier candidato o apoderado hayan planteado a los procedimientos que sigan la junta en la práctica del cómputo, así como los acuerdos que la junta tomare con motivo de tales reparos.

El acta de la junta correspondiente contendrá un resumen en el que aparecerán sumados los votos obtenidos por cada partido o agrupación política para cada cargo o clase de cargo, en cada uno de los colegios electorales del municipio, según los resultados obtenidos en las relaciones de los diferentes colegios en los votos adicionales adjudicados a cada partido, con respecto a cada cargo o clase de cargo, en razón de las decisiones que haya adoptado la junta al realizar el cómputo de su circunscripción, así como el



total general de los votos de cada candidatura conforme al cómputo que haya realizado la junta.

En el acta no se tendrá que hacer un relato detallado de las operaciones del cómputo, pero deberá constar en ella que se ha dado cumplimiento al procedimiento prescrito por la ley para el cómputo del municipio.

El acta será firmada por el presidente, los vocales y el secretario de la junta, y podrá serlo por los delegados políticos que desearan firmarla. Para conocer y decidir de este procedimiento, las juntas electorales dispondrán de un plazo máximo de tres (3) días.

Artículo 144.- Reparos.

Durante el cómputo de una junta electoral, cualquier representante de agrupación o partido político que hubiere sustentado candidatura, o cualquier candidato o su apoderado, podrá indicar los reparos que desee oponer a los procedimientos que se siguen en la practica de dicho cómputo, y la junta electoral tomará, con motivo de tales reparos, los acuerdos que sean de lugar.

Artículo 145.- Relación general de la Votación en el Municipio.

Terminado el cómputo, la junta electoral, formará una relación general de la votación de todo el municipio para los cargos que figuren en las boletas, con la suma de los resultados contenidos en las relaciones de los diferentes colegios electorales y sobre las boletas observadas y con el contenido de las actas, pliegos de escrutinio y otros documentos, con excepción de las boletas remitidas por los colegios, las cuales no podrán ser examinadas por la junta electoral al verificar el cómputo de relaciones, a menos que fuere necesario. Tal necesidad podrá apreciarla la junta, de oficio, o a solicitud de un representare de agrupación o de partido. Si la junta desestimare esta solicitud, se hará constar en el acta.

**Artículo 146.-** Relación de Candidatos elegidos a Cargos Municipales.

La junta electoral formulará, igualmente, una relación expresiva de los candidatos a cargos de la elección municipal que hubieren resultado elegidos.

Artículo 147.- Formalidades comunes a ambas relaciones.

Tanto la relación general de la votación como la relación de los candidatos elegidos para cargos municipales serán redactadas en quintuplicado. Cada hoja será firmada por el presidente y el secretario, así como por cada uno de los representantes de las agrupaciones o partidos políticos, y en el acta se expresará, en el caso de no estar algunos dispuestos a firmar, el motivo en que se funde su negativa. En cada copia de las relaciones se extenderá una certificación, en la cual se declare que es fiel y completa, y expresando el día y hora de su formación, y se estampará en ella el sello de la junta.

Artículo 148.- Relación Provisional.

En el caso de que la junta electoral anulare las elecciones de uno o más colegios electorales, extenderá una relación provisional expresiva de los votos emitidos en los colegios donde no hubieren sido anuladas a favor de cada una de las candidaturas, y consignará en ella los colegios en que las elecciones hayan sido anuladas.

Artículo 149.- Publicación y Distribución de las Relaciones.

Inmediatamente después de formuladas las relaciones de votación y de candidatos elegidos a que se refieren los artículos precedentes, el presidente de la junta electoral hará publicar en la tablilla un ejemplar de cada una de dichas relaciones, durante cuatro días por lo menos. Otro ejemplar lo enviará inmediatamente, en sobre cerrado y sellado, a la Junta Central Electoral; y los archivará el secretario.

Al delegado de cada agrupación o partido político que haya sustentado candidatura se le extenderá un ejemplar o copia o extracto certificado de dichas relaciones, si así lo solicitare.



Artículo 150.- Remisión de Documentos.

Inmediatamente después de las operaciones prescritas en los artículos anteriores, la junta electoral empaquetará nuevamente, bajo cubierta cerrada y sellada, todos los documentos que hubieren sido abiertos, y enviará por comisión de empleados la documentación de cada colegio, con excepción de las boletas oficiales, a la Junta Central Electoral.

TÍTULO XVII

DE LA ANULACION DE LAS ELECCIONES

SECCIÓN I

De la Anulación de Oficio

Artículo 151.-

La junta electoral, de oficio, en cámara de consejo, por resolución motivada, podrá anular las elecciones de uno o varios colegios o con respecto a uno o varios cargos, en los casos siguientes:

- 1.- Cuando conste de manera concluyente, por el solo examen de los documentos, prescindiendo del examen de las boletas, que existe alguna de las causas de nulidad prevista en esta ley;
- 2.- Cuando conste haberse declarado elegida una persona que no sea elegible para el cargo en el momento de su elección;
- 3.- Si le es imposible a la junta electoral determinar, con los documentos en su poder, cuál de los candidatos municipales ha sido elegido para determinado cargo.

SECCIÓN II

De la demanda en nulidad

Artículo 152.-

Las elecciones celebradas en uno o más colegios electorales pueden ser impugnadas con fines de anulación por una organización política que haya participado en las elecciones en la



jurisdicción correspondiente, por cualesquiera de las causas siguientes:

1. Por error, fraude o prevaricación de una junta electoral, o de cualquiera de sus miembros, que tuviese por consecuencia alterar el resultado de la elección;
2. Por haberse admitido votos ilegales o rechazado votos legales, en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección;
3. Por haberse impedido a electores, por fuerza, violencias, amenazas o soborno concurrir a la votación, en número tal que, de haber concurrido, hubieran podido variar el resultado de la elección;
4. Por cualquier otra irregularidad grave que sea suficiente para cambiar el resultado de la elección.
5. También podrá impugnarse la elección por haberse declarado elegida una persona que no fuere elegible para el cargo en el momento de la elección.

Artículo 153.- Procedimiento.

Las acciones que se intenten con el fin de anular las elecciones serán incoadas por el presidente de la junta, comité o directorio municipal de la agrupación o partido interesado, o quien haga sus veces, por la junta electoral correspondiente. Estas acciones deben intentarse dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del resultado del cómputo general, a las agrupaciones y a los partidos políticos que hubieren sustentado candidaturas, o dentro de los dos (2) días siguientes a la condenación por fraudes electorales que hayan influido en el resultado de la elección.

Se introducirán por medio de escrito motivado, acompañado de los documentos que le sirvan de apoyo. Dicho escrito se entregará, junto con los documentos, bajo inventario por duplicado, al secretario de la junta electoral que deba decidir. El secretario dará cuenta inmediatamente al presidente de la misma y a la Junta Central Electoral.

El presidente de la junta electoral o la agrupación o partido que intente la acción, o quien haga sus veces, deberá notificarla, con



copias de los documentos en que la apoya, a los presidentes de los organismos correspondientes de los otros partidos y agrupaciones que hubieren sustentado candidatura.

No se admitirá acción de impugnación por las causas señaladas en los acápites 2do., 3ro. y 4to. del Artículo 152 de esta ley, si los hechos invocados no han sido consignados en forma clara y precisa, a requerimiento del delegado del partido interesado, en el acta del escrutinio del colegio a que se refiere el Artículo 116 de esta ley. La junta electoral se limitará, en esos casos, a tomar nota de la impugnación y a levantar, dentro del plazo establecido en el Artículo 154, un acta de inadmisión, que no será objeto de ningún recurso.

Artículo 154.- Conocimiento y Fallo.

La junta electoral apoderada conocerá de la acción dentro de los tres (3) días de haberse introducido, pero nunca antes del tercero, y fallará dentro de los dos (2) días de haber conocido de ella. El fallo será fijado en la tablilla de publicaciones y notificado por oficio a los interesados y a la Junta Central Electoral debiendo obtener el secretario, quien hará la notificación, constancia de la misma.

SECCIÓN III

De las Apelaciones

Artículo 155.- Forma y Plazo.

El plazo para apelar ante la Junta Central Electoral de las decisiones de las juntas electorales, en los casos que proceda, será de dos (2) días, desde su notificación o pronunciamiento, si fue dictada en audiencia pública.

El secretario de la junta de cuya decisión se apele, redactará acta, fijará un aviso en la tablilla de publicaciones y dará cuenta a la junta, la que se reunirá y notificará inmediatamente por oficio, a los candidatos, de haberse intentado la apelación.

Dicho secretario enviará al Secretario de la Junta Central Electoral todo el expediente, incluyendo el acta de recurso, el fallo



apelado y todos los documentos que la junta hubiere tenido a la vista para dictarlo, así como los documentos recibidos con el recurso.

Las réplicas se harán por escrito, y a ellas se anexarán los documentos en apoyo. Se entregarán mediante recibo al Secretario de la Junta Central Electoral, o se le remitirán por correo certificado.

Artículo 156.- Conocimiento Y Fallo

Cuando el Secretario de la Junta Central Electoral haya recibido un expediente de apelación, lo comunicará inmediatamente al presidente, quien dentro de los cinco (5) días siguientes, y nunca ante del quinto, fijará la audiencia en que se conocerá públicamente el recurso.

El apelante comparecerá sólo o asistido por abogado, o representado por éste. Los candidatos cuya elección se impugne podrán comparecer de igual modo. Si el apelante o los candidatos no comparecieren, se conocerá sin su presencia. La Junta Central Electoral fallará la apelación dentro de los tres (3) días que sigan al de la última audiencia.

Las decisiones de la Junta Central Electoral serán publicadas por fijación en la tablilla y comunicadas por secretaría a todos los interesados y a la junta que hubiere pronunciado la decisión impugnada. No serán susceptibles de recurso alguno, pues no hay otra instancia en capacidad de conocer de cuestiones electorales.

Artículo 157.- Relaciones definitivas.

Tan pronto como le sea notificado el fallo de apelación, la junta que hubiere hecho el cómputo a que ella se refiriere extenderá en forma definitiva la relación general de la votación en su territorio y la de los candidatos elegidos, de acuerdo con lo resuelto por la Junta Central Electoral, y procederá con los ejemplares de dichas relaciones en la forma que se determina precedentemente.

SECCIÓN IV

De la nueva Elección en caso de anulación

Artículo 158.- Disposición que debe dictar la Junta Central Electoral.

Una vez que haya llegado a ser irrevocable el fallo por el cual se anule una elección, ya sea por no haberse interpuesto apelación cuando emane de una junta electoral, o por haber sido confirmado dicho fallo por la Junta Central Electoral, ésta dispondrá que vuelva a efectuarse la elección en el colegio o los colegios en los cuales hubiere sido anulada, en la fecha que al efecto señale por la correspondiente proclama de convocatoria, y que deberá estar comprendida dentro de los treinta (30) días siguientes.

En este caso, la Junta Central Electoral dictará las disposiciones que fueren necesarias para que la nueva elección pueda llevarse a efecto. Los nombramientos expedidos por las juntas electorales respectivas para integrar el personal de los colegios electorales en los que haya de verificarse la nueva elección se considerarán válidos para los fines de ésta, procediendo únicamente las juntas electorales a llenar las vacantes que se hubieren producido.

Artículo 159. -

Si algún reclamo de partido o agrupación independiente no llegare a ser resuelto por la junta correspondiente antes de la celebración de la segunda elección, y si el mismo no envuelve sumas de votos que puedan hacer variar los resultados de la primera elección, la segunda se realizará válidamente.

Para el caso de que tal suma de votos pueda influir en el resultado final de la elección de que se trate, los organismos electorales con atribuciones para conocer y decidirlo deberán hacerlo conforme a los plazos establecidos en la presente ley.



SECCIÓN V

Del Cómputo y las Relaciones Nacionales

Artículo 160.- Del Cómputo General Nacional.

Con la suma de los resultados que muestren las relaciones formuladas por las juntas electorales, la Junta Central Electoral efectuará el cómputo general de la votación en toda la República para los cargos de elección nacional y para los de senadores y diputados. Este cómputo se presentará oficialmente en sesión pública.

El cómputo se iniciará inmediatamente después de recibidas dichas relaciones, cuando no haya sido anulada la elección en ningún colegio electoral. En caso contrario, el cómputo se llevará a efecto después que se haya verificado la nueva elección en el colegio donde haya sido anulada la primera.

Artículo 161.- Relación General del resultado de la Elección.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección, o a la mayor brevedad posible, después de transcurrido este plazo, tan pronto como el resultado de la elección en todos los municipios sea definitivamente conocido, la Junta Central Electoral deberá formular una relación general, en la que se consignará por cada municipio, por el Distrito Nacional, por cada provincia y para toda la República, el total de votos emitidos y el total de votos computados en pro y en contra de cada candidatura, así como el candidato o los candidatos que hubieren resultado elegidos para todos los cargos.

SECCIÓN VI

Determinación de los Candidatos Elegidos

Artículo 162.- Caso en que no haya lugar a Representación Proporcional.

En la determinación de los candidatos elegidos se aplicarán los sistemas de mayoría absoluta y mayoría simple.

- a) El sistema de mayoría absoluta es aplicable tan sólo a las elecciones de presidente y vicepresidente de la República.



Se entiende por mayoría absoluta, más de la mitad de los votos válidos emitidos en las elecciones. Si en la primera elección ninguna de las dos candidaturas alcanzare la mayoría absoluta, la Junta Central Electoral organizará una segunda elección, la cual será celebrada cuarenta y cinco (45) días después, a contar de la fecha en que se celebre la primera, o sea, el treinta (30) de junio del año correspondiente. En la segunda elección no se admitirán modificaciones de alianza o coaliciones ni se aceptarán nuevos pactos, participarán únicamente las dos candidaturas que obtuvieren mayor número de votos válidos en la primera elección.

- b) Si una de las candidaturas con derecho a participar en la segunda elección retira su participación en ésta, se declarará ganadora la otra candidatura, sin necesidad de realizar la segunda elección.
- c) Con el sistema de mayoría simple, aplicable, a las elecciones congresionales y municipales, obtendrá la elección en su totalidad la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos válidos.

Artículo 163.- Empate.

Cuando dos o más candidatos a un mismo cargo obtuvieren igual número de votos, se resolverá el empate por la suerte, del modo siguiente: Se inscribirán en tarjetas distintas los nombres de los candidatos empatados. El presidente de la junta electoral correspondiente, en presencia de los miembros de ésta y de los representantes de agrupaciones o partidos políticos que hubieren sustentado candidaturas, pero no del secretario, colocará una de las tarjetas dentro de un sobre blanco que cerrará. Tanto los sobres como las tarjetas serán de clase, forma y aspecto iguales. Acto continuo, el presidente colocará los sobres así dispuestos dentro de un receptáculo, y cada uno de los vocales de la junta, sucesivamente, a la vista del presidente, pero no de los demás vocales, revolverá dichos sobres dentro del receptáculo. Enseguida, el secretario, en presencia de la junta, sacará un sobre, y el nombre



que éste contenga, y que será leído de inmediato en alta voz por el presidente de la junta, será el candidato elegido.

Artículo 164.- Representación Proporcional.

En cada provincia, municipio o circunscripción electoral, según sea el caso, los partidos políticos o agrupaciones políticas independientes representarán sus candidatos a senador, diputados, síndicos, suplentes de síndicos, regidores y suplentes de regidores a través de boletas conjuntas para cada nivel de elección, los cuales serán elegidos por mayoría simple de votos el senador, el síndico y suplente de síndico, y por el sistema proporcional los diputados, regidores y suplentes de regidores.

SECCIÓN VII

De los Certificados de Elección y de la Proclamación de los Candidatos Elegidos

Artículo 165.- Certificados de Elección.

A todo candidato a un cargo electivo que hubiere resultado elegido de acuerdo con las normas establecidas por la presente ley le será expedido el correspondiente certificado de su elección por la junta electoral, si se trata de cargo de elección municipal, y por la Junta Central Electoral, cuando se trate de cargos de elección nacional de los senadores y diputados.

Todo certificado de elección expresará el nombre y la jurisdicción del organismo que lo expida, el lugar y la fecha de su expedición, los nombres y apellidos del funcionario elegido, el nombre del partido o de las agrupaciones que sustentó su candidatura, la clase y la fecha de la elección, el número de votos que haya obtenido, el título del cargo y el período durante el cual deben ocuparlo.

Los certificados serán autorizados con las firmas del presidente y los miembros, el secretario del organismo que los expida, y llevarán estampado el sello de ésta.

Serán entregados personalmente y mediante recibo por el secretario correspondiente al organismo que lo certifica o serán remitidos por carta certificada.

**Artículo 166.- Duplicado de los Certificados de Elección.**

Al mismo tiempo que el original, se extenderá un duplicado de todo certificado de elección, el cual se remitirá por carta certificada o por un oficio al presidente del ayuntamiento correspondiente, cuando se trate de certificados de elección para cargos municipales; y a los presidentes de las cámaras legislativas respectivas, si se trata de certificados de elección a los cargos de senador y de diputado al Congreso Nacional. Los duplicados de los certificados de elección para los cargos de presidente y vicepresidente de la República serán remitidos al presidente del Senado en calidad de presidente de la Asamblea Nacional.

Artículo 167.- Proclamación.

Corresponde a los mismos organismos que hayan expedido los certificados de elección, según antes queda dicho, la proclamación de los candidatos elegidos para los diversos cargos; salvo la del presidente y vicepresidente de la República, que será hecha por la Asamblea Nacional.

TÍTULO XVIII DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 168.- Franquicia de Comunicaciones.

Toda la correspondencia oficial, postal, telefónica, telegráfica, radiotelegráfica, o por cualquier vía de comunicación, procedente de la Junta Central Electoral y de sus dependencias, gozará de franquicia absoluta y será, en consecuencia, transmitidas sin costo alguno por las vías y servicios pertenecientes al Estado o a los municipios o administrado por éstos.

Artículo 169.- Exención de Impuestos y Derechos sobre Documentos.

Todas las certificaciones, declaraciones, solicitudes, reclamaciones, peticiones y cualesquiera otros documentos que hubieren de ser dirigidos a los organismos y funcionarios de la Junta Central Electoral o emanaren de éstos, y que se relacionen con asuntos oficiales, estarán exentos de todo género de



impuestos, derechos, tasas o contribuciones nacionales o municipales.

TÍTULO XIX DE LAS INFRACCIONES ELECTORALES

Artículo 170.- Competencias en las infracciones Electorales.

Los tribunales penales del Poder Judicial son los encargados de juzgar las infracciones electorales, cuya persecución corresponde al ministerio público, por apoderamiento de parte interesada.

SECCIÓN I

De los Crímenes Electorales

Artículo 171.- Falsedad en Materia Electoral.

- a) Serán castigados con las penas establecidas en el Artículo 147 del Código Penal y multa RD\$3,000.00 a RD\$15,000.00 las personas que en una solicitud de reconocimiento de partido hagan declaración falsa con respecto al número de sus afiliados.
- b) Serán castigados con la pena del mínimo de reclusión, es decir dos (2) años de reclusión y multa de RD\$5,000.00 a RD\$20,000.00:
 1. Los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o falsificaren todo o parte de cualquier lista de inscritos, documentos de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de colegio electoral, credenciales de funcionarios electorales, o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral.
 2. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cualquiera de los actos previstos en el párrafo anterior.
 3. Los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas oficiales y otros impresos que pudieren ser confundidos con las mismas, o los que las distribuyeren o las utilizaren.



4. Los que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser confundidos con los sellos oficiales de los colegios y los que distribuyeren o los utilizaren.
5. Los que utilizaren o distribuyeren, a sabiendas, cualquier documento que imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley.
6. Los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.

Artículo 172.- Otras falsedades y otros crímenes electorales.

Serán castigados con las penas establecidas en el citado Artículo 147 del Código Penal y multa de RD\$3,000.00 a RD\$15,000.00:

1. Los que firmen con nombre distinto al suyo un documento de propuesta.
2. Los que falsifiquen un documento de propuesta, o hagan cualquier afirmación o declaración falsa.
3. Los que firmen un documento de propuesta no siendo electores en la división política a que dicho documento corresponda.
4. Los que firmen más de un documento de propuesta para un mismo cargo, a no ser que todos los anteriores firmados hubieren sido retirados o declarados nulos.
5. Los que presentaren un documento de propuesta a sabiendas de que contiene alguna firma falsa o de que está firmado por alguno que no sea elector de la división política a la que corresponda, o que es fraudulento en cualquiera de sus partes.
6. Los que votaren sin tener derecho para hacerlo.
7. Los que votaren más de una vez en una misma elección.
8. Los que a sabiendas depositaren dos o más boletas.
9. Los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo.



10. Los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.
11. Los que mediante soborno o de otra manera procuraren que una persona investida por la ley de un cargo oficial en relación con las elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los deberes que éste le impone.
12. Los que mediante soborno o cualquier otro medio procuraren que una persona investida por la ley con un cargo oficial en relación con las elecciones, cometa o permita a otra persona cometer algún hecho que constituya infracción a las disposiciones legales relativas a la elección.
13. Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en relación con las materias electorales.
14. Los miembros de los colegios electorales y los delegados de partidos ante colegios electorales a quienes les fueren rechazadas diez o más protestas o impugnaciones contra electores.
15. Los que indujeren o auxiliaren a otros a cometer cualquiera de los hechos expresados en este artículo.

SECCIÓN II

De los Delitos Electorales

Artículo 173.- Delitos Electorales.

Serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y con multa de RD\$2,000.00 a RD\$5,000.00:

1. Los que aceptaren definitivamente un documento de propuesta con conocimiento de que es ilegal o fraudulento en su totalidad o en parte.
2. Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el tiempo y la forma debida, con arreglo a las prescripciones de esta ley.
3. Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier elección los nombres de personas que no deban figurar en ellas.



4. Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección, el nombre de algún candidato que debe figurar en ellas.
5. Los que permitieren votar a cualquier persona, a sabiendas de que el voto de ésta no debe recibirse.
6. Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier persona que tuviere derecho a que se admita.
7. Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro agregue alguna boleta a las legalmente votadas.
8. Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna boleta de las legalmente votadas.
9. Los que sustituyeren una boleta por otra.
10. Los que incluyeren o permitieren que otro incluya en lista de concurrentes el nombre de una persona que no hubiere votado.
11. Los que maliciosamente dejaren de incluir en el formulario especial de concurrentes el nombre de alguna persona que hubiere votado.
12. Los que hicieren o permitieren que otro haga un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos.
13. Los que firmaren un certificado de elección a favor de persona que no tenga derecho a ello.
14. Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.
15. Los que solicitaren dádivas o accedieren al soborno en los casos previstos por disposiciones anteriores.
16. Los miembros de los colegios electorales en los cuales desaparecieren las boletas y que sean responsables.
17. Los que, careciendo de atribuciones para ello, actuaren o pretendieren actuar con el carácter de funcionarios autorizados por esta ley.
18. Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones.



19. Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de fuerza pública que intimidaren a cualquier elector o ejercieren presión en su ánimo, para impedir el ejercicio de las atribuciones y prerrogativas que les estén acordadas en la Constitución y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultado de la misma.
20. Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral.
21. Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra persona a cometer cualquiera de los hechos previstos por este artículo.
22. Los que violaren cualesquiera de las resoluciones que en atribuciones reglamentarias dicte la Junta Central Electoral.
23. La persona o empresa que infrinja cualesquiera de las disposiciones contenidas en el Artículo 94 de esta ley.
24. La venta y comercialización de Cédulas de Identidad Electoral.

Artículo 174.- Otros Delitos Electorales.

Serán castigados con prisión correccional de tres (3) meses a un (1) año y multa de RD\$2,000.00 a RD\$5,000.00:

1. Los que dejaren de cumplir con alguno de los derechos o de ejercer alguna de las funciones que esta ley les señale.
2. Los que abandonaren sin permiso o autorización el cargo, comisión o función que, de acuerdo con esta ley, se les hubiere encomendado.
3. Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la ley les señale, dentro del término que en ella se establece, y si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de un escrutinio o relación fraudulenta de votos emitidos, incurrirán en las penas señaladas para dicho delito en el citado artículo.



4. Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de los colegios electorales.
5. Los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho.
6. Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de los deberes oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación.
7. Los que sin facultad para ello se mezclaren en las operaciones legales de cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma.
8. Los que a favor o en contra de cualquiera candidatura realizaren actos de agencia electoral a distancia menor de cincuenta metros de cualquier colegio electoral, el día de elecciones.
9. Los que siendo de cualquiera junta electoral, hicieren propaganda electoral en el día de elecciones.
10. Los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto por la ley, dentro del local del colegio electoral.
11. Los que ilegalmente retiraren cualquiera boleta oficial del lugar de votación.
12. Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren preparando o después de preparada para votar, a cualquier persona, dándole conocimiento de su contenido, o en cualquier otra forma dieren a conocer el sentido en que hayan votado o se proponen votar, a no ser con el propósito y en ocasión de obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de su boleta.
13. Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en ella alguna señal de la que pudiese colegirse que contiene el voto en favor o en contra de una candidatura determinada.
14. Los que, por cualquier medio, descubrieren o trataran de descubrir en favor de cuál candidatura ha dado o se propone dar su voto el elector.



15. Los votaren con alguna boleta que no hubiere recibido debidamente del colegio electoral.
16. Los que siendo miembros del colegio electoral recibieren de algún elector la boleta ya preparada para votar.
17. Los que extrajeren fuera del recinto del colegio electoral cualquiera boleta.
18. Los que desobedecieren cualquier orden legal de una junta o colegio electoral.
19. Los que, al auxiliar a un elector para la preparación de la boleta, llenaren ésta de manera distinta de los deseos expresados por aquél, o después de auxiliar a un elector revelaren el contenido de la boleta.
20. Los que, en algún caso no previsto por la ley, abrieren cualquier paquete sellado que contenga boletas, listas de inscritos, pliegos de escrutinio, relaciones de votación o cualquier otro documento determinado por esta ley.
21. Los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley que no esté penado de otro modo por ella.

Artículo 175.- Delito de coartar el derecho de elegir.

Serán castigados con prisión correccional de un (1) mes a seis (6) meses y multa de RD\$1,000.00 a RD\$3,000.00 los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores y otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en cualquiera de los hechos siguientes:

1. Despedir o amenazar con despedir cualquiera de éstos por ejercer o impedir libremente el derecho de votar.
2. Imponer o amenazar con imponer a cualquiera de ellos una pena o rebaja de salario o de jornal, o de otra prestación que le sea debida, por el hecho de ejercer el derecho de votar.

Artículo 176.-

La tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta ley será castigada como el delito mismo.



Artículo 177.-

Las disposiciones del Artículo 463 del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley.

Artículo 178.-

Los crímenes previstos en esta ley prescribirán al año de haberse cometido. Los delitos prescribirán a los seis (6) meses.

Artículo 179.-

Las disposiciones contenidas en las leyes penales respecto de los crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones quedan vigentes en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la presente ley.

Artículo 180.-

Estas disposiciones derogan, sustituyen o modifican cualquier otra disposición de la Ley No. 5884 del 5 de mayo de 1962 y sus modificaciones o cualquier otra que le sea contraria.

LEONEL FERNANDEZ REYNA

Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República, PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y siete, año 154 de la Independencia y 135 de la Restauración.

LEONEL FERNÁNDEZ REYNA

APÉNDICE

- **REGLAMENTOS**
- **RESOLUCIONES**

REGLAMENTOS

- Reglamento para Observación Electoral
- Reglamento sobre la Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos
- Reglamento sobre Fusiones, Alianzas y Coaliciones.



REGLAMENTO PARA LA OBSERVACION ELECTORAL

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República faculta a la Junta Central Electoral para reglamentar de acuerdo con la Ley todo lo relativo a la organización de las elecciones.

CONSIDERANDO: Que el criterio de la Junta Central Electoral es que la presencia de observadores debe estar expresamente regida por normas y procedimientos emanados del organismo rector de las elecciones, a los fines de que haya pautas claras y precisas que coadyuven a la transparencia de la observación misma

ATENDIENDO: Que la experiencia ha sido favorable, lo que se muestra con la labor desarrollada en las actividades relacionadas con la observación electoral en las últimas elecciones realizadas en la República Dominicana.

VISTO: El artículo 92 de la Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997.

Por tales motivos, la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, dicta el siguiente:

REGLAMENTO

DE LA NATURALEZA, PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Artículo 1.

La observación de los procesos electorales constituye una

actividad a ser desarrollada por personas y/o instituciones, de manera imparcial, concienzuda e independiente, con el propósito de constatar el proceso de votación y los resultados anunciados por las autoridades electorales, contribuyendo con ello a reforzar la diaphanidad del proceso electoral llevado a efecto.

Artículo 2.

Los efectos de la observación electoral no repercuten jurídicamente sobre el proceso electoral y sus resultados. Ello implica, que ninguna persona o institución que actúe en calidad de observador en el proceso electoral podrá pretender suplantar o igualar y mucho menos abrogarse atribuciones que legal y constitucionalmente son de la competencia exclusiva de la Junta Central Electoral.

Artículo 3.

Para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1 de este reglamento, la observación electoral debe estar basada en los principios siguientes:

- a) La imparcialidad de los observadores en la emisión de su juicio sobre el proceso electoral.
- b) La neutralidad de los observadores en su comportamiento durante el proceso electoral.
- c) La no injerencia de los observadores, en el cumplimiento de sus funciones, en los asuntos que de conformidad con la Constitución, la ley, las normas y las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral, son de competencia exclusiva de las autoridades electorales.

Artículo 4.

La acreditación de observadores, así como la determinación del número de los mismos es facultad exclusiva de la Junta Central Electoral. La acreditación debe estar precedida de una invitación emanada de la Junta Central Electoral o de la autorización de este órgano electoral a solicitud de parte interesada.

Artículo 5.

La misión de observadores del proceso electoral podrá iniciarse a partir de la fecha indicada en la acreditación otorgada



por la Junta Central Electoral y finalizará según lo establecido en dicha acreditación.

DE LOS OBSERVADORES Y DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS.

Artículo 6.

Ostentarán la calidad de observadores todas aquellas personas o entidades que hayan sido invitadas por la Junta Central Electoral para observar el proceso electoral, o que habiendo solicitado su participación en este evento, a través de instituciones partidarias reconocidas, nacionales o internacionales, vinculadas a los procesos electorales, al fortalecimiento de la democracia, a la promoción de los derechos humanos y a la observación electoral, hubieren obtenido oportunamente su acreditación ante la Junta Central Electoral.

Ostentarán la calidad de visitantes extranjeros las personalidades extranjeras invitadas por los partidos o alianzas políticas; personalidades y funcionarios gubernamentales de países extranjeros invitados por el Poder Ejecutivo u otros poderes del Estado o instituciones autónomas; o por entidades académicas del nivel superior.

Artículo 7.

Hay que distinguir dos categorías de observadores electorales: observadores nacionales y observadores internacionales.

PARRAFO I: A los fines previstos en el presente Reglamento son observadores nacionales todos aquellos ciudadanos dominicanos, radicados o no en el país, y las personas morales dominicanas que ejerzan estas actividades.

PARRAFO II: Para los fines del presente Reglamento se debe entender como observadores internacionales a todos aquellos ciudadanos que ostenten una nacionalidad distinta a la dominicana y que en el ejercicio de sus funciones se encuentren dentro de las siguientes categorías:

- a) Representantes de organismos electorales;
- b) Representantes de organismos internacionales,

intergubernamentales y no gubernamentales; vinculados a los procesos electorales, al fortalecimiento de la democracia, a la promoción de los derechos humanos y a la observación electoral.

- c) Representantes diplomáticos acreditados en República Dominicana;

PARRAFO III: Los dominicanos que hayan adquirido otra nacionalidad no serán acreditados como observadores extranjeros, ni como visitantes extranjeros.

DE LA ACREDITACIÓN

Artículo 8.

Para poder actuar como observadores y disfrutar de las facilidades que se deriven de esa calidad, se requiere estar debidamente acreditado por la Junta Central Electoral.

Artículo 9.

La Junta Central Electoral emitirá una credencial de identificación específica, tanto a los observadores nacionales, observadores internacionales invitados, como a los observadores internacionales, y a los visitantes extranjeros que hubieren formulado la solicitud correspondiente y hubieren obtenido de la Junta Central Electoral, respuesta favorable a la misma.

Artículo 10.

La credencial de identificación que cada observador nacional, observador internacional o visitante extranjero deberá exhibir en un lugar visible y en todo momento durante sus actividades; la misma contendrá los datos siguientes:

- a) Nombre y apellidos del observador.
- b) Institución u organismo a que pertenece o representa.
- c) País.
- d) Número de Cédula de Identidad y Electoral, pasaporte o tarjeta de turismo.
- e) Firma del Portador.
- f) Firma autorizada de la Junta Central Electoral.
- g) Sello de la Junta Central Electoral.



- h) La foto del portador.
- i) Tipo de observador (si es nacional o extranjero).

DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES INVITADOS

Artículo 11.

La Junta Central Electoral cursará invitaciones a organismos electorales de la región con los cuales haya suscrito algún acuerdo de cooperación, que entre otros, contemple propiciar la participación de observadores de dichos organismos en eventos electorales, para que envíen sus representantes.

Invitaciones para los mismos fines podrán dirigirse a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas, a la Unión Europea (UE), Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Instituto Nacional Demócrata (NDI), Instituto Republicano Internacional (IRI), Transparencia Internacional, o a cualquier otra organización que tenga relaciones oficiales con la República Dominicana o con la Junta Central Electoral.

La Junta Central Electoral asumirá los gastos de transporte aéreo internacional, alojamiento, alimentación y transporte interno en la República Dominicana, únicamente a favor de los observadores de los organismos electorales pertenecientes a la Asociación de Organismos Electorales de Centro América y el Caribe (Protocolo de Tikal) y de su Secretaría General. Asimismo, sobre la base de la reciprocidad, la Junta Central Electoral podrá invitar en iguales condiciones a observadores de los organismos electorales pertenecientes a la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur (Protocolo de Quito), de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y a personalidades extranjeras expresamente convocadas.



DE LAS SOLICITUDES PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Artículo 12.

Las solicitudes que emanen de una persona nacional o extranjera, de un organismo o entidad nacional o extranjera a los fines de acreditar observadores electorales para las elecciones del año 2006 deberán contar con el aval o auspicio de instituciones partidarias reconocidas, nacionales o internacionales, vinculadas a los procesos electorales, al fortalecimiento de la democracia, a la promoción de los derechos humanos y a la observación electoral; y dirigirse por escrito a la Junta Central Electoral, especificando las razones en que fundamenta la solicitud; los nombres de quienes estarán presentes en la observación; así como también su plan de observación, el fundamento de la misma y de qué institución u organismo, nacional o extranjero, obtiene su financiamiento.

Artículo 13.

Toda invitación a personalidades extranjeras cursada por los partidos políticos nacionales o por las alianzas de estos partidos, o por el poder ejecutivo, otros poderes del estado, instituciones autónomas o entidades académicas del nivel superior deberá ser comunicada a la Junta Central Electoral a los fines de optar por la acreditación de visitante extranjero.

Artículo 14.

Todo ciudadano y/o entidad nacional que pretenda ostentar la calidad de observador electoral, deberá dirigir una solicitud a la Junta Central Electoral para obtener la acreditación, la cual decidirá al respecto.

Si la Junta Central Electoral acogiera favorablemente la solicitud, autorizará la acreditación correspondiente haciéndolo del conocimiento del solicitante y de acuerdo con el número de observadores que se determine.

Artículo 15.

No podrán obtener la acreditación de observadores aquellas personas o miembros de agrupaciones nacionales que no estén



en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, o que se identifiquen como partidarios de alguna agrupación política.

DERECHOS, FACILIDADES Y PRERROGATIVAS

Artículo 16. En el ejercicio de sus funciones, los observadores nacionales e internacionales y visitantes extranjeros acreditados por la Junta Central Electoral gozarán de los siguientes derechos:

- a) Libertad de circulación y de movilización en todo el territorio nacional.
- b) Libertad de comunicación con todos los partidos políticos o alianzas de partidos.

Artículo 17. Sin perjuicio de las disposiciones referentes a lugares restringidos de seguridad, la Junta Central Electoral dará a los observadores electorales nacionales e internacionales y visitantes extranjeros acreditados por la Junta Central Electoral las siguientes facilidades y prerrogativas:

- a) Acceso a los colegios electorales para observar el desarrollo de las votaciones y de los escrutinios.
- b) Acceso a las informaciones que disponga la Junta Central Electoral, que no sean confidenciales, en los términos fijados por la Ley.
- c) Acceso a los boletines de resultados electorales producidos por la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales, en los términos fijados por la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones..
- d) Informarse de las denuncias o quejas que haya sometido cualquier ciudadano, entidad o partido político a la Junta Central Electoral y a las Juntas Electorales.
- e) Observar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y el comportamiento de los partidos políticos y alianzas políticas y de sus delegados ante los órganos electorales.
- f) Acceso al Centro de Información habilitado por la Junta Central Electoral desde donde podrán observar todos los datos procesados por la Junta Central Electoral.

PARRAFO. El observador nacional al actuar en calidad de elector, votará en el Colegio o mesa que indica su Cédula de Identidad y Electoral. Su condición de observador no lo hace acreedor de privilegio alguno, como ciudadano elector.

DE LOS DEBERES DE LOS OBSERVADORES NACIONALES, INTERNACIONALES Y VISITANTES EXTRANJEROS

Artículo 18.

Sin perjuicio de sus derechos y facultades todo observador deberá:

- a) Respetar la Constitución de la República y las leyes, así como los reglamentos, instrucciones, normas y disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral.
- b) No hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestaciones, en favor o en contra de agrupación política o candidato de partido político alguno.
- c) Abstenerse de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de observador nacional, internacional o visitante extranjero, tales como: ofender, difamar o calumniar a las instituciones, autoridades electorales, agrupaciones políticas y/o candidatos.
- d) Presentar por escrito, a la Junta Central Electoral cualquier anomalía o queja que recibieren o detectaren durante el proceso de elección, a través de la entidad que lo avale o auspicie.
- e) No requerir entrega de documentos oficiales a funcionarios y/o empleados de la Junta Central Electoral ni de las Juntas Electorales.
- f) No sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, ni realizar actos que directa o indirectamente constituyan interferencia en el desarrollo del proceso electoral.



- g) No declarar el triunfo de candidato o partido político alguno ni ofrecer resultados preliminares o definitivos, parciales o totales, ni proyecciones sobre las votaciones, y mucho menos, difundirlos públicamente antes de que la Junta Central Electoral haya decidido al respecto.
- h) No considerarse de manera alguna como supervisor de las funciones que la Constitución, las leyes y reglamentos otorgan, única y exclusivamente, a la Junta Central Electoral, como organismo rector del proceso electoral.

PÁRRAFO: La Junta Central Electoral revocará la acreditación de los observadores nacionales, internacionales o visitantes extranjeros que a su juicio violen la Constitución, las leyes del país y las normas y disposiciones emanadas de este órgano electoral.

Artículo 19.

Los diplomáticos acreditados en el país, en el ejercicio de sus funciones como observadores, se registrarán tanto por lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como por las disposiciones contempladas en el presente Reglamento.

Artículo 20.

Los observadores que representen a las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), se registrarán por los acuerdos suscritos entre el Estado Dominicano y estos Organismos en materia de privilegios e inmunidades, y lo establecido en estas disposiciones y las leyes de la República Dominicana.

Artículo 21.

El presente Reglamento deroga expresamente y sustituye cualquier otra disposición emitida por la Junta Central Electoral que le sea contraria.

Artículo 22.

Se ordena la publicación del presente Reglamento conforme a los que establece la ley y se dispone su notificación a todas y cada una de las partes interesadas.

DADA en Santo Domingo, a los _____ () días del mes
_____ del año Dos Mil Seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artiles

Secretario General



REGLAMENTO SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS

La **JUNTA CENTRAL ELECTORAL**, Institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su Sede Principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, Distrito Nacional, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **DR. LUIS ARIAS NÚÑEZ**, en su calidad de Presidente del Pleno; **DR. SALVADOR RAMOS**, Miembro Presidente de la Cámara Contenciosa; **DR. NELSON JOSÉ GÓMEZ ARIAS**, Miembro Presidente de la Cámara Administrativa; **DRA. RAFAELINA PERALTA ARIAS**, Miembro; **DR. LUIS NELSON PANTALEÓN GONZÁLEZ**, Miembro; **DR. RAFAEL DÍAZ VÁSQUEZ**, Miembro; **DR. JOSÉ LUIS TAVÁREZ TAVÁREZ**, Miembro; **DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ**, Miembro; **DR. RAMÓN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ**, Miembro; asistidos por el **DR. ANTONIO LOCKWARD ARTILES**, Secretario General; dicta dentro de sus atribuciones legales el siguiente Reglamento.

VISTA: La Ley Electoral No.275-97 de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

VISTA: La Ley 289-05 de fecha 18 de agosto de 2005.

VISTA: La Ley de Gastos Públicos No.321, de fecha 31 de diciembre del 2004.



VISTO: El Reglamento sobre Fusiones, Alianzas y Coaliciones para las Elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales del 16 de mayo del 2004, dictado por la Junta Central Electoral, en fecha 18 del mes de febrero del 2004.

VISTO: El Reglamento de fecha 21 de mayo del 2005, sobre la contribución económica del Estado para los Partidos Políticos.

VISTOS: Los pactos de alianzas o coaliciones presentados por los Partidos Políticos para las Elecciones Presidenciales del 16 de mayo del año 2004.

VISTAS: Las Resoluciones Nos. 003/2004, 14/2004, 15/2004, 16/2004 mediante las cuales fueron admitidas las candidaturas para el nivel Presidencial y Vicepresidencial de las Organizaciones Políticas, para concurrir a las Elecciones del 16 de mayo del 2004.

VISTA: La Resolución No. 13/2004 de fecha 11 de marzo del año 2004, mediante la cual se aprueban y rechazan los pactos de alianzas de los Partidos Políticos.

VISTA: El Acta 23/2004 de fecha 25 de mayo del 2004, mediante la cual la Junta Central Electoral declara oficialmente válidos los cómputos contenidos en el Boletín Electoral No. 10 de fecha 24 de mayo, 2004.

VISTO: El Boletín Electoral No. 10 de fecha 24 de mayo del 2004, emitido por la Junta Central Electoral que contiene los resultados definitivos de las Elecciones del nivel Presidencial y Vicepresidencial del 16 de mayo del 2004.

VISTA: La Resolución No. 24/2004 de fecha 25 de mayo del 2004, sobre la Proclama de los Candidatos Ganadores a nivel Presidencial y Vicepresidencial.

VISTA: La Resolución No.25/2004 de fecha 29 de junio 2004, la cual oficializa la extinción del reconocimiento a los Partidos Fuerza de la Revolución (FR), Partido Nueva Alternativa (PNA),



Movimiento Solidaridad Nacional (MSN) y Partido por la Auténtica Democracia (PAD), por no haber cumplido con los requisitos exigidos por la Ley.

CONSIDERANDO: Que los artículos 47 y 48 de la Ley Electoral No.275-97 especifican que las fuentes de ingresos que pueden recibir los Partidos Políticos deben provenir, exclusivamente, de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas y de la contribución del Estado a dichos Partidos Políticos, en consecuencia se reputará ilícita cualquier otra fuente de ingresos.

CONSIDERANDO: Que el artículo 49 de la Ley Electoral No. 275-97 estipula que en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos se consignará un fondo equivalente al medio por ciento ($\frac{1}{2}\%$) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales, y un cuarto por ciento ($\frac{1}{4}\%$) en los años en que no haya elecciones generales.

CONSIDERANDO: Que con el propósito de garantizar mayores niveles de igualdad entre los partidos políticos del sistema en la búsqueda del poder, fue promulgada la Ley No.289-05 de fecha 18 de agosto del 2005, derogando la Ley No.78-05 de fecha 23 de febrero del presente año, y modificando los Artículos Nos. 50, 51, y 54 de la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre del 1997, con la finalidad esencial de que la distribución de los recursos consignados en el Presupuesto Nacional como contribución del Estado a los partidos políticos sea ejecutada de la manera siguiente:

- a. “En los años de Elecciones Generales, la distribución de las contribuciones ordinarias del Estado se hará de la manera siguiente:
 1. El ochenta por ciento (80%) se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más de un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los últimos comicios.

2. El veinte por ciento (20%) se distribuirá de la siguiente manera: el doce por ciento (12%) en partes iguales para los que obtuvieron menos de un cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las elecciones previas y los de nuevo reconocimiento si los hubiere; el restante ocho por ciento (8%) se distribuirá en proporción a los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones” (Artículo 50).

b. “En los años no electorales, la contribución de un cuarto por ciento ($\frac{1}{4}\%$) de los ingresos nacionales se hará en pagos mensuales de duodécimas a los partidos que mantengan su reconocimiento, de conformidad a los mismos porcentajes establecidos en el Artículo 50 precedente.” (Artículo 54).

CONSIDERANDO: Que la Ley de Gastos Públicos No.321/04 aprueba el Presupuesto General de la Nación y se fija en la suma de Trescientos dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos con 00/100 (RD\$302,761,582.00), la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos para el año 2005.

CONSIDERANDO: Que es preciso reglamentar la distribución del aporte económico previsto en la Ley Electoral No.275-97 al tenor de la nueva normativa vigente sobre la materia.

La Junta Central Electoral en uso de sus facultades legales dicta el siguiente:

REGLAMENTO

PRIMERO: Los Partidos y Movimientos Políticos con recuadros individuales que concurrieron a las Elecciones Presidenciales celebradas el 16 de mayo del año 2004, y que mantuvieron su reconocimiento de conformidad con la Ley Electoral, recibirán los recursos correspondientes a la



contribución económica del Estado a los Partidos Políticos, consignados en la Ley de Gastos Públicos para el año 2005.

SEGUNDO: En razón de que la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos en los años no electorales es de un $\frac{1}{4}$ (*cuarto por ciento*) de los ingresos nacionales, dicha contribución asciende para este año a la suma de **RD\$302,761,582.00** (*Trescientos dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos con 00/100*), y la duodécima parte a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, asciende a la suma de **RD\$25,230,131.83**, (*Veinticinco millones doscientos treinta mil ciento treinta y un pesos con 83/100*).

TERCERO: La distribución de la duodécima parte se hará en pagos mensuales en la forma establecida en la Ley No. 289-05 de fecha 18 de agosto del 2005 de acuerdo a los resultados obtenidos por los Partidos, Movimientos o Alianzas de Partidos luego de las elecciones generales del pasado año.

CUARTO: Los partidos acreedores de la contribución económica en virtud del presente Reglamento son: Partido de la Liberación Dominicana (*PLD*), Partido Revolucionario Dominicano (*PRD*), Partido Reformista Social Cristiano (*PRSC*), Bloque Institucional Social Demócrata (*BIS*), Alianza por la Democracia (*APD*), Partido de la Unidad Nacional (*PUN*), Fuerza Nacional Progresista (*FNP*), Unidad Demócrata Cristiana (*UDC*), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (*PQDC*), Partido de los Trabajadores Dominicanos (*PTD*), Partido de la Unidad Democrática (*UID*), Partido Nacional de Veteranos y Civiles (*PNVC*), Partido Liberal de la República Dominicana (*PLRD*), Partido Renacentista Nacional (*PRN*), Partido Humanista Dominicano (*PHD*), Partido Revolucionario Independiente (*PRI*), Partido Popular Cristiano (*PPC*), Partido Alianza Social Dominicana (*ASD*), Partido Demócrata Popular (*PDP*) y *Movimiento Independiente de Yaguaje (MIYA)*.



QUINTO: Los montos correspondientes a cada Partido, conforme a las disposiciones de la ley 289-05 de fecha 18 de agosto del 2005 y el presente Reglamento son:

PARTIDOS CON RECUADRO UNICO QUE MANTIENEN SU RECONOCIMIENTO (RESOLUCION /04)	SIGLAS	VOTOS VALIDOS POR PARTIDOS RECONOCIDOS	ASIGNACION MENSUAL TOTAL VALOR EN RD\$
	20	3,603,875	25,230,131.83
			20,184,105.46
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA	PLD	1,771,377	6,728,035.15
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO	PRD	1,108,400	6,728,035.15
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO	PRSC	294,033	6,728,035.15
			5,046,026.37
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	BIS	98,278	639,340.10
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA	APD	84,566	574,986.00
PARTIDO UNIDAD NACIONAL	PUN	44,720	387,978.02
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	FNP	38,676	359,611.90
UNIDAD DEMOCRATA CIRSIANA	UDC	32,223	329,326.24
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	PQDC	27,520	307,253.80
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO	PTD	24,714	294,084.49
PARTIDO DE LA UNIDAD DEMOCRATICA	UD	18,898	266,788.44
PARTIDO NACIONAL DE VETERANO CIVILES	PNVC	18,460	264,732.79
PARTIDO LIBERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PLRD	14,037	243,974.46
PARTIDO RENACENTISTA NACIONAL	PRN	11,087	230,129.32
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO	PHD	5,303	202,983.45
PARTIDO REVOLUCIONARO INDEPENDIENTE	PRI	3,994	196,839.96
PARTIDO POPULAR CRISTIANO	PPC	3,383	193,972.38
PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA	ASD	1,043	182,990.13
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR	PDP	772	181,718.25
PARTIDO MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE YAGUATE	MIYA	2,391	189,316.65

SEXTO: A aquellos Partidos que concurren aliados con la modalidad de recuadro único la contribución económica del Estado se les entregará de conformidad a los acuerdos suscritos respecto a ésta con el Partido Político con el que personificó la alianza. Estos acuerdos deben ser específicos en término de cantidad. En caso contrario serán entregados los montos correspondientes al Partido que personificó la alianza, siendo de su competencia la distribución entre éstos.



SEPTIMO: Los Partidos Políticos reconocidos están en la obligación, sean beneficiados o no de la contribución económica del Estado, de implementar un sistema contable que cumpla con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en el cual se reflejen los movimientos de ingresos y egresos del Partido. Este sistema contable será puesto a disposición de la Junta Central Electoral. Quedan excluidos los Partidos Políticos que cumplieron con este requisito en el pasado año electoral.

El incumplimiento por uno o más Partidos Políticos de lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 55 de la Ley Electoral, obliga a la Junta Central Electoral a retener la porción que le(s) corresponda dentro de la contribución económica que el Estado aporta a las Organizaciones Políticas para sufragar los gastos en que incurran para sus actividades.

La administración del aporte del Estado deberá contabilizarse separadamente de otras fuentes de recursos en una cuenta bancaria corriente, y los gastos que se realicen tanto con cargo a esta cuenta como a las demás, deberán tener sus respectivos comprobantes o documentos justificativos, los cuales se mantendrán archivados ordenadamente a fin de facilitar cualquier inspección que se ordene realizar.

A más tardar dos meses después del cierre del presente año (el 31 de Diciembre), los Partidos Políticos depositarán ante la Secretaría de la Junta Central Electoral, los informes de sus ingresos y egresos, bajo el entendido de que sus ingresos no provienen de fuentes que la ley prohíbe y sus egresos hayan sido invertidos en actos cónsonos con los objetivos de su Organización.

OCTAVO: Los Partidos Políticos, de conformidad a la Ley Electoral 275-97 y del presente Reglamento, presentarán sus informes de ingresos y egresos, tanto en lo que se refiere a la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos como a otras fuentes lícitas.



DADO en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año Dos Mil Cinco (2005).-

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés

Secretario General



REGLAMENTO SOBRE FUSIONES, ALIANZAS Y COALICIONES

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida mediante la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 7 de enero del 2003, regularmente reunida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artilés**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales el siguiente Reglamento.

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 92 de la Constitución de la República faculta a la Junta Central Electoral para juzgar y reglamentar de conformidad con la ley asuntos relativos a las elecciones.

CONSIDERANDO: Que la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones, faculta a la Junta



Central Electoral para dictar reglamentos, resoluciones e instrucciones que considere pertinentes a fin de que opere una correcta aplicación de la Ley, para el regular desenvolvimiento de los procesos puestos a su cargo.

CONSIDERANDO: Que los Artículos 62, 63 y 64 de la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones establecen que los partidos políticos reconocidos una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse y coaligarse mediante el procedimiento establecido por la propia Ley y por los reglamentos que al respecto dicte la Junta Central Electoral dentro de los plazos previstos para tales fines.

La Junta Central Electoral en uso de sus facultades constitucionales y legales dicta el siguiente:

REGLAMENTO

Disposiciones Generales

Artículo 1.-

De la Facultad de los Partidos Políticos. Los partidos políticos una vez constituidos pueden fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la Ley No. 275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones y por el presente Reglamento.

Artículo 2.-

De la Facultad de las Agrupaciones Políticas Independientes. Las agrupaciones políticas independientes en razón de su carácter, no podrán establecer alianza o coalición con los partidos políticos.

Artículo 3.-

Establecimiento de Plazos del Proceso de Fusiones, Alianzas y Coaliciones. Los plazos a regir para la administración del proceso relativo a los pactos de fusiones, alianzas o coaliciones que implica la presentación, conocimiento y decisión de dichos pactos, son los dispuestos por el Art. 62 de la Ley 275-97 del 21 de Diciembre de 1997.



De las Fusiones

Artículo 4.-

Del Pacto por Escrito. Cuando dos o más partidos políticos decidan fusionarse, deberán pactarlo por escrito, de acuerdo a las decisiones aprobadas por mayoría de votos de los delegados a las convenciones nacionales que a ese efecto celebren cada uno de los partidos políticos, de conformidad con sus respectivos Estatutos.

Artículo 5.-

De la Naturaleza y de los Efectos Jurídicos. La fusión determina la extinción de la personería de los partidos que intervengan en la misma, subsistiendo únicamente la de aquel que personifique la fusión, el cual asumirá los derechos y obligaciones de los partidos fusionados. En caso de producirse, debe operarse con la supervisión de la Junta Central Electoral, a fin de asegurar la legalidad y veracidad del acuerdo de la fusión.

Artículo 6.-

De los Afiliados de los Partidos Fusionados. Los afiliados de los partidos fusionados pasarán a ser miembros de pleno derecho de la organización que personifique la fusión, a no ser que expresamente, mediante comunicación escrita, éstos indiquen su deseo de no formar parte de la misma. El pacto indicará los cargos dirigenciales asignados a los miembros de los partidos políticos cuya personería jurídica se extinguió a causa de la fusión.

Artículo 7.-

Del Plazo. La solicitud de aprobación de la fusión deberá ser depositada a más tardar setenta y cinco (75) días antes de la fecha en que deban celebrarse las próximas elecciones ordinarias generales, o sea, el dos (2) de marzo del año 2006, hasta las 12:00 de la noche. Vencido este plazo no se aceptará ningún pacto de fusión.

Artículo 8.-

De la Forma de Hacer la Solicitud. La solicitud de aprobación de la fusión deberá ser depositada en la Secretaría de la Junta Central Electoral por los representantes legales de los partidos



fusionantes, la que deberá acompañarse de los documentos siguientes:

- a) Un ejemplar en original del Pacto de Fusión suscrito por los dirigentes con calidad para ello de cada partido, según lo determinen sus respectivos estatutos, debidamente legalizadas las firmas por un notario público. El pacto deberá especificar:
 1. Los partidos que intervienen en la fusión.
 2. El partido o agrupación que personifique la fusión.
- b) El acta de la convención celebrada por cada partido o agrupación política independiente que hubiere acordado la fusión, debidamente certificada por el presidente y por el secretario de la convención, a la que deberá anexarse:
 1. Una certificación de la nómina de delegados con derecho a voto, la cantidad de delegados convocados y la cantidad de asistentes a la convención;
 2. La nómina certificada de los delegados a la convención, que formaron la mayoría de votos presentes, que aprobó la Resolución de Fusión;
 3. Un ejemplar certificado por el editor del diario de circulación nacional en el que se insertó el aviso de la convocatoria para la convención, que debió publicarse de acuerdo con la Ley Electoral No. 275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones, así como a las disposiciones estatutarias del partido.

De las Alianzas y Coaliciones

Artículo 9.-

Del Pacto por Escrito. Cuando uno o más partidos políticos decidan aliarse o coaligarse, deberán pactarlo por escrito. Esa alianza o coalición deberá llevar los mismos candidatos en el nivel de elección de que se trate y en la demarcación político electoral, incluyendo a las circunscripciones electorales aprobadas. El pacto de alianza o coalición deberá ser suscrito por los representantes legales de los partidos intervinientes, en sujeción a las decisiones aprobadas por mayoría de votos de los delegados



a las convenciones nacionales, que a ese efecto, hayan celebrado cada uno de dichos partidos, cuyas actas y demás documentaciones deberán ser sometidas a la Junta Central Electoral.

Artículo 10. -

De la Naturaleza Jurídica. Toda alianza o coalición tendrá un carácter transitorio y dentro de ella cada uno de los partidos que la integran conserva su personería jurídica, limitada únicamente por el pacto de alianza o coalición, a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de sus afiliados.

Artículo 11.-

Del Efecto Jurídico. Los partidos aliados o coaligados, para la postulación de candidatos comunes, serán una sola entidad con una representación común ante la Junta Central Electoral, ante cada Junta Electoral de su dependencia y ante cada Colegio Electoral, en los niveles de elección y en las demarcaciones políticas electorales en que concurren aliados o coaligados. La conformación de dicha representación común podrá ser objeto de acuerdo entre los partidos aliados o coligados.

PÁRRAFO. Cuando la alianza o coalición sea total e idéntica en ambos niveles de elección, Congresional y Municipal, habrá un solo representante ante los órganos electorales. En caso distinto, cada alianza o coalición tendrá un representante por cada nivel de elección, aunque sea el mismo partido quien la personifique. En caso de alianzas parciales se permitirá la representación ante la Junta Central Electoral de los partidos que intervienen en la alianza o coalición y que no la personifiquen.

Artículo 12.-

De la Caducidad de las Alianzas y Coaliciones. Los pactos de alianzas y coaliciones caducan cuando la Junta Central Electoral declare concluido el período o proceso electoral con la proclamación de los candidatos electos.

Artículo 13.-

De los Tipos de Alianzas y Coaliciones. Las alianzas o



coaliciones de partidos pueden ser acordadas de tipo total o parcial.

Artículo 14.-

De los Pactos Totales. Una alianza o coalición será total cuando los partidos que la suscriban postulen candidatos comunes para todas las candidaturas en el país en los niveles congresional y municipal.

Artículo 15. -

De los Pactos Parciales. Las alianzas o coaliciones parciales pueden producirse cuando los partidos que la suscriban postulen candidatos comunes dentro de las siguientes modalidades:

- a) Para las candidaturas en el país de un solo nivel de elección;
- b) Para las candidaturas congresionales o municipales en una o varias demarcaciones políticas provinciales o municipales, incluyendo las circunscripciones electorales establecidas por la Junta Central Electoral. En caso de existir subdivisiones o circunscripciones electorales establecidas para una provincia o municipio en que se produzca la alianza o coalición, dicho pacto alcanzará a todas las circunscripciones electorales de la provincia o municipio de que se trate.

Artículo 16.-

Del Alcance de la Alianza y de la Coalición. En el pacto de alianza o coalición deberá establecerse claramente en cuál o cuáles niveles de elección y en cuál o cuáles demarcaciones políticas, incluyendo todas sus circunscripciones o subdivisiones electorales establecidas, se ha producido el acuerdo y no se permitirá, en ningún caso, el fraccionamiento del voto para candidatos de un mismo nivel. En tal virtud, no podrá pactarse alianza o coalición para el caso de candidaturas aisladas dentro de un mismo nivel de elección, sino que incluirán a todos los candidatos del nivel o niveles de elección de que se trate.

PÁRRAFO I: En toda alianza o coalición siempre aparecerán los mismos candidatos en los recuadros de cada partido o



agrupación política aliada o coaligada, dentro de la demarcación política incluyendo todas las circunscripciones electorales acordadas y para el nivel de elección pactado. Por consiguiente, los pactos especificarán claramente cuál o cuáles son los cargos que habrán de ser propuestos por cada partido o agrupación política que intervenga en la alianza o coalición correspondiente.

PÁRRAFO II: En caso de elecciones extraordinarias parciales, como consecuencia de la anulación de las ordinarias, en una o más demarcaciones políticas electorales, regirán los mismos pactos de alianzas y coaliciones suscritos por los partidos políticos.

Artículo 17.-

De la Alianza o Coalición en las Boletas Electorales. Los partidos políticos que decidan aliarse o coaligarse total o parcialmente pueden pactar el uso de un único recuadro o de recuadros individuales contentivos del símbolo de cada partido en las boletas electorales que correspondan. La alianza o coalición que acuerde el recuadro único, aparecerá representada en la boleta electoral en el recuadro que le corresponda al partido que personifique la alianza o coalición. En el caso de que se convenga el uso de recuadros individuales en la boleta electoral, la alianza o coalición aparecerá representada en los recuadros correspondientes a cada uno de los partidos que la integran. El total de votos que obtenga la alianza o coalición, será el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos aliados o coaligados en el nivel correspondiente.

PÁRRAFO I. El orden de la colocación de la fotografía de los candidatos en los recuadros de la boleta electoral quedará normado por los acuerdos en los pactos de alianza que firmen los partidos políticos, siempre de acuerdo a las disposiciones legales y técnicas que establezca la Junta Central Electoral.

PÁRRAFO II. Cuando en el momento del escrutinio en el colegio electoral se encontrare una boleta electoral marcada en dos o más recuadros correspondientes a partidos distintos pero que formen parte de una alianza o coalición o que en



sus alianzas o coaliciones tengan un partido común que los personifique, la misma será válida pero se considerará como un sólo voto para las alianzas o coaliciones (Resolución sobre Orden de los Partidos Políticos No. 3/2005 de fecha 5 de Diciembre del 2005). En todo caso, dicho voto se asentará en el acta del colegio electoral y en la relación de votación del nivel que se trate, dentro de la casilla del partido que personifique la alianza o coalición.

En caso de que el voto sea de partidos que no hayan formado pactos de alianza, dicho voto se declarará nulo.

Artículo 18.-

Del Plazo. Los pactos de fusiones, alianzas y coaliciones deberán ser depositados en la Secretaría de la Junta Central Electoral, a más tardar setenta y cinco (75) días antes de la fecha en que celebren las elecciones generales ordinarias, o sea, el dos (2) de Marzo del año 2006, hasta las 12:00 de la noche. Vencido este plazo no se aceptará ningún pacto de alianza o coalición.

Artículo 19.-

De la Forma de la Solicitud. La solicitud de aprobación de una alianza o coalición deberá ser efectuada por los representantes legales de los partidos con calidad para ello, por medio de escrito que se depositará en la Secretaría de la Junta Central Electoral.

La solicitud de aprobación deberá estar acompañada de los siguientes documentos:

- 1- Un ejemplar en original del Pacto de Alianza o Coalición suscrito por las autoridades competentes, con calidad para ello, de cada partido, según lo determinen sus respectivos estatutos, debidamente legalizadas las firmas por un Notario Público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 del presente Reglamento. El pacto deberá especificar:
 - a. Los partidos políticos intervinientes en la alianza o coalición;
 - b. El partido que personifique la alianza o coalición;
 - c. El nivel y fecha de las elecciones para las que se concertó la alianza o coalición;



- d. El tipo de alianza o coalición;
 - e. El alcance de la alianza o coalición;
 - f. Las demarcaciones políticas electorales, congresionales o municipales, incluyendo todas sus circunscripciones electorales, si las hubiere, en que concurrirán, siempre con las mismas listas de candidatos;
 - g. Si la alianza o coalición acordó el uso de recuadro único o recuadros individuales para cada partido en la boleta electoral;
 - h. En caso de que no indique los requisitos señalados en los numerales 3, 4 y 7 se considerará que la alianza o coalición acordó el uso de un recuadro único y que tiene un alcance total;
 - i. La especificación de los cargos acordados a aportar por cada partido o agrupación interviniente en la alianza o coalición.
 - j. La forma como los partidos aliados o coaligados participarán de la contribución económica a la que tendrán derecho de conformidad con lo establecido en la Ley Electoral No. 275-97 del 27 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones, así como con el reglamento que dictará la Junta Central Electoral al efecto.
2. El acta de la convención nacional celebrada por cada partido que hubiere acordado formar parte de la alianza o coalición, debidamente certificada por el presidente y por el secretario de la convención, a la que deberá anexarse:
- a. Una certificación de la nómina de los delegados con derecho a voto, de la cantidad de delegados convocados, así como la de los delegados asistentes a la convención;
 - b. La nómina certificada de los delegados a la convención, que formaron la mayoría de votos presentes, que aprobó la resolución de suscribir el pacto de alianza o coalición o la que otorgó mandato, a tal efecto, a los directivos del partido;
 - c. Un ejemplar certificado por el editor del diario de circulación nacional en el que se insertó el aviso de la



convocatoria para la convención, que debió publicarse de acuerdo con la Ley Electoral No.275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones y las disposiciones estatutarias del partido.

Artículo 20.-

De la Corrección de Errores u Omisiones. Si en la solicitud de alianza o coalición y en los documentos requeridos como anexos se encontraren errores u omisiones subsanables, la Secretaría de la Junta Central Electoral lo comunicará a los solicitantes a través de los representantes de los partidos aliados para que procedan a corregirlos dentro de los tres (3) días a partir de la fecha de la notificación.

Artículo 21.-

De la Publicidad de la Solicitud. La Junta Central Electoral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida conforme la solicitud de aprobación de la alianza o coalición, le dará publicidad en su tablilla de publicaciones y entregará copia de la misma a toda parte interesada que lo solicite por escrito.

Artículo 22.-

De las Reclamaciones. Es potestativo de la Junta Central Electoral denegar de pleno las reclamaciones contra las fusiones, alianzas o coaliciones de partidos, o conocer de ellas contradictoriamente, en forma sumaria.

Artículo 23. -

Del Procedimiento. El procedimiento para conocer y decidir de la solicitud de aprobación de una alianza o coalición será el siguiente:

- a) Una vez recibida la solicitud, la Junta Central Electoral, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, fijará la audiencia correspondiente y convocará a todos los partidos políticos reconocidos para conocer el caso.
- b) El caso será decidido mediante resolución dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de celebrada la audiencia.

**Artículo 24.-**

De la Resolución de Aprobación. La resolución que dicte la Junta Central Electoral deberá ser publicada conjuntamente con el pacto de fusión, alianza o coalición en espacio pagado en un periódico o diario de circulación nacional, a cargo del partido político que conserve el reconocimiento, en caso de fusión; y a cargo de la Junta Central Electoral o del partido más diligente en caso de alianza o coalición; y comunicado por escrito además ambos documentos, a todos los partidos políticos reconocidos, dentro de los diez (10) días de haber sido dictadas, sin lo cual no tendrá validez la fusión, alianza o coalición de que se trate.

PÁRRAFO: Cuando el partido o agrupación política a quien se dirige la comunicación se negare a firmar un ejemplar de la carta de remisión como constancia de recepción de los documentos a que se refiere este artículo, el partido remitente lo enviará por Acto de Alguacil, hecho que comunicará a la Junta Central Electoral, en los tres (3) días siguientes a la fecha de remisión, con copias del referido acto.

Artículo 25.-

De la Prueba de las Formalidades. El cumplimiento de las disposiciones del artículo 24 del presente Reglamento, se probará con el depósito en la Secretaría de la Junta Central Electoral, de un ejemplar certificado por el editor del diario en el cual se hizo la publicación y la constancia de recibo de las comunicaciones hechas por la Junta Central Electoral o el partido interesado a los demás partidos políticos reconocidos.

Artículo 26.-

De la Relación General de las Alianzas o Coaliciones. Una vez emitidas y publicadas todas las resoluciones aprobatorias de los pactos de alianzas o coaliciones, la Junta Central Electoral elaborará una relación general por niveles de elección y demarcaciones políticas electorales de las alianzas o coaliciones totales y/o parciales que concurrirán en las elecciones.

Dicha relación será comunicada formalmente por la Junta Central Electoral a todas las juntas electorales y sus dependencias



para que, procedan conforme a los pactos de alianzas o coaliciones, especialmente en lo relativo a la presentación de propuestas de candidatos del nivel municipal, presentación de los delegados, al cómputo de los votos y a la adjudicación de los cargos electivos correspondientes.

Artículo 27.-

Los partidos políticos que no hayan suscrito pacto de alianza o coalición dentro de los plazos establecidos por la Ley Electoral No.275-97 del 21 de Diciembre del 1997 y sus modificaciones y el presente Reglamento, no podrán presentar candidaturas comunes o proponer los mismos candidatos.

Artículo 28.-

El presente Reglamento deroga y sustituye cualquier otra disposición emitida por la Junta Central Electoral que le sea contraria.

Dado en Santo Domingo, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artiles

Secretario General

RESOLUCIONES

- Proclama Electoral
- Resolución sobre Reconocimiento a Partidos Políticos.
- Resolución sobre Votación Preferencial
- Resolución sobre Rechazo a Partidos Políticos
- Resolución sobre menores que serán mayores de edad antes de las Elecciones del 16 de Mayo del 2006.
- Resolución sobre Cuota Femenina
- Resolución sobre el Plastificado de Actas y Relaciones de Votación.
- Resolución sobre Orden de los Partidos Políticos
- Resolución sobre Delegados Políticos ante los Colegios Electorales.
- Resolución sobre Aprobación Pactos de Alianza





PROCLAMA ELECTORAL

**ELECCIONES ORDINARIAS GENERALES
PARA LOS NIVELES CONGRESIONAL Y
MUNICIPAL DEL AÑO 2006**

La Junta Central Electoral, institución de derecho público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral No.275-97, del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersección formada por las Avenidas General Gregorio Luperón y 27 de febrero en Santo Domingo, frente a la Plaza de la Bandera, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artiles**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Proclama.

VISTA: La Constitución vigente de la República Dominicana.

VISTA: La Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

VISTAS: Las cifras oficiales del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, elaborado por la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el año 2002;



CONSIDERANDO: Que la letra d) del Artículo 9; el inciso 1 del Artículo 13, y el Artículo 88 de la Constitución de la República establecen que todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio tienen el derecho, el deber y la obligación de votar.

CONSIDERANDO: Que los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, establecen lo siguiente:

“Art. 89. Las Asambleas Electorales se reunirán de pleno derecho el 16 de mayo de cada cuatro años para elegir el Presidente y Vicepresidente de la República; asimismo para elegir los demás funcionarios electivos, mediando dos años entre ambas elecciones. En los casos de convocatorias extraordinarias, se reunirán a más tardar sesenta días después de la publicación de la ley de convocatoria.”

“Art. 90. Corresponde a las asambleas electorales elegir... los senadores y los diputados, los Regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus suplentes, así como cualquier otro funcionario que se determine por la ley.”

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República: “Las Elecciones serán dirigidas por la Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley.”

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 87 de la Ley Electoral No. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones, toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral, en el caso de elecciones ordinarias, con una anticipación no menor de noventa (90) días a la fecha de su celebración.

CONSIDERANDO: Que las Elecciones Ordinarias Generales deben celebrarse según las normas establecidas en la Constitución y las leyes adjetivas correspondientes, por el voto personal, libre, directo y secreto.



CONSIDERANDO: Que el Artículo 70 de la ley Electoral No. 275-97 del 21 de Diciembre 1997 y sus modificaciones, dispone que las propuestas de candidatos, para que puedan ser admitidas, deberán ser presentadas a más tardar sesenta (60) días antes de la fecha en que deban celebrarse las Elecciones Ordinarias Generales.

CONSIDERANDO: Que el artículo 79 de la citada ley establece que para la escogencia de Diputados, Regidores y sus suplentes, la Junta Central Electoral creará Circunscripciones Electorales, a fin de garantizar que los candidatos electos sean una verdadera representación del sector que los elige.

CONSIDERANDO: Que las cifras de población que han sido tomadas como base para la determinación del número de Diputados, Regidores y Suplentes de Regidores correspondientes a cada provincia, el Distrito Nacional y cada municipio, respectivamente, fueron las obtenidas en el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, celebrado en el año 2002, publicadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

CONSIDERANDO: Que a partir del último censo de población y vivienda del año 2002, la cantidad poblacional aumentó respecto del año 1993 (año en que se realizó el censo que sirvió de base para la determinación de los 150 cargos a Diputados en las Elecciones Congresionales y Municipales del año 2002) y, por tanto, eleva la cantidad de diputados a un número de veintiocho (28) cargos, para un total de 178 Diputados a elegir en el presente año 2006.

CONSIDERANDO: Que a partir del año 2004, fueron creados por ley los municipios siguientes: Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra (Provincia Santo Domingo); Eugenio María de Hostos (Provincia Duarte); Los Cacaos (Provincia San Cristóbal); Pueblo Viejo, Nuevo Sabana Yegua, Tábara Arriba, Guayabal (Provincia de Azua); Jaquimeyes, La



Ciénaga, Fundación (Provincia Barahona); Juan Santiago (Provincia Elías Piña); Cristóbal, Mella, (Provincia Independencia); Villa Hermosa (Provincia La Romana); Peralvillo (Provincia Monte Plata); en adición a los nueve (9) municipios creados entre el año 2002 y el año 2004, elevando el número de municipios de 125 a 151, aumentando en consecuencia la cantidad de Síndicos, Regidores y Suplentes a elegir el próximo 16 de mayo del 2006.

La Junta Central Electoral, haciendo uso de sus atribuciones, dicta la presente,

PROCLAMA

PRIMERO: El día dieciséis (16) de mayo del año dos mil seis (2006) se celebrarán las Elecciones Ordinarias Generales Congresionales y Municipales de la República Dominicana, y se reunirán al efecto en todo el territorio nacional las Asambleas Electorales, para elegir los Senadores y Diputados de la República, el Síndico del Distrito Nacional y su Suplente, los Síndicos Municipales y sus Suplentes y los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes.

SEGUNDO: Se declara abierto el proceso electoral en la República Dominicana a partir de la presente proclama.

TERCERO: Se convoca a todas las organizaciones políticas que gozan de reconocimiento y a todos los ciudadanos dominicanos aptos para ejercer el sufragio, a concurrir y votar en las Elecciones Ordinarias Generales Congresionales y Municipales que se celebrarán en la República Dominicana para elegir a los Senadores y Diputados al Congreso Nacional, los Síndicos y sus Suplentes de cada Ayuntamiento Municipal y del Distrito Nacional, los Regidores y sus Suplentes, los cuales ejercerán sus funciones durante el período constitucional 2006-2010.



CUARTO: Los funcionarios a elegir son:

Provincias y Municipios	Población	Senador	Diputados	Sindico y Suplente	Regidores y Suplentes
01. DISTRITO NACIONAL	913,540	1	18	1 y 1	37 y 37
Circunscripción 1	316,755		6		13 y 13
Circunscripción 2	238,717		5		10 y 10
Circunscripción 3	358,068		7		14 y 14
02. LA ALTAGRACIA	182,020	1	4		
028. Higuey	163,931			1 y 1	12 y 12
085. San Rafael del Yuma	18,089			1 y 1	5 y 5
03. AZUA	208,857	1	4		
010. Azua	87,024			1 y 1	6 y 6
017. Padre Las Casas	22,366			1 y 1	5 y 5
105. Guayabal	4,852			1 y 1	5 y 5
106. Peralta	11,462			1 y 1	5 y 5
107. Nuevo Sabana Yegua	21,065			1 y 1	5 y 5
125. Las Yayas de Viajama	17,938			1 y 1	5 y 5
126. Tábara Arriba	15,425			1 y 1	5 y 5
132. Estebanía	7,754			1 y 1	5 y 5
135. Las Charcas	10,136			1 y 1	5 y 5
154. Pueblo Viejo	10,835			1 y 1	5 y 5
04. BAHORUCO	91,480	1	2		
022. Neiba	34,562			1 y 1	5 y 5
076. Tamayo	23,294			1 y 1	5 y 5
078. Villa Jaragua	11,437			1 y 1	5 y 5
112. Los Ríos	7,831			1 y 1	5 y 5
113.-Galván	14,356			1 y 1	5 y 5
05. BARAHONA	179,239	1	4		
018. Barahona	83,982			1 y 1	6 y 6
019. Cabral	13,907			1 y 1	5 y 5
021. Enriquillo	13,262			1 y 1	5 y 5
079. Vicente Noble	20,496			1 y 1	5 y 5
080. Paraíso	13,320			1 y 1	5 y 5
111. Polo	9,367			1 y 1	5 y 5
130. El Peñón	4,040			1 y 1	5 y 5
131. Fundación	3,937			1 y 1	5 y 5
137. Las Salinas	5,229			1 y 1	5 y 5
160. La Ciénaga	7,715			1 y 1	5 y 5
167. Jaquimeyes	3,984			1 y 1	5 y 5
06. DAJABON	62,046	1	2		
043. Restauración	6,908			1 y 1	5 y 5
044. Dajabón	25,685			1 y 1	5 y 5



073. Loma de Cabrera	15,271			1 y 1	5 y 5
115. Partido	7,562			1 y 1	5 y 5
151. El Pino	6,620			1 y 1	5 y 5
07. DUARTE	283,805		6		
Circunscripción 1		1	4		
056. San Francisco de Macorís	185,618			1 y 1	13 y 13
143. Las Guáranas	13,460			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 2			2		
057. Pimentel	18,280			1 y 1	5 y 5
058. Villa Riva	30,524			1 y 1	5 y 5
059. Castillo	16,452			1 y 1	5 y 5
063. Eugenio María de Hostos	5,856			1 y 1	5 y 5
119. Arenoso	13,615			1 y 1	5 y 5
08. EL SEIBO	89,261	1	2		
025. El Seibo	68,063			1 y 1	5 y 5
029. Miches	21,198			1 y 1	5 y 5
09. ELIAS PIÑA	63,879	1	2		
015. Bánica	7,272			1 y 1	5 y 5
016. Comendador	25,475			1 y 1	5 y 5
074. Pedro Santana	7,843			1 y 1	5 y 5
075. Hondo Valle	10,647			1 y 1	5 y 5
110. El Llano	8,151			1 y 1	5 y 5
144. Juan Santiago	4,491			1 y 1	5 y 5
10. ESPAILLAT	225,091	1	5		
054. Moca	172,294			1 y 1	12 y 12
061. Gaspar Hernández	37,786			1 y 1	5 y 5
088. Cayetano Germosén	6,993			1 y 1	5 y 5
133. Jamao Al Norte	8,018			1 y 1	5 y 5
11. HATO MAYOR	87,631	1	2		
027. Hato Mayor	61,738			1 y 1	5 y 5
067. Sabana de la Mar	17,927			1 y 1	5 y 5
100. El Valle	7,966			1 y 1	5 y 5
12. INDEPENDENCIA	50,833	1	2		
020. Duvergé	17,320			1 y 1	5 y 5
070. La Descubierta	6,939			1 y 1	5 y 5
077. Jimaní	11,414			1 y 1	5 y 5
099. Postrer Río	6,792			1 y 1	5 y 5
114. Mella	2,470			1 y 1	5 y 5
128. Cristóbal	5,898			1 y 1	5 y 5
13. LA ROMANA	219,812	1	4		
026. La Romana	129,198			1 y 1	9 y 9
103. Guaymate	17,324			1 y 1	5 y 5
295.-Villa Hermosa	73,290			1 y 1	5 y 5



14. LA VEGA	385,101	1	8		
Circunscripción 1			6		
047. La Vega	242,903			1 y 1	17 y 17
122. Jima Abajo	26,667			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 2			2		
050. Jarabacoa	56,931			1 y 1	5 y 5
053. Constanza	58,600			1 y 1	5 y 5
15. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	135,727	1	3		
060. Cabrera	26,655			1 y 1	5 y 5
071. Nagua	68,032			1 y 1	5 y 5
081. Río San Juan	15,092			1 y 1	5 y 5
136. El Factor	25,948			1 y 1	5 y 5
16. MONSEÑOR NOUEL	167,618	1	3		
048. Bonaó	126,668			1 y 1	9 y 9
118. Maimón	17,439			1 y 1	5 y 5
123. Piedra Blanca	23,511			1 y 1	5 y 5
17. MONTECRISTI	111,014	1	2		
041. Montecristi	25,776			1 y 1	5 y 5
045. Guayubín	30,316			1 y 1	5 y 5
072. Villa Vásquez	14,784			1 y 1	5 y 5
086. Pepillo Salcedo	9,245			1 y 1	5 y 5
101. Castañuelas	13,748			1 y 1	5 y 5
117. Las Matas de Santa Cruz	17,145			1 y 1	5 y 5
18. MONTE PLATA	180,376	1	4		
004. Bayaguana	33,122			1 y 1	5 y 5
005. Yamasá	51,403			1 y 1	5 y 5
008. Monte Plata	45,881			1 y 1	5 y 5
090. Sabana Grande de Boyá	32,686			1 y 1	5 y 5
153. Peralvillo	17,284			1 y 1	5 y 5
19. PEDERNALES	21,207	1	2		
069. Pedernales	13,805			1 y 1	5 y 5
091. Oviedo	7,402			1 y 1	5 y 5
20. PERAVIA	169,865	1	3		
003. Baní	147,013			1 y 1	11 y 11
084. Nizao	22,852			1 y 1	5 y 5
21. PUERTO PLATA	312,706	1	6		
Circunscripción 1			4		
037. Puerto Plata	165,162			1 y 1	12 y 12
097. Sosúa	44,938			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 2			2		
038. Imbert	24,075			1 y 1	5 y 5
039. Altamira	22,983			1 y 1	5 y 5
040. Luperón	18,912			1 y 1	5 y 5



102. Los Hidalgos	13,569			1 y 1	5 y 5
120. Guanatico	6,047			1 y 1	5 y 5
121. Villa Isabela	17,020			1 y 1	5 y 5
22. SALCEDO	96,356	1	2		
051. Villa Tapia	25,460			1 y 1	5 y 5
055. Salcedo	40,510			1 y 1	5 y 5
064. Tenares	30,386			1 y 1	5 y 5
23. SAMANA	91,875	1	2		
065. Samaná	51,501			1 y 1	5 y 5
066. Sánchez	26,505			1 y 1	5 y 5
134. Las Terrenas	13,869			1 y 1	5 y 5
24. SAN CRISTOBAL	532,880	1	11		
Circunscripción 1			4		
002. San Cristóbal	220,767			1 y 1	16 y 16
Circunscripción 2			4		
068. Villa Altigracia	78,507			1 y 1	6 y 6
082. Yaguatae	39,594			1 y 1	5 y 5
083. Sabana Grande de Palenque	15,691			1 y 1	5 y 5
104. Cambita Garabitos	29,496			1 y 1	5 y 5
139. Los Cacaos	7,494			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 3			3		
093. Bajos de Haina	113,884			1 y 1	8 y 8
140. San Gregorio de Nigua	27,447			1 y 1	5 y 5
25. SAN JUAN	241,105	1	5		
Circunscripción 1			3		
012. San Juan de la Maguana	135,923			1 y 1	10 y 10
109. Bohechío	8,963			1 y 1	5 y 5
129. Juan de Herrera	12,727			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 2			2		
011. Las Matas de Farfán	47,521			1 y 1	5 y 5
014. El Cercado	24,173			1 y 1	5 y 5
108. Vallejuelo	11,798			1 y 1	5 y 5
26. SAN PEDRO DE MACORIS	301,744	1	6		
023. San Pedro de Macorís	217,141			1 y 1	16 y 16
024. Los Llanos	25,404			1 y 1	5 y 5
030. Ramón Santana	9,266			1 y 1	5 y 5
138. Consuelo	31,405			1 y 1	5 y 5
146. Quisqueya	18,528			1 y 1	5 y 5
27. SANCHEZ RAMIREZ	151,179	1	3		
049. Cotuí	74,056			1 y 1	5 y 5
052. Cevicos	14,989			1 y 1	5 y 5
087. Fantino	22,675			1 y 1	5 y 5
155. Villa La Mata	39,459			1 y 1	5 y 5



28. SANTIAGO	908,250	1	18		
Circunscripción 1			8		
031. Santiago de los Caballeros (parcial)	320,193			1 y 1	19 y 19
094. Villa González	33,573			1 y 1	5 y 5
096. Villa Bisonó	42,210			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 2			4		
031. Santiago de los Caballeros (parcial)	151,695				9 y 9
035. Jánico	20,913			1 y 1	5 y 5
036. San José de Las Matas	44,475			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 3			6		
031. Santiago de los Caballeros (parcial)	218,646				13 y 13
032. Tamboril	49,810			1 y 1	5 y 5
095. Licey al Medio	26,735			1 y 1	5 y 5
29. SANTIAGO RODRIGUEZ	59,629	1	2		
042. Monción	11,663			1 y 1	5 y 5
046. San Ignacio de Sabaneta	35,654			1 y 1	5 y 5
116. Villa Los Almácigos	12,312			1 y 1	5 y 5
30. VALVERDE	158,293	1	3		
033. Esperanza	61,903			1 y 1	5 y 5
034. Mao	74,760			1 y 1	5 y 5
092. Laguna Salada	21,630			1 y 1	5 y 5
31. SAN JOSE DE OCOA	62,368	1	2		
013. San José de Ocoa	39,360			1 y 1	5 y 5
150. Sabana Larga	11,443			1 y 1	5 y 5
152. Rancho Arriba	11,565			1 y 1	5 y 5
32. SANTO DOMINGO	1,817,754	1	36		
Circunscripción 1			6		
223. Santo Domingo Este (parcial)	290,394			1 y 1	12 y 12
Circunscripción 2			4		
223. Santo Domingo Este (parcial)	208,686				
Circunscripción 3			8		8 y 8
223. Santo Domingo Este (parcial)	290,107				12 y 12
226. Boca Chica	99,508			1 y 1	5 y 5
227. Guerra	32,495			1 y 1	5 y 5
Circunscripción 4			6		
224. Santo Domingo Oeste	280,912			1 y 1	11 y 11
Circunscripción 5			5		
228.-Pedro Brand	47,199			1 y 1	5 y 5
229.-Los Alcarrizos	199,611			1 y 1	14 y 14
Circunscripción 6			7		
225. Santo Domingo Norte	368,842			1 y 1	15 y 15
	8,562,541	32	178	151 y 151	963 y 963



QUINTO: Las propuestas de candidatos para los cargos de Senadores y Diputados de la República deberán ser presentadas ante la Junta Central Electoral, y las propuestas para cargos Municipales deberán ser presentadas ante la Junta Electoral que corresponda, por partidos políticos, o agrupaciones independientes, acompañadas de todos los requisitos y documentos indicados en el artículo 69 de la Ley Electoral No.275-97.

SEXTO: Las propuestas deberán ser presentadas a más tardar, el diecisiete (17) de Marzo del Dos Mil Seis (2006), a las doce (12) horas de la noche.

SEPTIMO: Los candidatos electos tomarán posesión el día Dieciséis (16) de Agosto del Año Dos Mil Seis (2006) y su ejercicio constitucional durará cuatro (4) años.

OCTAVO: Las Elecciones Ordinarias Generales objeto de la presente PROCLAMA se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la República Dominicana.

NOVENO: Se ordena, que la presente resolución sea publicada y notificada conforme a las previsiones legales correspondientes en los medios de comunicación y de circulación nacional.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiséis (26) días del mes de Enero del año Dos Mil Seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro



Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilles

Secretario General

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS

Núm. 05/2005

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida mediante la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 7 de enero del 2003, regularmente reunida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artilles**, Secretario General.

VISTAS: Las instancias dirigidas a la Junta Central Electoral por las agrupaciones de ciudadanos con propósito de constituirse en partidos políticos denominados: Partido Acción Liberal (PAL), representado por la Lic. Maritza López de Ortiz, de fecha 9 de mayo del 2005; Movimiento por un Ocoa Mejor (MOVIPOM), representado por el Profesor Miguel A. Suazo, de fecha 23 de mayo del 2005; Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), representado por el Lic. Hatuey De Camps Jiménez, de fecha 22 de junio del 2005; Partido Conciliación Independiente (PCI), representado por el Dr. Nelson Reyes Cerda, de fecha 1 de agosto del 2005.



VISTO: El informe del Departamento de Partidos Políticos de fecha 17 de agosto del 2005, mediante el cual se apodera a este Tribunal Electoral del conocimiento definitivo de las precitadas solicitudes de reconocimiento, donde se describen las informaciones de las agrupaciones políticas que solicitan reconocimiento en los aspectos de inventario de los registros, conteo manual, confirmación física de afiliados, análisis presupuestarios, verificación de locales y directivas, entre otros.

Que entre los resultados del informe se evidencian deficiencias de algunas organizaciones relativas a la verificación de sus locales provinciales, directivas y afiliados.

CONSIDERANDO: Que el artículo 42 de la Ley 275-97 que copiado a la letra dice: “Forma de Solicitud. El reconocimiento deberá ser solicitado por los organizadores a la Junta Central Electoral con la presentación de los siguientes documentos: a) Exposición sumaria de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el partido, en armonía con lo que establece el artículo 4 de la Constitución de la República; b) Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Central Electoral; c) Constancia de la denominación, o lema del partido, que sintetizarán en lo posible las tendencias que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos; d) Los dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma y color o los colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o lemas. Además, no deberán coincidir en todo ni en parte con el Escudo o la Bandera de la República, ni en ningún caso podrán llevar los nombres de los Padres de la Patria o de los Restauradores; e) Una declaración jurada por los

organizadores de que el partido cuenta con un número de afiliados no menor del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, en aquellas provincias donde presente organismos de dirección, de una lista con los nombres, número de Cédula de Identidad y Electoral y direcciones de aquellos que respaldan la solicitud, con no menos del uno por ciento (1%) de los votantes de las provincias en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, pero manteniendo siempre la obligatoriedad de depositar el listado total a nivel nacional con no menos del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales. Además de la indicada lista, estas informaciones deben presentarse en medios informáticos compatibles con los de la Junta Central Electoral; f) Una declaración de los organizadores en la cual se haga constar que el partido tiene organismos de dirección provisionales operando y locales abiertos funcionando, por lo menos en cada uno de los municipios cabeceras de provincias del país y del Distrito Nacional, y que los mismos deberán estar ubicados en las zonas urbanas. Esta declaración deberá acompañarse de una relación de dichos organismos de dirección, con indicación de los nombres, direcciones, profesión, número de Cédula de Identidad y Electoral, residencia y cargo de cada uno de los directores, así como las direcciones de los locales; g) El presupuesto de ingresos y gastos del partido durante el proceso de organización y reconocimiento, con indicación detallada de los aportes recibidos y sus fuentes, así como de los egresos realizados hasta la fecha de solicitud. Nombres y cargos de las personas autorizadas a recabar y recibir fondos a nombre del partido y de los que aprueban los desembolsos y detalles del manejo de fondos; h) El presupuesto de ingresos y gastos del partido hasta las próximas elecciones generales, con indicación detallada de las fuentes de ingresos.

La Junta Central Electoral verificará la veracidad de esas declaraciones.



Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones o partidos políticos deben ser sometidas a la Junta Central Electoral, a más tardar, ocho (8) meses antes de la fecha de celebración de la próxima elección ordinaria. En ese mismo plazo las agrupaciones independientes deben hacer a la Junta Central Electoral las declaraciones a que se refiere el artículo 67 de esta ley.

No será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por una agrupación o partido político que hubiere sido reconocido en dos ocasiones o más y que se hubiere extinguido con posterioridad al último reconocimiento por una cualquiera de las causas establecidas en el artículo 61 de esta ley.”

CONSIDERANDO: Que todas las agrupaciones de ciudadanos (as) que deseen participar en actividades políticas de conformidad con la Constitución de la República y las leyes, deben someter a la Junta Central Electoral los requisitos que exige la ley sobre la materia.

CONSIDERANDO: Que es facultad de la Junta Central Electoral la verificación de toda la documentación que le sea depositada en los plazos legales cuando se trata de reconocimiento de partidos políticos y que, como consecuencia de las indicadas verificaciones ésta puede otorgar o no el reconocimiento solicitado.

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral procedió a través de sus departamentos correspondientes a cumplir con el requerimiento indicado que se llevó a cabo en las ciudades señaladas por los solicitantes en las supraindicadas instancias.

Por tales motivos, la Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales y en nombre de la República:

RESUELVE:

PRIMERO: OTORGAR EL RECONOCIMIENTO al Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), como agrupación política legalmente establecida de acuerdo al artículo No.41 de la Ley No.275-97 y sus modificaciones, acogiendo la



recomendación contenida en el informe del Departamento de Partidos Políticos de fecha 17 de agosto del 2005. Disponer que en relación a los símbolos y bandera de este partido dar el tratamiento institucionalmente establecido.

SEGUNDO: En cuanto a los partidos en formación: Partido de Conciliación Independiente (PCI), Partido Acción Liberal (PAL) y Movimiento por un Ocoa Mejor (MOVIPOM), CONCEDERLES UN PLAZO hasta el 16 de septiembre del 2005 para dar cumplimiento al conjunto de requerimientos establecidos por la Ley Electoral No.275-97 y sus modificaciones.

TERCERO: Ordenar, como al efecto se ordena, que la presente resolución sea publicada y notificada conforme a las previsiones legales correspondientes.

Dada, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil cinco (2005).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilles

Secretario General



RESOLUCION SOBRE VOTACIÓN PREFERENCIAL

NUM. 06/2005

La **Junta Central Electoral**, institución de derecho público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artilles**, Secretario, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República de fecha 25 de julio del 2002.

VISTA: La Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones.

VISTA: La Ley de Organización Municipal No. 3455-52 y sus modificaciones.

VISTAS: Las Resoluciones Nos. 5-2001 de fecha 2 de julio del 2001, 8-2001 de fecha 5 de septiembre del 2001 y 11-2001 de fecha 4 de diciembre del 2001, sobre el establecimiento de Circunscripciones Electorales.



VISTO: El punto No. 3 del Acta de la Sesión Administrativa del Pleno de la Junta Central Electoral No.09/2005 de fecha 06 de Julio/2005.

VISTAS: Las opiniones de los partidos políticos contenidas en los escritos depositados en la Junta Central Electoral por sus respectivos delegados.

CONSIDERANDO: Que el artículo 90 de la Constitución de la República establece que corresponde a las Asambleas Electorales elegir a los Senadores y Diputados, los Regidores de los Ayuntamientos, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus respectivos suplentes.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana en su artículo 24 y la Ley Electoral vigente en su párrafo 1ero. del artículo 80, disponen que los diputados se elegirán cada cuatro (4) años a razón de uno (1) por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de veinticinco mil, sin que en ningún caso sean menos de dos.

CONSIDERANDO: Que el artículo 79 de la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones, establece que para el año 2002 y subsiguientes las elecciones nacionales para escoger diputados y regidores se harán mediante Circunscripciones Electorales, a fin de garantizar que los ciudadanos que resulten electos sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen.

CONSIDERANDO: Que partiendo de la experiencia y los resultados de las pasadas elecciones Congresionales y Municipales del año 2002 las Circunscripciones Electorales Plurinominales establecidas mediante la Resolución No.5-2001 del 2 de julio del año 2001, específicamente en aquellas provincias cuya población excedía los 250,000 habitantes, demostraron ser viables para la escogencia de los representantes de las provincias en la Cámara de Diputados de la República.



CONSIDERANDO: Que se ha podido comprobar que los efectos del sistema de votación preferencial permitieron la elección de un 20% de candidatos de diputados que no estaban ubicados en los primeros lugares de las respectivas boletas.

CONSIDERANDO: Que en el ámbito de nuestro sistema electoral nacional se define como voto preferencial aquél por medio del cual el elector (a) tiene la posibilidad de escoger al candidato a diputado (a) de su preferencia, mediante el marcado de su fotografía en la boleta electoral, es decir, el elector (a) tiene la posibilidad de elegir, dentro de la lista de personas que presentan los partidos políticos, aquél o aquélla que considere un (a) verdadero (a) representante de la comunidad por la cual se postula.

CONSIDERANDO: Que al revisar las posiciones externadas por varios de los Partidos Políticos reconocidos a través de sus respectivos delegados, los cuales han opinado favorablemente sobre el ejercicio del voto preferencial, la Junta Central Electoral ha entendido pertinente mantener la elección de los Diputados de la misma forma que fue ejercida en las pasadas elecciones congresionales y municipales del año 2002, proceso para el cual fueron incorporadas algunas mejoras y que, siendo implementadas por primera vez, surtieron un efecto positivo.

CONSIDERANDO: Que al celebrar audiencias públicas en las cuales han participado Diputados al Congreso hemos podido constatar la opinión favorable de éstos con respecto al voto preferencial, incluso manifestando su interés de que este tipo de selección sea la que prime al momento de escoger a los representantes de la Cámara de Diputados.

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral, como institución rectora del proceso electoral, tiene a bien considerar todas las opiniones que son verdidas en torno a la organización



de las elecciones y, en ese sentido, estimular la participación de todos los sectores interesados en lograr un certamen electoral libre de cuestionamientos y cuyos resultados sean aceptados por la mayoría.

CONSIDERANDO: Que las motivaciones antes expuestas fueron el soporte para que en fecha 6 de julio del año 2005, la Junta Central Electoral decidiera mantener el ejercicio del voto preferencial en el caso de los diputados y postergar su implementación en el caso de los regidores, los cuales serán seleccionados de la forma tradicional, tal cual está contenido en la Resolución No.5-2001, dictada por la Junta Central Electoral en fecha dos (2) de julio del año 2001 que textualmente dice: “que para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido, agrupación política o candidato, en cada demarcación electoral, tanto al nivel congressional como para el nivel municipal, se utilice el método proporcional tradicional (D´Hondt) a los fines de garantizar la representación de las minorías conforme lo establecen la Constitución de la República y la Ley Electoral vigentes”.

CONSIDERANDO: Que las Leyes No.12-2000 y 13-2000 establecen que en la composición total de las nominaciones propuestas a la Junta Central Electoral los partidos y las agrupaciones políticas incluirán una proporción no menor del treinta y tres por ciento (33%) de mujeres, en el caso de los diputados y regidores, y el cincuenta por ciento (50%) en el caso de los síndicos y suplentes.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Ley Electoral vigente en el literal g), sobre las atribuciones correspondientes al Pleno de la Junta Central Electoral, faculta a la institución para “dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las Leyes en lo relativo a elecciones y el regular desenvolvimiento de éstas”.



CONSIDERANDO: Que el artículo 6 en literal d), sobre las atribuciones de la Cámara Administrativa confiere a la Junta Central Electoral: “Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el derecho del voto. Dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efectos durante el período electoral de las elecciones de que se trate”.

La **Junta Central Electoral** en uso de sus facultades legales y reglamentarias, y en nombre de la República,

RESUELVE

PRIMERO: Establecer, que a los fines de escoger a los diputados y diputadas que resulten electos en las elecciones congresionales y municipales del año 2006, la selección de éstos (as) sea hecha mediante el ejercicio del voto preferencial, entendiéndolo como la posibilidad que tiene el elector de escoger o seleccionar, dentro de la lista de candidatos que presentan los partidos políticos, a aquél o aquélla de su preferencia.

SEGUNDO: Ratificar los términos sobre el particular contenidos en la Resolución 5-2001 del dos (2) de julio del año 2001, mediante la cual el ejercicio del voto preferencial sólo se ejercía para el caso de los diputados y diputadas, estableciendo postergar su aplicación para el caso de los regidores y sus respectivos suplentes.

TERCERO: Disponer que el ejercicio del voto preferencial en el caso de los diputados y diputadas, se llevará a efecto en



todas las jurisdicciones electorales creadas por la Constitución y las leyes, a saber provincias y circunscripciones electorales.

CUARTO: Ratificar que para la elección de los diputados y diputadas en las provincias y circunscripciones electorales establecidas, el ciudadano podrá votar por un (a) candidato (a) determinado (a), marcando el recuadro con la foto del (de la) mismo (a); o por el partido o agrupación política, con sólo marcar el recuadro con el emblema y/o las siglas del mismo, estableciéndose que en este caso el voto emitido no favorecería a ningún candidato en particular y, en consecuencia, será sumado a la totalidad de votos obtenidos por el partido de que se trate.

PÁRRAFO: Cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato a Diputado (a) de su preferencia está favoreciendo con su voto al partido de éste (a) y por ende al candidato (a) a Senador (a) de dicho partido.

QUINTO: Disponer que las propuestas de candidatos para cada provincia y/o circunscripción electoral serán sustentadas por decisión de las convenciones internas de los partidos y agrupaciones políticas reconocidos, de conformidad con sus Estatutos y la Ley Electoral, respetando lo que concierne a la cuota femenina.

SEXTO: Disponer que para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido, agrupación política o candidatos en cada demarcación electoral, tanto para el nivel congresional como para el nivel municipal, se utilice el método proporcional (D'Hondt) a los fines de garantizar la representación de las minorías, conforme lo establecen la Constitución de la República y la Ley Electoral vigente.

SÉPTIMO: Ordenar que la presente Resolución sea publicada en la forma prevista en Ley, y remitida a las Juntas Electorales y a los partidos y agrupaciones políticas reconocidas.



DADA en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil cinco (2005).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés

Secretario General

RESOLUCIÓN SOBRE EL RECHAZO A PARTIDOS POLÍTICOS

NÚM. 02/2006

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida mediante la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 7 de enero del 2003, regularmente reunida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artilles**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

VISTAS: Las instancias dirigidas a la Junta Central Electoral por las agrupaciones de ciudadanos con propósito de constituirse en movimientos y partidos políticos denominados: **Movimiento por un Ocoa Mejor (MOVIPOM)** de fecha 14/06/2005, suscrita por el Profesor Miguel Suazo, Presidente; **Movimiento Acción San Cristobalense (MASC)** de fecha 27/06/2005, suscrita



por el Licenciado José Maceo (Marcos), Presidente; **Movimiento Independiente de Integración Popular (MIIPO)** de fecha 27/06/2005, suscrita por el Doctor Francisco Antonio Pichardo, Presidente; **Movimiento Solidaridad Nacional (MSN)** de fecha 29/07/2005, suscrita por el Licenciado Ramón Emilio Concepción, Presidente; **Partido Acción Liberal (PAL)** de fecha 05/08/2005, suscrita por la Licenciada Maritza López de Ortiz, Presidenta; **Partido Solidaridad Dominicana (PSD)** de fecha 09/08/2005, suscrita por el señor José Francisco Rodríguez Portorreal, Presidente; **Partido de Conciliación Independiente (PCI)** de fecha 10/08/2005, suscrita por el Doctor Nelson Reyes Cerda, Presidente; **Movimiento de la Unidad Municipal (M.U.M.)** de fecha 29/08/2005, suscrita por el Doctor Pedro Ruiz Rojas, Presidente; **Frente Amplio por la Municipalidad (FAMILIA)** de fecha 02/09/2005, suscrita por los señores Doctor Francisco Antonio Matos, Presidente y Doctor Anulfo Virgilio Mateo Pérez, Secretario General; **Movimiento Vida**, de fecha 09/09/2005, suscrita por las señoras Klendy Peña Pérez, Presidenta y Licenciada María Luisa Guzmán, Secretaria General; **Movimiento de Integración Municipal San Cristobalense (MOIMSA)** de fecha 10/09/2005, suscrita por los señores Tirso Pérez, Presidente; Juan Antonio Reynoso, Secretario General y Apolinar Ramírez, Secretario de Organización; **Partido Avanzada Juvenil Nacional (PAJN)** de fecha 11/09/2005, suscrita por el Doctor Willymberto Taveras Rodríguez, Presidente; **Movimiento Acción por Santiago (MASA)** de fecha 12/09/2005, suscrita por los señores George Jacob Schwarbarl Schiller, Coordinador General y Rafael Núñez Abreu, Coordinador de Organización; **Partido Nacional Cañero (PNC)** de fecha 14/09/2005, suscrita por el Ingeniero Dioclesio Ozuna Matos, Presidente y Edmundo Flores, Secretario; **Movimiento Provincial Puerto Plata (MPPP)** de fecha 14/09/2005, suscrita por el señor Camilo Rafael Brugal Martínez, Presidente; **Partido Reformista**



Popular (PRP) de fecha 15/09/2005, suscrita por los señores Leoncio Almánzar Objio, Narciso Antonio Hernández, Gisela Meran Mora y Rafael Emiliano Agramonte; **Movimiento Amor y Paz (MAPA)** de fecha 15/09/2005, suscrita por los señores Sigfredo Serrulle Ramia, Presidente y Yim Fanini, Secretario General; **Proyecto de Avanzada Independiente (PRAI)** de fecha 15/09/2005, suscrita por los señores Pedro Antonio Soriano, Presidente y Carlos de la Cruz Adames, Secretario General; **Movimiento Nacer Comunitario (MONACO)** de fecha 15/09/2005, suscrita por los señores Manuel Rivera Malena, Presidente y Liber Javier, Secretaria de Actas y Correspondencia; **Partido Nacionalista de la República Dominicana (PNRD)** de fecha 16/09/2005, suscrita por los señores Doctor José Santana, Presidente y Doctora Alfonsina Reyes, Secretaria General; **Partido Cristiano Nacional (PCN)** de fecha 16/09/2005, suscrita por los señores Doctor Salvador Pitaluga, Presidente; Pastor Clemente Candelario, Secretario General y Licenciada Nery Orquídea Gutiérrez, Presidenta en funciones; **Movimiento Distrital Pluralista (MODIP)** de fecha 16/09/2005, suscrita por el señor Juan Pablo Leocadio, Presidente; **Movimiento de Integración Cristiana (MIC)** de fecha 16/09/2005, suscrita por la Doctora Ana Inés Polanco, Presidenta; **Movimiento Independiente por el Desarrollo Oriental (MOVIDO)** de fecha 16/09/2005, suscrita por los señores Licenciado Juan Marte Silverio, Presidente y Modesto Torres, Secretario General; **Movimiento Buenos Dominicanos Auténticos (MBDA)** de fecha 16/09/2005, suscrita por el señor Héctor Tapia Díaz, Presidente; **Movimiento Urbano, Rural, Obrero (MURO)** de fecha 16/09/2005, suscrita por el señor Carlos Alberto Dominici, Presidente; **Movimiento Social del Este (M.O.S.E.)** de fecha 16/09/2005, suscrita por la Doctora Doralicy Cunillera, Presidenta; **Movimiento Independiente Ecos de Libertad (MIEL)** de fecha 16/09/2005, suscrita por los señores Licenciado Juan Ramón



Soto Villalona, Presidente y Claristhel Soto, Vice-Presidenta; **Movimiento de Veteranos y Civiles con Leonel (MOVECIL)** de fecha 16/09/2005, suscrita por los señores Licenciado Luís Antonio Luna Paulino, Presidente y Licenciado Juan Esteban Gil Ramírez, Secretario Asuntos Legales; **Movimiento Impulso al Desarrollo (MOVIMPUDE)** de fecha 16/09/2005, suscrita por el Profesor Julio Hernández Rojas, Presidente; **Movimiento Integración y Desarrollo (MIDE)** de fecha 20/09/2005, suscrita por el señor Juan Alberto Mercado, Presidente; **Partido Fuerza Viva en Desarrollo (PFVD)** de fecha 20/09/2005, suscrita por los señores Roberto Díaz Alcántara, Presidente y Licenciado Elsidio Ramón Rodríguez, Secretario General y **Movimiento Independiente de Los Hidalgos** de fecha 16/10/2005, suscrita por el señor Manuel de los Santos Espinal, Presidente.

VISTOS: Los reportes del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral de los meses noviembre y diciembre del 2005, sobre la verificación de directivas, locales y afiliados en Santo Domingo; Distrito Nacional; Cibao I: Duarte, Cotuí y Salcedo; Cibao II: Samaná y María Trinidad Sánchez; Cibao III: La Vega, Moca, Monseñor Nouel y Jarabacoa; Cibao IV: Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi y Valverde; Cibao V: Santiago de los Caballeros y Puerto Plata; Sur I: San Cristóbal, Bani y Azua; Sur II: Pedernales, Barahona Batoruco, Jimaní y Paraíso; Sur III: San Juan de la Maguana, Elías Piña y San José de Ocoa; Este I: San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia; Este II: Hato Mayor, El Seybo y Monte Plata, correspondientes a las agrupaciones políticas indicadas en el considerando precedente.

VISTOS: Los informes de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas que solicitan reconocimiento de fechas 13 de octubre y 23 de noviembre del año 2005, rendidos por el Licenciado Bernardo Inoa, Auditor General de la Junta Central Electoral.

VISTOS: Los informes de análisis de la lista de simpatizantes de las agrupaciones políticas que solicitan reconocimiento de fechas 9 y 12 de diciembre del año 2005, remitidos por el Ingeniero Miguel Ángel García, Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral.

VISTO: El informe del Departamento de Partidos Políticos de fecha 22 de diciembre del 2005, mediante el cual se apodera a este Tribunal Electoral del conocimiento definitivo de las precitadas solicitudes de reconocimiento, donde se señalan las informaciones de las agrupaciones políticas que solicitan reconocimiento en los aspectos de inventario de los registros de afiliados (conteo manual y confirmación física de afiliados), análisis presupuestarios, verificación de locales y directivas, entre otros, donde se evidencian las deficiencias del conjunto de las organizaciones en relación a la composición de sus directivas, locales provinciales, y localización de sus afiliados.

CONSIDERANDO: Que el artículo 42 de la Ley 275-97 copiado a la letra dice: *“Forma de Solicitud. El reconocimiento deberá ser solicitado por los organizadores a la Junta Central Electoral con la presentación de los siguientes documentos: a) Exposición sumaria de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el partido, en armonía con lo que establece el artículo 4 de la Constitución de la República; b) Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Central Electoral; c) Constancia de la denominación, o lema del partido, que sintetizarán en lo posible las tendencias que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos; d) Los dibujos*



contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma y color o los colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o lemas. Además, no deberán coincidir en todo ni en parte con el Escudo o la Bandera de la República, ni en ningún caso podrán llevar los nombres de los Padres de la Patria o de los Restauradores; e) Una declaración jurada por los organizadores de que el partido cuenta con un número de afiliados no menor del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, en aquellas provincias donde presente organismos de dirección, de una lista con los nombres, número de Cédula de Identidad y Electoral y direcciones de aquellos que respaldan la solicitud, con no menos del uno por ciento (1%) de los votantes de las provincias en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, pero manteniendo siempre la obligatoriedad de depositar el listado total a nivel nacional con no menos del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias presidenciales. Además de la indicada lista, estas informaciones deben presentarse en medios informáticos compatibles con los de la Junta Central Electoral; f) Una declaración de los organizadores en la cual se haga constar que el partido tiene organismos de dirección provisionales operando y locales abiertos funcionando, por lo menos en cada uno de los municipios cabeceras de provincias del país y del Distrito Nacional, y que los mismos deberán estar ubicados en las zonas urbanas. Esta declaración deberá acompañarse de una relación de dichos organismos de dirección, con indicación de los nombres, direcciones, profesión, número de Cédula de Identidad y Electoral, residencia y cargo de cada uno de los directores, así como las direcciones de los locales; g) El presupuesto de ingresos y gastos del partido durante el proceso de organización y



reconocimiento, con indicación detallada de los aportes recibidos y sus fuentes, así como de los egresos realizados hasta la fecha de solicitud. Nombres y cargos de las personas autorizadas a recabar y recibir fondos a nombre del partido y de los que aprueban los desembolsos y detalles del manejo de fondos; h) El presupuesto de ingresos y gastos del partido hasta las próximas elecciones generales, con indicación detallada de las fuentes de ingresos.

La Junta Central Electoral verificará la veracidad de esas declaraciones.

Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones o partidos políticos deben ser sometidas a la Junta Central Electoral, a más tardar, ocho (8) meses antes de la fecha de celebración de la próxima elección ordinaria. En ese mismo plazo las agrupaciones independientes deben hacer a la Junta Central Electoral las declaraciones a que se refiere el artículo 67 de esta ley.

No será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por una agrupación o partido político que hubiere sido reconocido en dos ocasiones o más y que se hubiere extinguido con posterioridad al último reconocimiento por una cualquiera de las causas establecidas en el artículo 61 de esta ley.”

CONSIDERANDO: Que todas las agrupaciones de ciudadanos (as) que deseen participar en actividades políticas de conformidad con la Constitución de la República y las leyes, deben someter a la Junta Central Electoral la documentación probatoria de que reúnen los requisitos que exige la ley sobre la materia.

CONSIDERANDO: Que es obligación de la Junta Central Electoral efectuar la verificación de toda la documentación que le sea depositada en los plazos legales cuando se trata de reconocimiento de partidos políticos, para que como consecuencia de esas verificaciones ésta pueda otorgar o no el reconocimiento solicitado.



CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral procedió a través de sus departamentos correspondientes a cumplir con el requerimiento indicado que se llevó a cabo en las ciudades señaladas por los solicitantes en las supraindicadas instancias.

CONSIDERANDO: Que el informe del Departamento de Partidos Políticos de fecha 22 de diciembre del 2005, contiene las siguientes observaciones:

“Tomando en consideración que no existe un reglamento que regule con cuantos miembros se considera existente una directiva, procedimos a dar como válidas las mismas en los siguientes casos: cuando esté presente el Presidente, el Secretario ú otro miembro. Es por ello que la gran mayoría de las agrupaciones cumplen con este requisito. La no localización de los militantes de las agrupaciones políticas se convirtió en una constante.

La mayoría de los locales de las agrupaciones políticas solicitantes aunque existen no reúnen las condiciones mínimas para ser considerados como tal.”

“Partido Reformista Popular (PRP), “De 32 locales y Directivas que exige la ley, tienen 31 locales que existen y uno (1) que no existe, 30 directivas confirmadas y dos (2) no confirmadas. En cuanto a los afiliados, de 383 que debieron ser contactados, se localizaron 99, de los cuales 54 afirmaron ser afiliados y 45 negaron ser afiliados. No tiene local, directiva ni afiliado en la Provincia de Santiago Rodríguez.”

“Partido Acción Liberal (PAL), “En cuanto a los afiliados, de 383 que debieron ser contactados, se localizaron 25, de los cuales 9 respondieron de forma positiva y 16 en forma negativa. No tiene local en la Provincia de Jimaní”.

“Partido Solidaridad Dominicana (PSD), de 32 locales y directivas que exige la ley, obtuvo 32 locales y 28 directivas confirmadas y 4 no confirmadas. En cuanto a los afiliados, de 383 que debieron ser contactados, se localizaron 57, de los cuales 9 respondieron en forma positiva y 48 en forma negativa”



“Partido Nacional de la República Dominicana (PNRD), de 32 locales y directivas que exige la ley, tienen 31 locales existentes y uno (1) no existente, en cuanto a las directivas 19 confirmadas y 13 no confirmadas. En cuanto a los afiliados, de 383 que debieron ser contactados, se localizaron 57, de los cuales 8 respondieron en forma positiva y 49 en forma negativa. No tienen local en las Provincias de Pedernales, El Seybo y Dajabón”

Por tales motivos, la Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales y en nombre de la República:

RESUELVE:

PRIMERO: No otorgar reconocimiento a los movimientos, proyectos y partidos políticos denominados: Movimiento por un Ocoa Mejor (MOVIPOM), Movimiento Acción San Cristobalense (MASC), Movimiento Independiente de Integración Popular (MIIPO), Movimiento Solidaridad Nacional (MSN), Partido Acción Liberal (PAL), Partido Solidaridad Dominicana (PSD), Partido Conciliación Independiente (PCI), Movimiento de la Unidad Municipal (M.U.M.), Frente Amplio por la Municipalidad (FAMILIA), Movimiento Vida, Movimiento de Integración Municipal San Cristobalense (MOIMSA), Partido Avanzada Juvenil Nacional (PAJN), Movimiento Acción por Santiago (MASA), Partido Nacional Cañero (PNC), Movimiento Provincial Puerto Plata (MPPP), Partido Reformista Popular (PRP), Movimiento Amor y Paz (MAPA), Proyecto de Avanzada Independiente (PRAI), Movimiento Nacer Comunitario (MONACO), Partido Nacionalista de la República Dominicana (PNRD), Partido Cristiano Nacional (PCN), Movimiento Distrital Pluralista (MODIP), Movimiento de Integración Cristiana (MIC), Movimiento Independiente por el Desarrollo Oriental (MOVIDO), Movimiento Buenos Dominicanos Auténticos (MBDA), Movimiento Urbano, Rural, Obrero (MURO), Movimiento Social del Este (M.O.S.E.), Movimiento Independiente Ecos de Libertad (MIEL), Movimiento de Veteranos y Civiles con Leonel (MOVECIL), Movimiento Impulso al Desarrollo (MOVIMPUDE), Movimiento Integración



y Desarrollo (MIDE), Partido Fuerza Viva en Desarrollo (PFVD) y Movimiento Independiente de Los Hidalgos, por no ajustarse a las previsiones establecidas por la Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

SEGUNDO: Ordenar, como al efecto se ordena, que la presente resolución sea publicada y notificada conforme a las previsiones legales correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintitrés (23) días del mes de Enero del año Dos Mil Seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés

Secretario General



RESOLUCIÓN SOBRE MENORES QUE SERÁN MAYORES DE EDAD ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 16 DE MAYO DEL 2006

NUM. 4/2006

La Junta Central Electoral, institución de derecho público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral No.275-97, del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersección formada por las Avenidas General Gregorio Luperón y 27 de febrero en Santo Domingo, frente a la Plaza de la Bandera, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **DR. Nelson Buttén Varona**, Suplente de Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artilés**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Ley Electoral No. 275-97 del 21 de Diciembre de 1997 y sus modificaciones.

VISTA: La Ley No. 55, sobre el Registro Electoral.

VISTA: La Ley No. 8-92 del 31 de Marzo de 1992, sobre la Cédula de Identidad y Electoral.



CONSIDERANDO: Que por mandato de la Constitución de la República y las leyes especiales, el próximo 16 de Mayo del año 2006 se reunirán “las asambleas electorales” en todo el país a los fines de elegir los Senadores y Diputados, los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus Suplentes.

CONSIDERANDO: Que las leyes 55, del 22 de Julio de 1970, que crea el Registro Electoral, así como la 8-92, del 31 de Marzo de 1992, que refunde en un solo documento la Cédula de Identidad y el Carnet del Registro Electoral, establecen el procedimiento de cómo se forma la Lista Definitiva de Electores.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con las leyes que regulan la materia, la Junta Central Electoral ha dispuesto todo lo concerniente a la administración de los distintos procesos que concluirán con las votaciones del próximo 16 de Mayo del 2006 y la proclamación de los candidatos que resulten elegidos por la voluntad libérrima de los electores.

CONSIDERANDO: Que entre las atribuciones de la Junta Central Electoral están las que se refieren a formación, conservación y depuración de la lista definitiva de electores, dando conocimiento a los partidos políticos reconocidos de las bases de datos del registro que contiene dicha lista.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a dichas atribuciones la Junta Central Electoral, a través de los departamentos correspondientes, impartió las instrucciones con el propósito de que en atención a la parte in fine del artículo 19 de la Ley 55 del 22 de Julio de 1970, sobre Registro Electoral, se inscribirán para formar parte de la lista definitiva de electores además de las personas que hubieren cumplido 18 años, los menores que antes del día de las elecciones cumplirán 18 años, con lo cual adquieren el derecho de elegir y se elegidos por haber alcanzado la mayoría de edad según las disposiciones legales que regulan esta materia.



CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral pudo detectar a través de la actualización de los procesos técnicos que un número de 42,602 personas que se inscribieron como menores de edad no están incluidos en la lista definitiva de electores por tener categoría “Menor de Edad”; sin embargo a la fecha son mayores de edad o lo serán antes de las Elecciones Congresionales y Municipales de Mayo del 2006, y por lo tanto estarán en condiciones de ejercer el sufragio por primera vez en dichas elecciones Congresionales y Municipales.

CONSIDERANDO: Que igualmente esta Junta Central Electoral ha podido establecer con el conocimiento y participación plena de los delegados políticos y técnicos de los diversos partidos políticos reconocidos como menores de edad, pasaran a formar parte de la Lista Definitiva de Electores, por haber adquirido la mayoría de edad, de conformidad con las leyes.

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral ha tomado todas las previsiones de lugar para que esas personas se les garantice ejercer su derecho en el colegio electoral donde les corresponde votar y que en consecuencia la presente resolución procura igualmente enfatizar nuestro compromiso de asegurar a todos los ciudadanos/as el sufragio como derecho inalienable de toda persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 6 de la Ley 275-97 y sus modificaciones, dentro de las atribuciones que corresponden al Pleno de la Junta Central Electoral se establece la siguiente: “Reglamentar y disponer todo lo concerniente a la formación, depuración y conservación del Registro Electoral”.

CONSIDERANDO: Que en la especie, la Junta Central Electoral es del criterio que para garantizar que los ciudadanos/as indicados en los considerandos quinto y sexto de esta resolución puedan votar en su respectivo colegio, es pertinente disponer que los señalados ciudadanos sean



incluidos en el Colegio Electoral que les quede más próximo a su lugar de residencia y por ende en la lista definitiva de electores.

Por tales motivos, la Junta Central Electoral en uso de sus facultades legales

RESUELVE

PRIMERO: Ratificar el derecho a los 42,602 ciudadanos que se inscribieron como menores de edad, que ya son mayores o que cumplirán dieciocho (18) años de edad antes de la celebración de las próximas Elecciones Ordinarias Generales Congresionales y Municipales del 16 de Mayo del 2006, a que sean incluidos en la Lista Definitiva de Electores y por tal razón se les expida la Cédula de Identidad y Electoral que les corresponda, y les sean entregadas al presentarse por ante los centros de cedulaación autorizados a partir del 1 de febrero del 2006.

SEGUNDO: Se dispone que dichos ciudadanos sean inscritos en Colegios Electorales correspondientes al Recinto más cercano a su lugar de residencia, según la información que haya suministrado el ciudadano al momento de inscribirse para la obtención de su Cédula de Identidad y Electoral.

TERCERO: Se instruye a las Direcciones de Cedulaación, Prensa y Publicidad, para que se realicen todas las acciones necesarias en procura de que las personas incluidas en la presente resolución puedan retirar, a partir del 1 de Febrero del 2006, su Cédula de Identidad y Electoral por ante los centros de cedulaación a nivel nacional. Esta facilidad estará en vigencia hasta el día 14 de Mayo del 2006.

CUARTO: Se ordena a las Direcciones de Registro Electoral, Informática, Elecciones y Cedulaación de la Junta Central Electoral implementar todos los pasos que fueren necesarios a los fines de dar cabal cumplimiento a la presente Resolución.

QUINTO: Se ordena a la Dirección de Comunicaciones de la Junta Central Electoral realizar todas las diligencias necesarias



para dar a conocer por los medios de comunicación disponibles el objeto de la presente Resolución para que los ciudadanos involucrados en la misma puedan recibir su documento oficial y así ejercer libremente el soberano derecho de sufragar.

SEXTO: Se dispone que la presente Resolución sea publicada en un periódico de circulación nacional para conocimiento de las personas que son objeto de la misma y que se encuentran en el cuerpo de esta Resolución. Igualmente, se ordena la notificación de la misma, por la vía ordinaria, a los partidos políticos acreditados ante cada una de las Juntas Electorales.

Dada en Santo Domingo, República Dominicana, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artiles

Secretario General



RESOLUCIÓN CUOTA FEMENINA

NÚM. 06- 2006

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida mediante la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 7 de enero del 2003, regularmente reunida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro, **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artiles**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Ley Electoral vigente.

VISTAS: Las leyes 12-2000 y 13-2000 del 2 y 8 de marzo del año 2000, respectivamente.

VISTA: La Resolución Sobre Cuota Femenina No.5-2002 de fecha 6 de marzo del 2002.

CONSIDERANDO: Que la Ley Electoral No. 275-97, en su artículo 68, modificado, establece un porcentaje de mujeres no menor al treinta y tres por ciento (33%) de la composición total de las nominaciones para los cargos de Diputados.

CONSIDERANDO: Que de igual modo el señalado texto de Ley establece una proporción de mujeres no menor del treinta



y tres por ciento (33 %) de las propuestas a cargos de Regidores y sus Suplentes, porcentaje que deberá ser colocado en la lista de elección en lugares alternos con relación a los cargos asignados a los hombres.

CONSIDERANDO: Que la Ley 13-2000 de fecha 8 de marzo del 2000 establece que en la boleta electoral municipal de todos los partidos deberá incluirse una mujer en los puestos de Sindico (a) ó Vice-Sindico (a).

CONSIDERANDO: Que el presente Reglamento contribuye a garantizar que la mujer ocupe su espacio en el quehacer político dominicano, en cuanto a su representación en las listas de candidatos, de conformidad con la legislación electoral vigente.

CONSIDERANDO: Que para una correcta interpretación de la ley es necesario distinguir entre los niveles de elección congresual y municipal.

CONSIDERANDO: Que toda propuesta en la cual no se respete la cuota femenina en los porcentajes establecidos en las leyes referidas, no debe ser aceptada por el órgano electoral correspondiente.

La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

PRIMERO: DISPONER que en la composición total de las nominaciones y propuestas por ante la Junta Central Electoral, cuando se trate de cargos de diputados, los partidos políticos, alianzas de partidos y agrupaciones políticas independientes incluyan una proporción no menor del treinta y tres por ciento (33%) de mujeres a esos cargos.

SEGUNDO: DISPONER que los partidos políticos, alianzas de partidos y agrupaciones políticas independientes que presenten propuestas de candidaturas, incluyan en las mismas un número de mujeres no menor de cincuenta y nueve (59) candidatas a Diputadas a nivel nacional. Los partidos políticos, alianzas de partidos y agrupaciones políticas independientes, al presentar sus candidatas a diputadas, podrán aumentar dicho número, no pudiendo, en ningún caso disminuirlo.



TERCERO: DISPONER que en el nivel municipal, cada partido político, alianzas de partidos o agrupación política independiente postule candidatas en cada municipio o circunscripción en la proporción detallada a continuación:

NIVEL MUNICIPAL

MUNICIPIO O CIRCUNSCRIPCIÓN (POR RANGO DE REGIDORES)	TOTAL DE CARGOS	CUOTA FEMENINA	PORCENTAJE MÍNIMO
5 Regidores y 5 Suplentes	10	4	40%
6 Regidores y 6 Suplentes	12	4	33%
8 Regidores y 8 Suplentes	16	6	38%
9 Regidores y 9 Suplentes	18	6	33%
10 Regidores y 10 Suplentes	20	7	35%
11 Regidores y 11 Suplentes	22	8	36%
12 Regidores y 12 Suplentes	24	8	33%
13 Regidores y 13 Suplentes	26	9	35%
14 Regidores y 14 Suplentes	28	10	36%
15 Regidores y 15 Suplentes	30	10	33%
16 Regidores y 16 Suplentes	32	11	34%
17 Regidores y 17 Suplentes	34	12	35%
19 Regidores y 19 Suplentes	38	13	34%

CUARTO: DISPONER que el cumplimiento de los porcentajes en la candidatura municipal sea independiente de las candidaturas a Diputados, aplicándose el referido treinta y tres por ciento (33%) por separado a cada nivel de elección y en forma alterna en lo atinente a los Regidores y sus Suplentes: una mujer del primer al tercer cargo; otra del cuarto al sexto; otra del séptimo al noveno, y así sucesivamente hasta completar la totalidad de cargos en el nivel de elección municipal.

QUINTO: DISPONER que los partidos políticos, alianzas de partidos y agrupaciones políticas independientes al presentar sus propuestas de candidaturas a cargos para Síndicos y Vice-Síndicos, incluyan una mujer en los puestos de Síndico o Vice-Síndico.

SEXTO: DISPONER que en razón de que en las próximas elecciones se elegirán ciento cincuenta y un (151) Síndicos y



ciento cincuenta y un (151) Suplentes de Síndicos, la propuesta de candidaturas de cada partido político, alianzas de partidos o agrupación política independiente, contenga no menos de ciento cincuenta y una (151) candidatas.

SÉPTIMO: DISPONER que la presente Resolución sólo tenga aplicación para las Elecciones Generales Congresuales y Municipales a celebrarse el 16 de mayo del 2006.

OCTAVO: La Junta Central Electoral y las Juntas Electorales velarán porque se cumplan estas disposiciones y no admitirán propuestas en violación de lo establecido en la presente Resolución.

NOVENO: Ordenar la notificación de esta Resolución a los partidos políticos, alianzas de partidos y agrupaciones políticas independientes y su publicación según lo determina la Ley.

Dada en Santo Domingo, Capital de República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés

Secretario General



RESOLUCIÓN SOBRE PLASTIFICADO DE ACTAS Y RELACIONES DE VOTACIÓN

NUM. 7/2006

La Junta Central Electoral, institución de derecho público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral No.275-97 del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersección formada por las Avenidas General Gregorio Luperón y 27 de febrero en Santo Domingo, frente a la Plaza de la Bandera, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artilés**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana del 25 de julio del año 2002.

VISTA: La Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que las Elecciones Ordinarias Generales deben celebrarse según las normas establecidas en la Constitución y las leyes adjetivas correspondientes, para que todo ciudadano con derecho al sufragio pueda ejercer el voto personal, libre, directo y secreto.



CONSIDERANDO: Que con la reforma constitucional del 25 de Julio del año dos mil dos (2002), se eliminó el párrafo del artículo 89 de la Constitución y con ello el funcionamiento de los Colegios Electorales Cerrados.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República: *“Las Elecciones serán dirigidas por la Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley”*.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 (literal d) de la Ley Electoral No.275-97 y sus modificaciones, establece dentro de las atribuciones de la Cámara Administrativa la de dictar las medidas que fueren necesarias para garantizar las mayores garantías y ofrecer las facilidades a los ciudadanos para ejercer el voto, adicionando a ello que dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efecto durante el periodo electoral de las elecciones de que se trate.

CONSIDERANDO: Que a los fines de garantizar que el voto emitido por cada elector sea valorado y respetado, sin que haya la posibilidad de que se cometan actos que violen la Constitución y la Ley Electoral, la Junta Central Electoral ha considerado la implementación de medidas tendentes a garantizar la inviolabilidad de los resultados.

CONSIDERANDO: Que ha sido evaluado y aprobado el uso del plástico adhesivo transparente, cuyo empleo satisfizo los requerimientos de seguridad y confiabilidad de las Actas y Relaciones de Votación del pasado proceso electoral presidencial del 2004.

CONSIDERANDO: Que la Ley Electoral establece una serie de sanciones para quienes violen sus disposiciones y las que la Junta Central Electoral tenga a bien dictar para el mejor desenvolvimiento de los procesos electorales.



La Junta Central Electoral haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO: Disponer que una vez realizado el escrutinio en los Colegios Electorales y verificado su resultado, es deber del Presidente del Colegio Electoral proceder a la plastificación del espacio correspondiente a los mismos dentro del Acta del Colegio Electoral (formulario No.4), en presencia de los demás miembros del colegio y los delegados políticos acreditados ante el mismo.

SEGUNDO: DISPONER, que una vez sean plastificados los resultados contenidos en el Acta del Colegio Electoral, se proceda a la plastificación de los resultados contenidos en las Relaciones de Votación (formularios No.5-A y 5-B), e inmediatamente dichos documentos serán firmados por los miembros del colegio electoral y los delegados políticos acreditados ante el mismo.

TERCERO: En el caso de que los referidos formularios, es decir, el Acta y las Relaciones de Votación, una vez sellados, no sean firmados por los delegados acreditados ante el colegio, el contenido de los mismos no queda invalidado, de lo cual se dará constancia en el Acta.

Párrafo I: Una vez completado el proceso de llenado de los formularios correspondientes, se procederá a la devolución de los materiales oficiales del Colegio Electoral hacia la Junta Electoral de que se trate, caso en el cual el Presidente introducirá el Acta del Colegio Electoral y las Relaciones de Votación conjuntamente con los demás documentos oficiales en la valija de seguridad y cerrará la misma con la presilla de color azul (numerada), la cual sólo podrá ser abierta en la Junta Electoral.

Párrafo II: Si aconteciera que la valija de seguridad llegara abierta a la Junta Electoral, los miembros de ésta procederán

a investigar las circunstancias bajo las cuales se produjo esta acción y de inmediato interrogarán al Presidente, al Secretario y a los delegados políticos que hayan formado parte de la comisión de devolución, de cuyo acontecimiento se levantará acta.

CUARTO: Es obligación de cada Junta Electoral, al momento de recibir el Acta del Colegio Electoral y las Relaciones de Votación que provienen de los Colegios Electorales, verificar que las mismas han sido llenadas correctamente y que están debidamente plastificadas. Las Actas que no cumplan con este requisito no serán escaneadas y por el contrario serán objeto de una aclaración por parte de las Juntas Electorales, los Presidentes y Secretarios del colegio, así como los delegados políticos acreditados ante cada una de las instancias mencionadas. En el caso de que el plástico haya sido adulterado o de alguna forma los resultados lo hayan sido, los miembros del colegio serán pasibles de las sanciones enumeradas en los artículos 171 y siguientes de la Ley Electoral, además de las contenidas en el Código Penal dominicano. En cada caso la Junta Electoral competente tomará la decisión correspondiente.

QUINTO: Las Juntas Electorales velarán porque las informaciones contenidas en la presente Resolución sean de conocimiento de los miembros de los colegios electorales al momento de ser designados por ellas, así como instruidas en los cursillos que se celebren durante el actual proceso electoral.

SEXTO: Ordenar la publicación y notificación de la presente Resolución conforme lo establece la ley.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).



Dr. Luis Arias Núñez
Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos
Miembro

Dr. Nelson José Gómez
Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán
Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González
Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez
Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez
Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez
Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez
Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés
Secretario General



RESOLUCIÓN ORDEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

NUM. 09 – 2006

La Junta Central Electoral, institución de derecho público establecida en la Constitución de la República y regida por la Ley Electoral No.275-97, del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones, regularmente constituida en su sede principal, sita en la intersección formada por las Avenidas General Gregorio Luperón y 27 de febrero en Santo Domingo, frente a la Plaza de la Bandera, integrada por el Dr. Luis Arias Núñez, Presidente; Dr. Salvador Ramos, Miembro; Dr. Nelson José Gómez, Miembro; Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán, Miembro; Dr. Luis Nelson Pantaleón González, Miembro; Dr. Rafael Díaz Vásquez, Miembro; Dr. José Luis Tavárez Tavárez, Miembro; Dr. Roberto Rosario Márquez, Miembro; Dr. Ramón Hernández Domínguez, Miembro; asistidos por el Dr. Antonio Lockward Artilles, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

VISTA: La Gaceta Oficial No. 10312 de fecha 8 de marzo del año 2005, la cual contiene los resultados obtenidos por cada uno de los partidos y agrupaciones políticas que participaron en las elecciones del nivel presidencial en el año 2004.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su Art. 89 dispone la celebración de Elecciones Generales Ordinarias Congresuales y Municipales el 16 de mayo de cada cuatro años.



CONSIDERANDO: Que al haberse efectuado las últimas Elecciones Generales Ordinarias Congresuales y Municipales el 16 de mayo del 2002, las próximas Elecciones han de celebrarse el 16 de mayo del 2006.

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer el orden en que estarán colocados los partidos o agrupaciones políticas en las boletas electorales correspondientes al proceso eleccionario a celebrarse el 16 de mayo del año en curso.

CONSIDERANDO: Que el orden de los partidos o agrupaciones políticas en las boletas electorales correspondientes al proceso eleccionario a celebrarse el 16 de mayo del año en curso, es además necesario para los trabajos administrativos propios del proceso electoral y para las actividades proselitistas de las citadas entidades políticas.

CONSIDERANDO: Que para asignar el número y el orden que ha de corresponder a los partidos o agrupaciones políticas en la boleta electoral, se han considerados dos criterios: 1ero. El número de votos válidos obtenidos en las elecciones inmediatamente precedentes, y 2do. La fecha de reconocimiento de cada partido, tanto en el caso de no haber concurrido a las elecciones precedentes o de haberlo hecho como parte de un recuadro único simbolizado en otro partido, como en el caso de los partidos reconocidos con posterioridad a los últimos comicios.

CONSIDERANDO: Que existe en el Municipio de Yaguate, Provincia San Cristóbal, el Movimiento Independiente de Yaguate, agrupación política que ostenta una representación en la composición del Ayuntamiento de dicho municipio, al alcanzar la posición de la cuarta regiduría en la referida demarcación en las pasadas elecciones congresionales y municipales del año 2002.

CONSIDERANDO: Que el artículo 6 de la Ley Electoral vigente en el literal g), sobre las atribuciones correspondientes al Pleno de la Junta Central Electoral, faculta a la institución



para “dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las Leyes en lo relativo a elecciones y el regular desenvolvimiento de estas”.

La Junta Central Electoral, en nombre de la República, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,

RESUELVE:

PRIMERO: DISPONER que el orden numérico en que deberán figurar en los documentos oficiales electorales y en los recuadros de las boletas electorales los partidos o agrupaciones políticas con derecho a participar en las Elecciones Ordinarias Generales Congresionales y Municipales a celebrarse el día dieciséis (16) de mayo del año dos mil seis (2006) será determinado tomando en cuenta los siguientes criterios:

- 1) La cantidad de votos obtenidos por cada partido político, de manera individual, en las Elecciones Ordinarias Generales del Nivel Presidencial celebradas el dieciséis (16) de mayo del año dos mil cuatro (2004).
- 2) Los partidos o agrupaciones políticas que participaron con recuadro único en las Elecciones Generales Ordinarias del Nivel Presidencial celebradas el dieciséis (16) de mayo del año dos mil cuatro (2004) o que no concurrieron a las mismas, pero mantuvieron su personería jurídica, tomando como base la fecha de la Resolución adoptada por la Junta Central Electoral, mediante la cual se otorgó el reconocimiento a cada partido o agrupación política. Los partidos o agrupaciones políticas que obtuvieron su reconocimiento después de transcurridas las últimas Elecciones Generales Ordinarias del Nivel Presidencial, tomando como base la fecha de la Resolución adoptada por la Junta Central Electoral, mediante la cual se le otorgara el reconocimiento y el orden que ocuparen en dicha Resolución.



SEGUNDO: DISPONER que el orden y el número que corresponde a cada partido o agrupación política independiente que participaran en las Elecciones Ordinarias Generales Congresuales y Municipales a celebrarse el día dieciséis (16) de mayo del año dos mil seis (2006), de acuerdo con lo señalado en los numerales 1 y 2 del artículo primero de la presente Resolución, será el siguiente:

No. DE ORDEN	PARTIDOS POLÍTICOS	VOTOS VALIDO OBTENIDOS 16/05/04
1	Partido de la Liberación Dominicana (PLD)	1,771,377
2	Partido Revolucionario Dominicano (PRD)	1,108,400
3	Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)	294,033
4	Bloque Institucional Social Demócrata (BIS)	98,278
5	Partido Alianza por la Democracia (APD)	84,566
6	Partido de Unidad Nacional (PUN)	44,720
7	Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP)	38,676
8	Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC)	32,223
9	Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC)	27,520
10	Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD)	24,714
11	Partido de la Unidad Democrática (UD)	18,898
12	Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC)	18,460
13	Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD)	14,037
14	Partido Renacentista Nacional (PRN)	11,087
15	Partido Humanista Dominicano (PHD)	5,303
16	Partido Revolucionario Independiente (PRI)	3,994
17	Partido Popular Cristiano (PPC)	3,383
18	Partido Alianza Social Dominicana (ASD)	1,043
19	Partido Demócrata Popular (PDP)	772
POR ORDEN DE RECONOCIMIENTO		FECHAS
20	Movimiento Independiente Unidad y Cambio (MIUCA)	18-01-00
22	Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)	29-08-05

TERCERO: DISPONER que en el caso del Municipio de Yaguate, Provincia San Cristóbal, los formularios y las boletas electorales diseñadas para la referida demarcación contendrán el recuadro correspondiente al Movimiento



Independiente de Yaguata, marcado con el número 21, en el caso de que dicha agrupación decida presentar candidaturas en el venidero proceso electoral de mayo 2006.

CUARTO: Ordenar la publicación y notificación de la presente Resolución conforme lo establece la ley.

Dada en Santo Domingo, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilles

Secretario General



RESOLUCIÓN SOBRE DELEGADOS POLÍTICOS ANTE LOS COLEGIOS ELECTORALES

NUM. 11/2006

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida mediante la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 7 de enero del 2003, regularmente reunida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artiles**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.

VISTA: La Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que el artículo 92 de la Constitución de la República establece que las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para reglamentar y juzgar de acuerdo con la ley.



CONSIDERANDO: Que la Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones, faculta a la Junta Central Electoral a dictar, mediante Resolución o Reglamento, cuantas medidas considere pertinentes para el desarrollo del proceso electoral.

CONSIDERANDO: Que el artículo 36 de la Ley Electoral vigente establece claramente que los miembros de los colegios deben ser electores y tener su residencia en el municipio donde tenga su asiento la Junta ante la cual sean acreditados.

CONSIDERANDO: Que los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley Electoral 275-97 regulan las funciones de los Delegados Políticos ante las diferentes instancias electorales, a saber: Junta Central Electoral, Juntas Electorales y Colegios Electorales.

CONSIDERANDO: Que es conveniente que los Delegados Políticos y sus suplentes estén identificados en los colegios electorales mediante el porte de un distintivo de un solo formato, en cuanto a tamaño y elementos.

Por tales motivos, en mérito de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias,

RESUELVE

PRIMERO: Establecer que los partidos políticos reconocidos a los cuales se le aprueben candidaturas para las próximas Elecciones Ordinarias Generales de los niveles Congressional y Municipal del 16 de mayo del año 2006, acreditarán sus delegados y suplentes ante cada Colegio Electoral existente en todo el territorio nacional.

SEGUNDO: Establecer que todo elector cuya Cédula de Identidad y Electoral indique en el dorso que es elector del **municipio madre** a partir del cual se procedió a la elevación de categoría por intermedio de una ley de alguno de los nuevos municipios donde funcionarán juntas electorales para el próximo proceso electoral, podrá ser acreditado como



delegado político o suplente por ante un colegio electoral del nuevo municipio y de conformidad a la tabla siguiente:

Municipio Madre	Nuevo Municipio	Fecha de Elevación
Azua	Pueblo Viejo	1-Mayo-2003
Azua	Sabana Yegua	1-Mayo-2003
Azua	Tábara Arriba	20-Enero-2004
Barahona	Fundación	16-Julio-2003
Barahona	Jaquimeyes	7-Julio-2004
Barahona	La Ciénaga	30-Julio-2004
Cambita Garabitos	Los Cacaos	2-Febrero-2004
Castillo	Eugenio María de Hostos	5-Marzo-2004
Duvergé	Cristóbal	25-Agosto-2003
Duvergé	Mella	22-Marzo-2004
Hondo Valle	Juan Santiago	9-Mayo-2005
La Romana	Villa Hermosa	21-Julio-2004
Padre las Casas	Guayabal	3-Agosto-2004
Distrito Nacional / Santo Domingo Este	San Antonio de Guerra	24-Febrero-2004
Distrito Nacional / Santo Domingo Este	Boca Chica	16-October-2001
Distrito Nacional / Santo Domingo Oeste	Los Alcarrizos	31-Enero-2005
Distrito Nacional / Santo Domingo Oeste	Pedro Brand	31-Enero-2005
Yamasá	Peralvillo	16-Junio-2004

TERCERO: Recomendar a los partidos o alianzas de partidos que preferiblemente escojan como delegados y suplentes de sus respectivas organizaciones a electores del colegio en el cual habrán de realizar su labor.

CUARTO: Establecer que la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Elecciones provea a los Partidos Políticos con candidaturas aprobadas, de **Distintivos de Delegados** especialmente diseñados para que sirvan como identificación de los delegados y suplentes ante cada colegio electoral. Este distintivo será presentado ante el Presidente del Colegio Electoral al momento de la instalación del mismo, debiendo entregar su Cédula de Identidad y Electoral y la



credencial, debidamente firmada por la autoridad competente del partido y sellada con el sello de la organización política.

Párrafo: A los delegados políticos y sus suplentes ante los colegios electorales, luego de presentar su **Distintivo de Delegado, su Credencial** y su cédula de identidad y electoral ante el Presidente del Colegio, se les colocará un **Precinto de Acreditación**, como señal de haberse acreditado correctamente y sin el cual no podrán ejercer el sufragio en dicho Colegio Electoral.

QUINTO: Los partidos aliados o coaligados, para la postulación de candidatos comunes, serán una sola entidad con una representación común ante la Junta Central Electoral, ante cada Junta Electoral de su dependencia y ante cada Colegio Electoral, en los niveles de elección y en las demarcaciones políticas electorales en que concurren aliados o coaligados. La conformación de dicha representación común podrá ser objeto de acuerdo entre los partidos aliados o coligados. Cuando la alianza o coalición sea total e idéntica en ambos niveles de elección, Congressional y Municipal, habrá un solo representante ante los órganos electorales. En caso distinto, cada alianza o coalición tendrá un representante por cada nivel de elección, aunque sea el mismo partido quien la personifique. En caso de alianzas parciales se permitirá la representación ante la Junta Central Electoral de los partidos que intervienen en la alianza o coalición y que no la personifiquen.

PARRAFO: No se considerarán como representaciones eolíticas válidas ante los colegios electorales figuras extrañas tales como “**Supervisores Políticos**” ni “**Fiscales Políticos**”.

SEXTO: Antes de comenzar la votación, el presidente del colegio verificará la disponibilidad de los materiales electorales necesarios para ejercer el sufragio. Seguidamente el presidente declarará que empieza la votación, siguiendo el orden de los electores en fila, tomando como referencia el ticket numerado.



Votarán al final los miembros y delegados que no se hayan ausentado y que no hayan adulterado su precinto de acreditación, sin el cual no podrán votar en el colegio por ante el cual están ejerciendo sus funciones.

SÉPTIMO: Ordenar que estas disposiciones sean comunicadas, tanto a los partidos y agrupaciones políticas como a las Juntas Electorales y los Colegios Electorales de los municipios de todo el país.

Dado en Santo Domingo, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés

Secretario General

RESOLUCIÓN SOBRE APROBACIÓN PACTOS DE ALIANZA

NÚM. 12-2006

La Junta Central Electoral, institución de Derecho Público establecida en la Constitución de la República y regida mediante la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, modificada por la Ley No. 2-2003 del 7 de enero del 2003, regularmente reunida en su sede principal, sita en la intersección formada por las avenidas Luperón y 27 de Febrero en Santo Domingo, frente a la “Plaza de la Bandera”, integrada por el **Dr. Luis Arias Núñez**, Presidente; **Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán**, Miembro; **Dr. Salvador Ramos**, Miembro; **Dr. Nelson José Gómez Arias**, Miembro; **Dr. Luis Nelson Pantaleón González**, Miembro; **Dr. Rafael Díaz Vásquez**, Miembro; **Dr. José Luis Tavárez Tavárez**, Miembro; **Dr. Roberto Rosario Márquez**, Miembro; **Dr. Ramón Hernández Domínguez**, Miembro; asistidos por el **Dr. Antonio Lockward Artiles**, Secretario General, dicta dentro de sus atribuciones legales la siguiente Resolución.

VISTA: La Constitución de la República.

VISTA: La Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.

VISTO: El Reglamento de Fusiones, Alianzas y Coaliciones de fecha 14 de febrero del 2006.

VISTO: El pacto de alianza suscrito por el Partido Popular Cristiano (PPC) y Partido Demócrata Popular (PDP).

VISTO: El pacto de alianza suscrito entre el Partido Revolucionario Independiente (PRI) y el Partido Humanista



Dominicano (PHD), otro con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), y otro con el Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA).

VISTOS: Los pactos de alianza suscritos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con los partidos políticos: Partido de la Unidad Nacional (PUN), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Renacentista Nacional (PRN), Partido Alianza Social Dominicana (ASD), Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA), y Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD).

VISTOS: Los pactos de alianza suscritos por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con los partidos políticos: Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Demócrata Popular (PDP) y Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC).

VISTOS: Los pactos de alianza suscritos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con los partidos políticos: Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Alianza por la Democracia (APD), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD).

VISTO: El pacto de alianza suscrito por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y el Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).

VISTO: El pacto de alianza suscrito por el Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) y el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

VISTA: La audiencia celebrada por el Pleno de la Junta Central Electoral con los Partidos Políticos reconocidos el día 6 de marzo del 2006, dando cumplimiento al Artículo 62 de la Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre del 1997 para la aprobación e impugnación de fusiones, alianzas y coaliciones sometidas por los partidos políticos ante la Junta Central Electoral.



VISTA: La Sesión Administrativa del Pleno de la Junta Central Electoral celebrada el 8 de marzo del año 2006 (Acta No.07/2006).

CONSIDERANDO: Que el Artículo 62 de la Ley Electoral número 275-97 del 21 de diciembre de 1997, establece la facultad de los partidos políticos para fusionarse, aliarse o coaligarse mediante procedimiento establecido por la propia Ley y los reglamentos que dicte la Junta Central Electoral para cada proceso electoral.

CONSIDERANDO: Que para las elecciones que tendrán lugar el 16 de mayo del 2006, el Reglamento de Fusiones, Alianzas y Coaliciones fue dictado en fecha 14 de febrero del 2006.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el referido Artículo 62 de la Ley Electoral No.275-97, la solicitud de aprobación de la alianza o coalición debe ser depositada en la Secretaría General de la Junta Central Electoral a más tardar setenta y cinco (75) días antes de la fecha señalada para las próximas Elecciones Generales Ordinarias Congresionales y Municipales, a celebrarse el 16 de mayo del año 2006, o sea, el 02 de marzo del año 2006 hasta las 12:00 p.m., acompañada de los documentos requeridos por el Artículo 19 del Reglamento de Fusiones, Alianzas y Coaliciones de fecha 14 de febrero del 2006.

CONSIDERANDO: Que el Partido Popular Cristiano (PPC) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 a las 1:00 p.m. un (1) pacto de alianza con el Partido Demócrata Popular (PDP).

CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Independiente (PRI) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 desde las 7:15 p.m. hasta las 11:30 p.m. sendos pactos: un (1) pacto de alianza con el Partido Humanista Dominicano (PHD); un (1) pacto de alianza con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC) y un (1) pacto de alianza con el Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA).



CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 desde las 7:51 p.m. hasta las 11:40 p.m. sendos pactos: un (1) pacto de alianza con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), un (1) pacto de alianza con el Partido de la Unidad Nacional (PUN), un (1) pacto de alianza con el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), un (1) pacto de alianza con el Partido Renacentista Nacional (PRN), un (1) pacto de alianza con el Partido Alianza Social Dominicana (ASD), un (1) pacto de alianza con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), un (1) pacto de alianza con el Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) y un (1) pacto de alianza con el Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD).

CONSIDERANDO: Que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 desde las 9:00 p.m. sendos pactos: un (1) pacto de alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC), un (1) pacto de alianza con el Partido Demócrata Popular (PDP) y un (1) pacto de alianza con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC).

CONSIDERANDO: Que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 desde las 9:00 p.m. hasta las 9:40 p.m. sendos pactos: un (1) pacto de alianza con el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), un (1) pacto de alianza con el Partido Alianza por la Democracia (APD), un (1) pacto de alianza con el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), un (1) pacto de alianza con el Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), un (1) pacto de alianza con el Fuerza Nacional Progresista (FNP) y un (1) pacto de alianza con el Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD)

CONSIDERANDO: Que el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 a las 11:00 p.m. un (1) pacto de alianza con el Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).



CONSIDERANDO: Que el Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) depositó en fecha 02 de marzo del 2006 a las 11:00 p.m. un (1) pacto de alianza con el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

CONSIDERANDO: Que los partidos políticos depositaron en tiempo hábil todos los documentos necesarios y han cumplido con los requerimientos establecidos por la Ley Electoral y el Reglamento de Fusiones, Alianzas y Coaliciones.

CONSIDERANDO: Que el Pleno de la Junta Central Electoral celebró audiencia con los Partidos Políticos reconocidos el día 6 de marzo del 2006, dando cumplimiento al Artículo 62 de la Ley Electoral 275-97, del 21 de diciembre del 1997 para la aprobación e impugnación de fusiones, alianzas y coaliciones sometidas por los partidos políticos, posterior a la cual solo el Delegado Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó objeciones sobre los aspectos de personificación de algunas alianzas y la pretendida autorización de un partido a otro para concertar alianzas.

CONSIDERANDO: Que el Pleno de la Junta Central Electoral en Sesión Administrativa celebrada el 8 de marzo del año 2006 (Acta No.07/2006) resolvió rechazar los planteamientos formulados por el Delegado Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en consecuencia, aprobar todos los pactos de alianza sometidos por los Partidos Políticos con las salvedades que correspondan.

La Junta Central Electoral, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el pacto de alianza parcial y con recuadro individual, suscrito entre el Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Demócrata Popular (PDP), mediante el cual los partidos aliados o coaligados presentarán candidaturas comunes en el nivel congresional para la provincia Independencia y para el nivel municipal en las demarcaciones de *La Descubierta, Postrer Río, Mella, Cristóbal, Duvergé y Jimaní*, y demás condiciones



establecidas en dicho Pacto de Alianza. El PPC personifica esta alianza.

SEGUNDO: Aprobar los tres (3) pactos de alianzas, suscritos por el Partido Revolucionario Independiente (PRI), con los partidos políticos: Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC) y Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA), y demás condiciones establecidas en dicho Pacto de Alianza. El PRI personifica esta alianza.

Los Pactos de alianzas contienen las siguientes especificaciones:

- a. Con el Partido Humanista Dominicano (PHD): La alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRI personifica esta alianza.
- b. Con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC): Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. La alianza es parcial en ambos niveles de elección, con candidatos comunes en la provincia de Santiago, para el nivel congresional y en los municipios de: *Santiago, Tamboril, Villa González, Licey al Medio y Villa Bisonó*. El PRI personifica esta alianza.
- c. Con el Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA): Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. La alianza es parcial solo en el nivel de elección congresional para candidatos comunes en la provincia de Peravia. El PRI personifica esta alianza. En el municipio de Baní, el MIUCA personifica la alianza.

TERCERO: Aprobar los seis (6) pactos de alianzas suscritos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con los partidos políticos: Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD), Partido Alianza por la Democracia (APD), Partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y Partido Fuerza Nacional Progresista



(FNP), así como las demás condiciones establecidas en cada Pacto de Alianza. El PLD personifica esta alianza.

Los pactos de alianzas contienen las siguientes especificaciones:

- a. Con el Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD): La alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales.
- b. Con el Partido Alianza por la Democracia (APD): La alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales.
- c. Con el Partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS): Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. La alianza es total para el nivel de elección congresional y parcial en el nivel municipal, con candidatos comunes en los municipios de: *Puerto Plata, Altamira, Moca, Tamboril, Villa González, Licey al Medio, San Francisco de Macorís, Fantino, Bonaó, Montecristi, Castañuelas, La Romana y El Peñón.*
- d. Con el Partido Unión Demócrata Cristiana (UIDC): La alianza es total para el nivel de elección congresional solamente y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales.
- e. Con el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD): La alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales.
- f. Con el Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP): La alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Ambos partidos acudirán en recuadro único.

CUARTO: Aprobar los ocho (8) pactos de alianzas suscritos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con los



partidos políticos: Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido de la Unidad Nacional (PUN), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Renacentista Nacional (PRN), Partido Alianza Social Dominicana (ASD), Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), Partido Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) y Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD), así como las demás condiciones establecidas en cada Pacto de Alianza.

Los pactos de alianzas contienen las siguientes especificaciones:

- a. Con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC): la alianza será con recuadros individuales y es parcial para ambos niveles de elección. Las candidaturas congresionales serán comunes y el PRD personifica la alianza para todas las provincias excepto las siguientes: *Distrito Nacional, Santo Domingo, Salcedo, La Vega, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Barahona, Elías Piña y San Cristóbal*, en las que el PRSC personificará esta alianza a nivel congresional. Los partidos acuerdan no acudir aliados en las provincias siguientes: *Samaná, Monseñor Nouel, La Altagracia, Independencia y Peravia*. Las candidaturas municipales serán comunes y el PRD personifica la alianza para todos los municipios excepto los siguientes: *Boca Chica, Pedro Brand, Bayaguana, Yamasá, Villa Isabela, Gaspar Hernández, Santiago, Villa Bisonó, San Francisco de Macorís, Jarabacoa, Villa La Mata, Maimón, Partido, El Pino, Villa Vásquez, Los Llanos, Ramón Santana, Quisqueya, Guaymate, Villa Hermosa, El Valle, , Cabral, Polo, El Peñón, Jaquimeyes, Pedernales, Sabana Yegua, Las Yayas de Viajama, Tábara Arriba, Las Charcas, Bánica, Juan Santiago, Juan de Herrera, Villa Altagracia, Los Cacaos, San Gregorio de Nigua, Sabana Larga, Villa Jaragua y Los Ríos, donde personifica la alianza el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)*. Los partidos acuerdan no acudir aliados en los municipios siguientes:



Peralvillo, Puerto Plata, Imbert, Tamboril, Jánico, San José de las Matas, Villa González, Samaná, Sánchez, Las Terrenas, Constanza, Cotuí, Mao, Esperanza, Laguna Salada, San Ignacio de Sabaneta, Monción, Villa Los Almácigos, Guayubín, Higüey, San Rafael del Yuma, Jimaní, Duvergé, La Descubierta, Postrer Río, Mella, Cristóbal, Baní, Nizao, Comendador, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán y Yaguatae.

- b. Con el Partido de la Unidad Nacional (PUN), la alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRD personifica esta alianza.
- c. Con el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC): la alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRD personifica esta alianza.
- d. Con el Partido Renacentista Nacional (PRN), la alianza es total para el nivel de elección municipal solamente y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRD personifica esta alianza.
- e. Con el Partido Alianza Social Dominicana (ASD) la alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRD personifica esta alianza.
- f. Con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), la alianza es parcial para ambos niveles de elección. Las candidaturas serán comunes excepto en las siguientes demarcaciones: provincia de *Santiago* para el nivel congresional y para el nivel municipal se excluyen los siguientes municipios: *Santiago, Tamboril, Licey al Medio, Jánico, San José de las Matas, Villa González, Villa Bisonó, Neyba y Villa Altagracia*. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRD personifica esta alianza.



- g. Con el Partido Movimiento, Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) la alianza es parcial para el nivel de elección municipal, con candidaturas comunes en los municipios de: *Nagua, La Vega, Hato Mayor del Rey, Duvergé y Yaguajay*. Los recuadros de estos partidos aliados serán individuales. El PRD personifica esta alianza.
- h. Con el Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD): la alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Ambos partidos acudirán con recuadros separados. El PRD personifica esta alianza.

QUINTO: Aprobar los tres (3) pactos de alianzas suscritos por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con los partidos políticos: Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Demócrata Popular (PDP) y Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), así como las demás condiciones establecidas en cada Pacto de Alianza. Los pactos de alianzas contienen las siguientes especificaciones:

- a. Con el Partido Demócrata Popular (PDP), la alianza es total para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. Ambos partidos acudirán con recuadros individuales. El PRSC personifica esta alianza.
- b. Con el Partido Popular Cristiano (PPC), la alianza es parcial para ambos niveles de elección y para todo el territorio nacional. El PRSC personifica esta alianza en todo el territorio nacional donde concurren aliados, excepto en la provincia de Independencia, donde el PPC encabeza la alianza a nivel congresional, así como tampoco en los municipios: *Jimaní, Duvergé, La Descubierta, Postrer Río, Mella, Cristóbal, Neyba y La Romana*. Ambos partidos acudirán con recuadros individuales.
- c. Con el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), la alianza es parcial para el nivel de elección municipal. El PRSC personifica esta alianza y presentarán candidaturas en los municipios: *Bayaguana, Yamasá, Jánico, San José de las Matas, Villa Hermosa y Villa Altagracia*. Ambos partidos acudirán con recuadros individuales.



SEXTO: Aprobar el pacto de alianza suscrito por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) con el Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), así como las demás condiciones establecidas en cada Pacto de Alianza.

El pacto de alianza contiene las siguientes especificaciones:

- a. La alianza es parcial para el nivel de elección municipal y con candidaturas comunes en: *Santo Domingo Oeste, Luperón, Villa Isabela, Gaspar Hernández, Jamao Al Norte, Villa Riva, Hostos, Arenoso, Río San Juan, El Factor, Constanza, Villa Vásquez, Las Matas de Santa Cruz, Consuelo, Quisqueya, Miches, San Rafael del Yuma, Vicente Noble, Paraíso, Tamayo, Galván, Jimaní, Duvergé, La Descubierta, Postrer Río, Cristóbal, El Llano, Villa Altigracia y Yaguata*. El PRSD personifica esta alianza en estos municipios. Para los municipios siguientes de: *Guananico, Cayetano Germosén, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Pimentel, Castillo, Dajabón, Restauración, Loma de Cabrera, Partido, El Pino, Pepillo Salcedo, Santa Cruz del Seibo, Higüey, Cabral, Enriquillo, Polo, Las Salinas, La Ciénaga, Los Ríos, Mella, Comendador, Pedro Santana, Hondo Valle, El Cercado, Bohechío, Sabana Grande de Palenque, Cambita Garabito y Los Cacaos*, el BIS encabeza esta alianza. Ambos partidos acudirán con recuadros individuales.

SEPTIMO: Aprobar el pacto de alianza suscrito por el Partido Movimiento, Independencia, Unidad y Cambio (MIUCA) con el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), así como las demás condiciones establecidas en cada Pacto de Alianza. El pacto de alianza contiene las siguientes especificaciones:

- a. La alianza es parcial para ambos niveles de elección y con candidaturas comunes en la provincia de *San Juan*, para el nivel congresional; y en los municipios: *Sabana Grande de Boyá, Salcedo, Cotuí y San Juan de la Maguana*. Ambos partidos acudirán con recuadros individuales. El MIUCA personifica esta alianza.



b.El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), personificará en las provincias Monte Plata, Azua, La Romana, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Salcedo y Espaillat. Asimismo en los municipios: Bayaguana, Azua, Los Hidalgos, Moca, San Felipe de Puerto Plata, Guaymate, Haina, Consuelo, Sosúa, Padre Las Casas, Pueblo Viejo, Estebanía, Peralta, Fantino, Villa La Mata, Cevicos, Altamira, Villa Isabela, Imbert, Luperón y Guanatico.

OCTAVO: Se ordena la notificación de esta resolución a los partidos políticos reconocidos y su publicación según lo determina la Ley.

Dada en el Distrito Nacional, Capital de República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil seis (2006).

Dr. Luis Arias Núñez

Presidente de la Junta Central Electoral

Dr. Salvador Ramos

Miembro

Dr. Nelson José Gómez

Miembro

Dra. Rafaelina Peralta de Guzmán

Miembro

Dr. Luis Nelson Pantaleón González

Miembro

Dr. Rafael Díaz Vásquez

Miembro

Dr. José Luis Tavarez Tavarez

Miembro

Dr. Roberto Rosario Márquez

Miembro

Dr. Ramón Hernández Domínguez

Miembro

Dr. Antonio Lockward Artilés

Secretario General